

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR - MATRIZ

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

**ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LOS
PORCENTAJES DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
CONSTANTES QUE SE DEBEN APLICAR EN LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN
ENTRE ECUADOR Y CANADÁ, MÉXICO, CHILE, BRASIL Y
URUGUAY**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA - CPA**

ALICIA HERMINIA ORTIZ SALAZAR

DIRECTOR: CPA. ING. COM. W. ARMANDO LITUMA D. MGTR.

QUITO, ABRIL 2016

DIRECTOR:

CPA. ING. COM. W. Armando Lituma D. Mgtr.

INFORMANTES:

Dra. Ulianova Maldonado

Dr. Washington Del Salto

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de titulación a mi mama Sandra Salazar por ser un pilar muy importante en mi vida, por ayudarme incondicionalmente alcanzar cada una de mis metas en mi vida como en mi vida estudiantil y profesional. Gracias mami por todo...

Alicia

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi papa y mi hermana por estar acompañándome en esta etapa tan primordial de mi vida, y por toda su ayuda a lo largo de esta.

Agradezco a mi profesor Armando Lituma por enseñarme y ayudarme en este trabajo y en las horas de clases que me incentivo a elegir el tema.

Alicia

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN, 1

1 INTRODUCCIÓN A LA FISCALIDAD INTERNACIONAL, 3

1.1 LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL, 3

1.1.1 Doble imposición jurídica internacional, 4

1.1.2 Doble imposición económica internacional, 4

1.1.3 Medidas para eliminar la doble imposición internacional, 5

1.1.3.1 Soluciones Unilaterales, 5

1.1.3.2 Soluciones Bilaterales, 7

1.1.3.3 Soluciones Multilaterales, 8

1.1.4 Los convenios para evitar la doble imposición internacional, 8

1.1.5 Convenios existentes entre el Ecuador y Canadá, México, Chile, Brasil, Uruguay, 9

1.1.5.1 Convenio entre Ecuador y Canadá, 9

1.1.5.2 Convenio entre Ecuador y México, 10

1.1.5.3 Convenio entre Ecuador y Chile, 10

1.1.5.4 Convenio entre Ecuador y Brasil, 10

1.1.5.5 Convenio entre Ecuador y Uruguay, 11

2 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS, 12

2.1 CERTIFICADOS DE RESIDENCIA FISCAL, 12

2.1.1 Certificado de residencia fiscal en el Ecuador, 13

2.1.2 Certificado de residencia fiscal en Canadá, 14

2.1.3 Certificado de residencia fiscal en México, 15

2.1.4 Certificado de residencia fiscal en Chile, 16

2.1.5 Certificado de residencia fiscal en Brasil, 17

2.1.6 Certificado de residencia fiscal en Uruguay, 18

2.2 CERTIFICADOS DE PERTINENCIA DE GASTOS, 19

2.3 CONSULARIZACIÓN DE DATOS, 21

3 APLICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ECUADOR Y CANADÁ, MÉXICO, CHILE, BRASIL, URUGUAY, 24

3.1 RENTAS DE LOS BIENES INMUEBLES, 25

3.2 BENEFICIOS EMPRESARIALES, 29

3.3 TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO Y FLUVIAL, 33

3.4 EMPRESAS ASOCIADAS, 34

3.5 DIVIDENDOS, 35

3.5.1 Dividendos pagados desde el Ecuador hacia Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay, 36

3.5.2 Dividendos recibidos en el Ecuador provenientes de Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay, 38

- 3.6 INTERESES, 39
- 3.7 CÁNONES O REGALÍAS, 55
- 3.8 GANANCIAS DE CAPITAL, 62
- 3.9 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES, 64
- 3.10 SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES, 68
- 3.11 OTRAS RENTAS, 69

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 71

- 4.1 CONCLUSIONES, 71
- 4.2 RECOMENDACIONES, 72

REFERENCIAS, 73

ANEXOS, 76

- Anexo 1: Convenio Canadá, 77
- Anexo 2: Convenio México, 108
- Anexo 3: Convenio Chile, 133
- Anexo 4: Convenio Brasil, 163
- Anexo 5: Convenio Uruguay, 185

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Convenios de doble tributación, 9
Tabla 2: Total de liquidación – Rentas de los bienes inmuebles, 26
Tabla 3: Gross up - Rentas de los bienes inmuebles, 27
Tabla 4: Liquidación de compras, 27
Tabla 5: Facturas Ezquerro y Catalá, 28
Tabla 6: Cálculo de ahorro neto - Rentas de los bienes inmuebles, 29
Tabla 7: Total de liquidación – Beneficios empresariales, 31
Tabla 8: Gross up – Beneficios empresariales, 31
Tabla 9: Total Honorarios profesionales Sr. Da Silva, 32
Tabla 10: Cálculo del ahorro neto - Beneficios empresariales, 33
Tabla 11: Porcentajes de Retención - Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay, 37
Tabla 12: Tabla de Amortización Total – Inversionista, 42
Tabla 13: Tabla de Amortización – Año 2015, 44
Tabla 14: Retención del 15%, 44
Tabla 15: Calculamos el gross up – Aplicando el convenio, 46
Tabla 16: Calculamos el gross up – Sin la aplicación del convenio, 46
Tabla 17: Comparativo con la aplicación y sin la aplicación del convenio del 15% de retención, 47
Tabla 18: Ahorro Neto del 15% aplicando el convenio, 48
Tabla 19: Comparativo con la aplicación y sin la aplicación del convenio con aprobación de la retención, 49
Tabla 20: Tabla de Amortización – BANAMEX, 50
Tabla 21: Retención del 10%, 51
Tabla 22: Calculamos el gross up – Aplicando el convenio – BANAMEX, 52
Tabla 23: Calculamos el gross up – Sin la aplicación del convenio – BANAMEX, 52
Tabla 24: Comparativo con la aplicación y sin la aplicación del convenio del 10% de retención, 53
Tabla 25: Ahorro Neto del 10% aplicando el convenio, 54
Tabla 26: Comparativo con la aplicación y sin la aplicación del convenio con aprobación de la retención, 55
Tabla 27: Valor a pagar aplicando el convenio, 57
Tabla 28: Calculamos el gross up – Aplicando el convenio – 15 % de retención, 58
Tabla 29: Valor a pagar sin aplicar el convenio, 59
Tabla 30: Calculo del Gross up – Regalias, 59
Tabla 31: Cánones, 60
Tabla 32: Ahorro Neto del 10% aplicando el convenio, 60
Tabla 33: Cánones, ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 34: Cálculo de ahorro neto – Cánones, 61
Tabla 35: Cálculo total de liquidación - Servicios personales independientes, 66
Tabla 36: Cálculo del Gross up - Servicios personales independientes, 66
Tabla 37: Total Factura Dr. Peralta, 67

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 1: Ficha de requisitos de residencia fiscal, 13
- Figura 2: Certificado de residencia fiscal en Canadá, 14
- Figura 3: Certificado de residencia fiscal en México, 15
- Figura 4: Certificado de residencia fiscal en Chile, 16
- Figura 5: Certificado de residencia fiscal en Brasil, 17
- Figura 6: Certificado de residencia fiscal en Uruguay, 18
- Figura 7: Tipo de Trámite, 23

RESUMEN EJECUTIVO

El Ecuador al ser un país exportador e importador del comercio de forma global, debe sujetarse a varias normativas como es el caso de convenios internacionales de doble tributación para que el accionista tenga mayor beneficio tributario y evite la doble tributación.

En este trabajo de titulación que se realiza es para brindar el conocimiento de los convenios internacionales de doble tributación entre Ecuador con Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay; para el accionista ecuatoriano, de tal manera le sirva para sus transacciones comerciales en el exterior sujetándose a estos convenios internacionales.

En este trabajo tomamos en cuenta cuatro capítulos claves y precisos. El primer capítulo detalla la definición de la doble imposición, los convenios internacionales para evitar la doble tributación con los países mencionados.

En el segundo capítulo explica de los requisitos que necesitaremos para la aplicación de los convenios internacionales para evitar la doble tributación.

El tercer capítulo es la aplicación de cada artículo de los convenios internacionales de Ecuador con Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay con varios ejemplos para su mejor comprensión.

El cuarto capítulo es de conclusiones y recomendaciones acerca de nuestra investigación desarrollada, haciendo hincapié al conocimiento de estos convenios internacionales para evitar la doble tributación para el beneficio del accionista ecuatoriano.

INTRODUCCIÓN

El Ecuador es un país exportador e importador en materia del comercio mundial, por lo tanto debe regirse bajo distintas normas y procedimientos de naturaleza financiera, aduanera, calidad y por tributario.

En el esquema tributario, nuestro país posee varios Convenios Internacionales para evitar la doble tributación con varios países de América, Europa y Asia. Logrando de esta manera tener beneficios relevantes.

Esta investigación está realizada hacia los contribuyentes o accionistas ecuatorianos de tal modo que cuenten con un instrumento de régimen de retenciones en la fuente de impuesto a la renta por transacciones comerciales, de servicios o financieros como consta en los Convenios tributarios Internacionales. De esta manera el trabajo de investigación realiza una guía fácil y sencilla sobre los porcentajes de retención de impuesto a la renta acerca de los Convenios Internacionales para evitar la doble tributación entre Ecuador y Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay; obteniendo un beneficio tributario cuando este se aplique para cada país.

En el primer capítulo comienza con una corta introducción acerca de los Convenios tributarios internacionales. En este punto se da a conocer los varios conceptos de doble imposición, las medidas para eliminar la doble imposición internacional. También se indica un listado de todos los Convenios Internacionales para evitar la doble tributación que el

Ecuador ha firmado; por otra parte se da un preliminar de los Convenios Internacionales de Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay; indicando datos importantes como su vigencia con el Ecuador.

El segundo capítulo consiste en los requisitos y procedimientos que este expuesto en cada artículo de los Convenios Internacionales y se encuentre constituida en la legislación ecuatoriana como los certificados de residencia fiscal, certificados de pertinencia de gastos y legalización de documentos.

El siguiente capítulo examina los artículos más relevantes de los convenios internacionales suscritos para evitar la doble tributación entre Ecuador con Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay. De esta manera realizamos ejercicios prácticos de varios artículos para entender su procedimiento, su beneficio y la ayuda que brinda cada convenio internacional para el o los contribuyentes al momento de realizar una transacción comercial, de servicios o financiera de aspecto internacional.

Al final se obtiene las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.

1 INTRODUCCIÓN A LA FISCALIDAD INTERNACIONAL

Hoy en día nos damos cuenta que vivimos en un mundo lleno de negocios a nivel internacional entre varias organizaciones; por lo que se ha ido realizando varios convenios internacionales como el de doble imposición entre varios Estados; para beneficios tributarios. En este trabajo nos enfocaremos en los convenios de doble tributación de países entre Ecuador con Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay.

“Hoy resulta prácticamente imposible sustraerse del denominado fenómeno de la globalización o mundialización de las economías. Es verdad que no es la primera vez que se produce una tendencia económica en ese sentido, a finales del siglo del XIX y albores del XX, ya se produjo un fenómeno similar, sin embargo la magnitud del fenómeno actual supera con creces cualquier proceso anterior.” (Vallejo Aristizábal & Maldonado López)

1.1 LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

El fenómeno de la doble imposición es una consecuencia directa de la globalización de las economías y la internacionalización de las transacciones mercantiles como describe los autores Ferrer Grau y García López.

“La doble imposición internacional es el fenómeno dado por la sujeción a gravamen de una misma renta en más de un Estado. Se aplica únicamente a los impuestos similares o idénticos, sobre un mismo hecho imponible, y la carga tributaria recae en un mismo momento o en un solo sujeto.” (Ferrer Grau & García López, 2012)

1.1.1 Doble imposición jurídica internacional

Cuando la misma renta es gravada dos veces por dos o más países, la persona es sometida a realizar el pago de impuestos en los dos estados distintos y por el mismo concepto.

Es importante mencionar que el término “persona” utilizado en ambos modelos de convenio se refiere tanto a las personas físicas, como a las sociedades y a todo tipo de agrupación de personas; por lo que los principios de residencia y establecimiento permanente se aplican para todos ellos.

1.1.2 Doble imposición económica internacional

Cuando una misma renta es gravada dos veces o bien por el mismo estado o a distintas personas pero por distintas personas. Este fenómeno ocurre con frecuencia en los grandes grupos corporativos internacionales.

Un ejemplo cuando una agencia de un grupo corporativo somete sus utilidades al impuesto por beneficios del país en el que opere y posteriormente la casa matriz someta nuevamente esos mismos beneficios al pago de impuestos en su país de residencia (distinto del primero) cuando los reciba a través de dividendos o por el simple hecho de consolidar estados financieros para reportar los beneficios totales del grupo económico.

1.1.3 Medidas para eliminar la doble imposición internacional

En la eliminar de la doble imposición internacional existen varias técnicas o formas con las que resulta la eliminación de este mismo, convirtiéndose en perfectas soluciones a nivel internacional de manera global, con sus respectivos beneficios tributarios. Aquí señalamos y describimos los métodos para la eliminar la doble tributación;

1.1.3.1 Soluciones Unilaterales

Cada Estado puede evitar unilateralmente la doble tributación, quiere decir que por su misma legislación nacional; respetando la soberanía de cada Estado.

En el caso de Ecuador este principio se aplica por medio del artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que expide el tratamiento sobre las rentas del extranjero, manifestando lo siguiente:

Art. 49.- Tratamiento sobre rentas del extranjero.- Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, que han sido sometidas a imposición en otro Estado, se excluirán de la base imponible en Ecuador y en consecuencia no estarán sometidas a imposición. En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no se aplicará la exención y las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente.

En el Ecuador este mecanismo también es utilizado pues la normativa tributaria así lo permite, sin embargo es aplicable únicamente para las rentas obtenidas en regímenes fiscales de menor imposición, puesto que en regímenes de igual o mayor imposición las rentas están exentas; el artículo 136 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su literal b) expresa lo siguiente:

b) Salvo los casos determinados en este artículo, en el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o de países donde dichas rentas no hayan sido sometidas a gravamen, éstas formarán parte de la renta global para el cálculo del impuesto, constituyéndose el impuesto pagado, de haberlo, en crédito tributario.

Se determina que Estados son considerados regímenes preferentes o de menor tributación por medio del Servicio de Rentas Internas, a través de la resolución No. NAC-DGERCGC15-00000052 publicada en el segundo Suplemento del Registro Oficial 430 del 3 de febrero de 2015, emite los lineamientos a tomar en cuenta (Servicio de Rentas Internas, 2008). El artículo 4 de la resolución en cuestión manifiesta lo siguiente:

Art. 4.- Tendrán el mismo tratamiento de paraíso fiscal, aquellas jurisdicciones cuya tasa efectiva de impuesto sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica o análoga sea inferior a un sesenta por ciento (60%) a la que corresponda en el Ecuador sobre las rentas de la misma naturaleza de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, durante el último periodo fiscal, según corresponda.

Tomando en cuenta la tarifa vigente desde el 2014 para el impuesto a la renta de sociedades, del 22%, las rentas obtenidas en estados en los que la tarifa de impuesto a la renta sea menor al 13.2% formarán parte de la base

imposible y se someterán al impuesto ecuatoriano, con la particularidad adicional de que el impuesto que se haya pagado anteriormente en el régimen de menor imposición constituirá un crédito tributario de impuesto a la renta en Ecuador.

1.1.3.2 Soluciones Bilaterales

Consisten en acuerdos, tratados o convenios que se celebran entre dos administraciones tributarias que buscan eliminar las discordancias, ya sea por haber adoptado criterios de asignación diferentes en cuanto a los tributos o por diferir en las definiciones de los elementos que intervienen en la tributación; de manera que se elimine la doble imposición originada.

Se puede aplicar esta solución por medio de la utilización de convenios para evitar la doble imposición; este método de solución bilateral permite la distribución de las atribuciones impositivas entre los países en conflicto. Este tipo de acuerdos, convenios o tratados son mecanismos de gran ayuda contra la evasión fiscal.

En los convenios para evitar la doble imposición su función es evitar la doble tributación en los impuestos referentes a la renta o al patrimonio. Para el Ecuador los convenios firmados afectan solamente al impuesto a la renta; mientras que el impuesto no grava al patrimonio porque no existe.

Las Naciones Unidas y la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) logra facilitar la negociación y elaboración de

convenios para evitar la doble tributación, han elaborado modelos de dichos convenios; dentro de dichos modelos se separan los tipos de rentas tratados por artículos, además se incluyen varias recomendaciones, comentarios y criterios a seguir en las negociaciones y aplicación de los convenios.

1.1.3.3 Soluciones Multilaterales

Con este método se utiliza los convenios de doble imposición que se celebran entre varios Estados que comparten las mismas características como: se encuentren los países en una misma área geográfica, sus objetivos y dificultades sean similares; y se encuentren los mismos propósitos para una solución a los convenientes fiscales.

Como ejemplo para aplicar la solución Multilateral, para el tratado de doble imposición es el convenio firmado entre la CAN (Comunidad Andina de Naciones) está conformada por; Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Todos los artículos de este convenio se rigen en las transacciones mantenidas entre todos los países miembros.

1.1.4 Los convenios para evitar la doble imposición internacional

Presentamos un listado de los convenios firmados ordenados cronológicamente:

Tabla 1: Convenios de doble tributación

CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN	Alemania (1987)
	Brasil (1988)
	Italia (1990)
	Francia (1992)
	España (1993)
	Suiza (1995)
	Rumania (1997)
	México (2000)
	Canadá (2002)
	Chile (2004)
	Bélgica (2005)
	CAN (2006)
	Uruguay (2012)
	Corea del Sur (2013)
	China (2014)
	Singapur (2015)

1.1.5 Convenios existentes entre el Ecuador y Canadá, México, Chile, Brasil, Uruguay

1.1.5.1 Convenio entre Ecuador y Canadá

Se celebra en Quito, el 28 de junio de 2001 el Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta y el patrimonio. Publicado en el Registro Oficial N° 484 de 31 de diciembre de 2001.

El documento completo del convenio consta en el anexo N° 1.

1.1.5.2 Convenio entre Ecuador y México

Se celebra, el 30 de julio de 1992 el Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta y el patrimonio. Publicado en el Registro Oficial N° 281 de 9 de marzo de 2001.

El documento completo del convenio consta en el anexo N° 2.

1.1.5.3 Convenio entre Ecuador y Chile

Se celebra en Quito, el 26 de agosto de 1999 el Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y la Republica de Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta y el patrimonio. Publicado en el Registro Oficial N° 189 de 14 de octubre de 2003.

El documento completo del convenio consta en el Anexo N° 3.

1.1.5.4 Convenio entre Ecuador y Brasil

Se celebra en Quito, el 26 de mayo de 1983 el Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y la República Federativa del Brasil para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de

impuesto a la renta y el patrimonio. Publicado en el Registro Oficial N° 865, de 2 de febrero de 1988.

El documento completo del convenio consta en el Anexo N° 4.

1.1.5.5 Convenio entre Ecuador y Uruguay

Se celebra en Quito, el 26 de mayo de 2011 el Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y la República Oriental del Uruguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta y el patrimonio. Publicado en el Registro Oficial N° 619; Lunes 16 de enero del 2012.

El documento completo del convenio consta en el Anexo N° 5.

2 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS

Para lograr los beneficios que se procede a realizar para los diferentes tipos de renta planteadas en el convenio se debe tomar en cuenta los procedimientos y cumplir con los requisitos establecidos. Los requisitos que se piden son independientes del artículo de cada convenio que se aplique y esta se cumpla en todos los aspectos.

Los requisitos deben ir ordenados cronológicamente según su momento de ocurrencia se pueden ubicar en primer lugar a la retención en la fuente el cual es un requisito indispensable al tratarse de pagos al exterior, de modo que dicho pago pueda ser deducible de impuesto a la renta. La deducibilidad del gasto se trata específicamente en el artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno que dice: “Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios y se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente...”.

2.1 CERTIFICADOS DE RESIDENCIA FISCAL

El certificado de residencia es el único documento que acreditara la condición de residente de otro Estado; emitido por las administraciones tributarias para certificar que un contribuyente es residente para efectos fiscales.

Su finalidad es acreditar el domicilio tributario del solicitante y la jurisdicción impositiva a la que se encuentra consecuentemente sometida el solicitante. Debe haber

permanecido en Ecuador por el lapso mínimo de 183 días consecutivos o no, dentro de un mismo año.

Los certificados de residencia fiscal de cada Estado se presentan a continuación con sus respectivos requisitos:

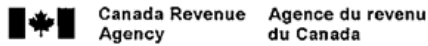
2.1.1 Certificado de residencia fiscal en el Ecuador

En el caso del Ecuador la ficha de requisitos de residencia fiscal la encontramos en el SRI de la siguiente manera:

SRI		FICHA DE REQUISITOS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
INFORMACIÓN GENERAL			
Tipo Trámite	Certificado de Residencia Fiscal		
Tipo Contribuyente	Persona Natural o Jurídica		
Unidad de Ingreso	Servicios Tributarios	Secretaría x	
REQUISITOS GENERALES PARA CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL			
Nombre del Requisito	Detalle del Requisito	Forma de Presentación	Características del Requisito
Documento de identificación	Cédula de identidad o de ciudadanía	Presentación Original	Si el trámite es solicitado por un tercero se debe incluir copia de este documento.
Pasaporte o visa		Presentación Original	
Documento de votación	Papeleta de votación	Presentación Original	Corresponde al certificado del último proceso electoral
Solicitud o Petición	Formulario de Certificado de Residencia Fiscal	Copia Simple	Corresponde al certificado del último proceso electoral
		Original y Copia	
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CERTIFICADOS DE RESIDENCIA FISCAL			
Nombre del Requisito	Detalle del Requisito	Forma de Presentación	Características del Requisito
Documento que justifique la solicitud	Contratos, facturas o documentos que sustenten la solicitud	Copia Simple	En el caso de existir convenio para evitar doble imposición
REQUISITOS PARA INGRESO POR TERCEROS			
Todo trámite ingresado por terceros deberá cumplir con los siguientes requisitos <u>adicionales</u> a los requisitos específicos detallados en la parte superior de este formulario			
Nombre del Requisito	Detalle del Requisito	Forma de Presentación	Características Requisitos
Documento de identificación	Cédula de Identidad	Original y Copia	En caso de que la solicitud no sea firmada por el contribuyente o representante legal
	Papeleta de Votación	Original y Copia	
	Poder General o Especial	Copia	

Figura 1: Ficha de requisitos de residencia fiscal

2.1.2 Certificado de residencia fiscal en Canadá



Tax Services Office
Saskatoon SK S7K 0A8

September 11, 2008

ATTENTION: SENIOR MANAGER, CORPORATE TAX
INC
STREET SW
CALGARY

Account Number
3761 RC0006

Dear Sir:

Re: Certification of Canadian residency for the tax year 2008
Tax agreement between Canada and Peru
Inc.

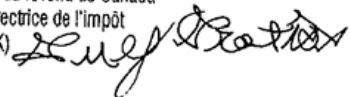
This is to certify that, based on available information, you are considered a resident of Canada for income tax purposes for the tax year noted above.

With this certification, the foreign authorities may apply the provisions of an existing tax agreement. This may reduce or eliminate foreign tax on foreign income for a resident of Canada.

Yours truly,


Guy Gracias
Taxpayer Services

Canada Revenue Agency/ Agence du revenu du Canada
Director Taxation/Directeur/Directrice de l'impôt
Saskatoon (SK)



Inc.
Corporate Tax
SEP 17 2008
File #

Canada

Saskatoon Tax Services Office
340 - 3rd Avenue N
Saskatoon SK S7K 0A8

Long Distance : 1-800-959-5525
Web site : www.cra.gc.ca

Figura 2: Certificado de residencia fiscal en Canadá

2.1.3 Certificado de residencia fiscal en México

2.1.4 Certificado de residencia fiscal en Chile

En Chile el SII es el encargado de emitir el respectivo formulario.



F 3462

DECLARACION JURADA PARA EFECTOS DE SOLICITAR CERTIFICADO SOBRE RESIDENCIA EN CHILE (A) O SITUACIÓN TRIBUTARIA (B)

IDENTIFICACION PETICIONARIO		REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE O RAZON SOCIAL PETICIONARIO	SOLUCION TRIBUTARIO	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SOLUCION TRIBUTARIO
DIRECCION			
CALLE	Nº	COMUNA	
CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX	

Solicita por la presente al Servicio de Impuestos Internos una certificación sobre:

A. Calidad de residente en Chile para el período tributario

Siendo el motivo de esta presentación:

- ☐ Acreditar residencia en Chile ante autoridad fiscal extranjera con la cual Chile mantiene convenio vigente para evitar la doble tributación.
- ☐ Otro (Indicar) : _____

Para cuyo efecto declara bajo juramento lo que sigue:

Posee domicilio o residencia en Chile.

El país donde se presentará el certificado es . El número de identificación tributaria (Tax_ID) asignado en el extranjero es (cuando corresponda).

Declara estar en conocimiento que por las rentas que obtenga en el extranjero podrá estar afecto a impuestos en Chile.

Firma peticionario o su Representante Legal

Fecha

B. Situación tributaria de las rentas de fuente chilena para el período tributario

Siendo el motivo de esta presentación:

- ☐ Acreditar rentas obtenidas en Chile ante autoridad fiscal extranjera con la cual Chile mantiene convenio vigente para evitar la tributación.
- ☐ Otro (Indicar) : _____

Para cuyo efecto declara bajo juramento lo que sigue:

Posee domicilio o residencia en Chile ☐ SI ☐ NO

El país donde se presentará el certificado es . El número de identificación tributaria (Tax_ID) asignado en el extranjero es (cuando corresponda).

Ha recibido rentas de fuente chilena que ascienden a \$ para el período requerido.

El número de Rut de su agente retenedor en Chile es - (cuando corresponda).

Figura 4: Certificado de residencia fiscal en Chile

2.1.5 Certificado de residencia fiscal en Brasil

Este formulario se encuentra en el “MINISTÉRIO DA FAZENDA”.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
ATESTADO DA AUTORIDADE FISCAL BRASILEIRA BRASILIAN TAX AUTHORITY CERTIFICATE ATTESTATION DE L'AUTORITÉ FISCALE BRÉSILIENNE		
NÚMERO / NUMBER / NUMERO <input type="text"/>		
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE / TAXPAYER'S IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUÍNTES (EMPLOYEE'S IDENTIFICATION NUMBER - NUMÉRO D'ENREGISTREMENT DES CONTRIBUABLES) <input type="text"/>		
OCUPIÇÃO PRINCIPAL OU RAMO DE ATIVIDADE BUSINESS ACTIVITY / ACTIVITÉ PRINCIPALE <input type="text"/>		
2. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO / INCOME BENEFICIARY / BÉNÉFICIAIRE DU REVENU NOME OU RAZÃO SOCIAL - FULL NAME OR COMPANY NAME - NOM OU RAISON SOCIALE <input type="text"/>		
3. ENDEREÇO / ADDRESS / ADRESSE LOGRADOURO (rua, avenida, etc) / STREET / RUE <input type="text"/>		
BARRIO DISTRITO / DISTRICT / QUARTIER <input type="text"/>		
MUNICÍPIO / CITY / VILLE <input type="text"/>		
CEP / ZIP CODE / CODE POSTALE <input type="text"/>		
UF / STATE / DÉPARTEMENT <input type="text"/>		
PAÍS / COUNTRY / PAYS <input type="text"/>		
4. PARA FINS DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA FOR INCOME TAX REDUCTION OR EXEMPTION PURPOSE AUX FINS DE RÉDUCTION OU EXEMPTION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ESPÉCIE DE RENDIMENTO / TYPE OF INCOME / TYPE DE REVENU <input type="text"/>		
DE ACORDO COM O ARTIGO / PARAGRÁFO ARTICLE - SELON L'ARTICLE <input type="text"/>		
DA CONVENÇÃO ENTRE / DE CONVENTION BETWEEN / DE LA CONVENTION ENTRE PAÍSES / ENTRE PAÏS DO BRASIL / DU BRÉSIL COUNTRY / PAYS AND BRAZIL / ET LE BRÉSIL		
5. PAGADOR DO RENDIMENTO / PAYING ESTABLISHMENT / ÉTABLISSEMENT PAYEUR NOME OU RAZÃO SOCIAL - NAME OR COMPANY NAME - NOM OU RAISON SOCIALE <input type="text"/>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL IDENTIFICATION NUMBER / NUMÉRO D'ENREGISTREMENT <input type="text"/>		
6. ENDEREÇO (PAÍS) / ADDRESS (COUNTRY) / ADRESSE (PAYS) <input type="text"/>		
7. RENDIMENTO / INCOME / REVENU VALOR DO RENDIMENTO BRUTO - GROSS AMOUNT OF INCOME - MONTANT BRUT DU REVENU <input type="text"/>		
PERÍODO DE REFERÊNCIA / REFERENCE PERIOD / PÉRIODE DE RÉFÉRENCE <input type="text"/>		
DATA / DATE / DATE <input type="text"/>		
ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO / SIGNATURE OF THE BENEFICIARY / SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE <input type="text"/>		
O BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO ACIMA NOMEADO É RESIDENTE OU DOMICILIADO NO BRASIL. I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE NAMED INCOME BENEFICIARY IS A RESIDENT OF BRAZIL. LE BÉNÉFICIAIRE DU REVENU NOMMÉ CI-DESSUS EST UN RÉSIDENT DU BRÉSIL.		
DELEGACIA (CPF, Cemit ou Dect) DO DOMÍLIO TRIBUTÁRIO / BRAZILIAN TAX AUTHORITY / AUTORITÉ FISCALE BRÉSILIENNE <input type="text"/>		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO / NAME / NOM <input type="text"/>		
CARGO / POSITION / POSTE <input type="text"/>		
DATA / DATE / DATE <input type="text"/>		
ASSINATURA / SIGNATURE / SIGNATURE <input type="text"/>		
MF/RFB/SRRF 8º REQUERAT/SP EM 8 / 11 / 2017		

Aprovado pela RFB/RFB de 18/02/2017 DE 2017
 Approved by RFB/RFB de 18/02/2017 DE 2017
 Approuvé par la RFB/RFB de 18/02/2017 DE 2017

Figura 5: Certificado de residencia fiscal en Brasil

2.1.6 Certificado de residencia fiscal en Uruguay

En Uruguay se consta como el formulario 5200 que se procede a obtenerlo de la página DGI quien también lo emite.

SOLICITUD						5200	DGI	
CERTIFICADO PARA PODER JUDICIAL						VERSIÓN 01		DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Art. 15 Título 7 TO 1996 - Dto. 148/97 Art. 14								
RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN								
1	NOMBRE O DENOMINACIÓN					TIPO DOC	21	
						NÚMERO	2	
						PAÍS	22	
						FECHA DE SOLICITUD		
RUBRO 2 - INMUEBLES ARRENDADOS								
RUBRO	DEPARTAMENTO	URBANO RURAL	LOCALIDAD	BLOQUE	UNIDAD	NOMBRE DEL ASISTENTE DE RETENCIÓN	% EN EL ALQUILER	IMPORTE IMPREGNAR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Contribuyente exonerado						NO	SI	Vencimiento Constancia F.Nº 6500
RUBRO 3 - OTRAS RENTAS CATEGORÍA I								
Contribuyente de otras rentas categoría I						NO	SI	En caso afirmativo, declaro estar al día en el pago del impuesto correspondiente
RUBRO 4 - RESPONSABLE								
El que suscribe						en su calidad de	RRI	se responsabiliza de que la
información declarada es correcta y correcta de acuerdo a lo que establecen las normas tributarias y penales.								
C.I.	RRI	FIRMA						
RUBRO 5 - CONSTANCIA DE RECEPCIÓN								

BORRAR DATOS

IMPRIMIR

Figura 6: Certificado de residencia fiscal en Uruguay

2.2 CERTIFICADOS DE PERTINENCIA DE GASTOS

Acorde al artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno si un pago o crédito en cuenta realizado no constituye un ingreso gravado en el Ecuador, el gasto deberá ser certificado por una firma de auditores independientes por medio de un informe. Dicha certificación se referirá en lo que respecta a la pertinencia del gasto realizado en el exterior y su congruencia con la actividad desarrollada, dicho informe también certificará la cuantía del gasto y deberá explicar claramente los motivos por los cuales dicho gasto no se constituye un ingreso gravado en el Ecuador (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004).

Para cumplir con esta disposición la firma de auditores independientes que se contrate para tal efecto deberá contar con sucursales, filiales o representación tanto en el país en el que se haya efectuado el gasto como en Ecuador. Dicha certificación necesariamente deberá ser realizada por los auditores independientes en el exterior, respecto a la verificación de dichos costos y gastos; deberán certificar la necesidad de efectuar el gasto para generar el ingreso y el análisis de este último respecto a si es gravado o no con el Impuesto a la Renta.

Dicho análisis podrá ser realizado por la sucursal, filial o representación de ese mismo auditor independiente en el país; el certificado se emitirá en idioma castellano.

El auditor independiente puede elaborar el informe en dos cuerpos, uno por el auditor con sede en el exterior, y otro por el auditor con sede en el Ecuador. El artículo 31 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno indica el contenido mínimo que debe estar contemplado en el informe de auditores

independientes, la parte del informe correspondiente a las certificaciones de los auditores en el exterior deberá contener lo siguiente:

- a) Detalle del beneficiario del pago y del reembolso si aplica;
- b) Fecha del pago o crédito en cuenta. En caso de reembolso se incluirá en el detalle la fecha de la realización de los pagos por concepto de costos y gastos efectuados objeto del reembolso;
- c) Cuantía del gasto y reembolso si aplica;
- d) Descripción uno a uno de los costos y gastos realizados, incluso para el caso el reembolso;
- e) En el caso de gastos indirectos asignados desde el exterior, se incluirá el método de asignación utilizado y el análisis de los procedimientos previamente convenidos;
- f) Confirmación de que la revisión efectuada por los auditores externos, fue por la totalidad de los gastos pagados o reembolsados y no fue realizada bajo ningún método de muestreo; y,
- g) Autenticación del cónsul ecuatoriano más cercano al lugar de su emisión; esta autenticación no será necesaria para los pagos realizados al exterior por entidades y empresas públicas.

Por otra parte en el informe que contiene la certificación de los auditores independientes en Ecuador deberá contener lo siguiente, según lo que dispone en el mismo artículo 31:

- a) Nombre y número de RUC de quien realizó el pago.
- b) Análisis de la pertinencia del gasto para el desarrollo de la actividad económica en el Ecuador o en el exterior, y la descripción del ingreso para el cual fue efectuado.
- c) Calificación del ingreso que remesa la compañía al exterior conforme al convenio de doble tributación en caso de que aplique; y verificación de que quien recibe el pago es el beneficiario efectivo.
- d) Justificación de la razón por la cual no sería un ingreso gravado en Ecuador, en el caso que aplique (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).

2.3 CONSULARIZACIÓN DE DATOS

El artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que los certificados de pertinencia de gastos, se deberán legalizar ante el cónsul ecuatoriano más cercano al lugar en el que hayan sido emitidos. De la misma forma es necesario autenticar ante el respectivo cónsul ecuatoriano los certificados de residencia fiscal, conforme con lo establecido en el artículo 134 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, por lo que este proceso de legalización es requerido para ambas certificaciones.

La apostilla tiene como objetivo la legalización de documentos públicos emitidos en el Ecuador, que van a ser presentados en otros países, haciendo innecesaria la legalización consular o diplomática u otro tipo de certificación adicional. Estos documentos, son válidos únicamente entre los países miembros de la Convención de La Haya sobre la Apostilla de 1961.

La XII Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, se suscribió en La Haya, Países Bajos, el 5 de octubre de 1961, conocida actualmente como Convención de La Haya sobre la Apostilla. El Ecuador se adhirió a la misma mediante Decreto Ejecutivo 1700-A, de 18 de mayo de 2004, publicado en el Registro Oficial 410 de 31 de agosto de 2004, entrando en vigencia para nuestro país el 2 de abril de 2005. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, s.f.)

La legalización es el acto administrativo realizado por un agente consular extranjero acreditado en el Ecuador, por las Unidades de Legalizaciones y Coordinaciones Zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, o por el funcionario consular ecuatoriano en el exterior, mediante la comprobación de que la firma que consta en el documento presentado, es idéntica a la que consta en sus archivos y por lo tanto da fe de su autenticidad. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, s.f.)

Para realizar este trámite se debe definir si es el caso de una apostilla o una legalización, que tomaremos en cuenta la siguiente figura:

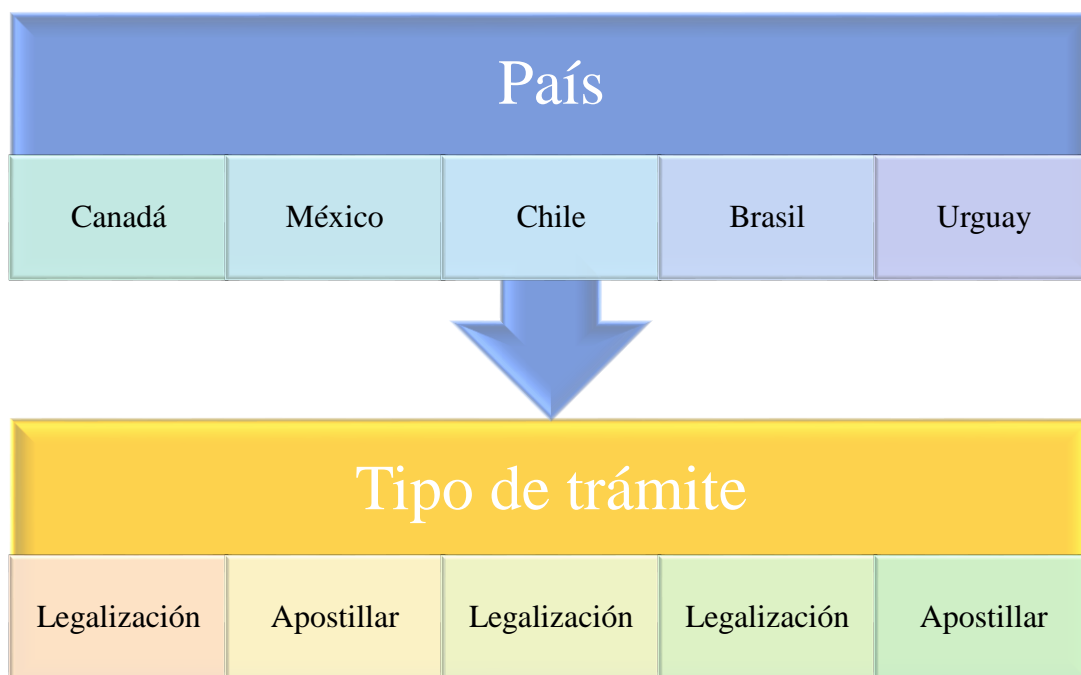


Figura 7: Tipo de Trámite

Un requisito previo es de acudir ante el funcionario público competente autorizado para certificar la autenticidad del documento. El procedimiento para apostillar o legalizar un documento consiste de tres pasos:

1. Presentar su cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte si es extranjero y los documentos originales que requiera legalizar en las ventanillas de ingreso de la Unidad de Legalizaciones.
2. Indicar el nombre del país, Embajada o Consulado en donde se presentarán los documentos.
3. Cancelar el valor especificado. El pago se realizará normalmente en la ventanilla del Banco ubicado en la Unidad de Legalizaciones. (Humana, Legalización para presentar documentos en el Exterior, s.f.)

3 APLICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE ECUADOR Y CANADÁ, MÉXICO, CHILE, BRASIL, URUGUAY

De conformidad con la ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 8 de ingresos de fuente ecuatoriana, en el numeral 2 dice que: Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano. (Servicio de Rentas Internas, 2015) Por lo tanto deben tributar en el Ecuador.

Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay tienen de manera similar la ley del Ecuador que se refiere que cuando la renta es obtenida en el exterior se debe tributar en Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay.

De este modo se produce la doble tributación en los países mencionados, por esta razón se crean los convenios internacionales de doble tributación para que solo se tribute en un Estado contratante o que se tribute proporcionalmente en un estado y en el otro estado también.

Por consiguiente realizamos casos prácticos fundamentales de los artículos de los convenios internacionales para evitar la doble imposición en actividades realizadas por personas jurídicas o naturales.

3.1 RENTAS DE LOS BIENES INMUEBLES

En el artículo 6 de los convenios entre Ecuador con Canadá, México, Chile, Brasil, Uruguay define:

La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya, para los fines del impuesto pertinente, la legislación del Estado Contratante en donde los bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado, el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques y aeronaves no tendrán la consideración de bienes inmuebles. (Convenio entre Ecuador y Canadá, 2002, págs. 5,6)

En Ecuador se logra encontrar una definición aplicable a este artículo en el Código Civil que en el artículo 586 nos da el siguiente lineamiento: “Inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles” además se incluyen dentro de los artículos siguientes a las plantas que no se encuentren en macetas, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble aunque se puedan separar, como por ejemplo losas, tuberías, animales de una finca, prensas, calderas y maquinaria adherida al suelo que forma parte de un establecimiento industrial, entre otros más (Código Civil, 2005).

Ejemplo de aplicación del convenio.-

CASABACA S.A. compañía ecuatoriana de autos, arrienda una oficina en México por un valor de 3.000 dólares mensuales durante todo el año 2015, valor que se cancela a la compañía mexicana Ezquerro y Catalá. La compañía contratante posee su residencia fiscal en Ecuador. Debido al convenio existente entre Ecuador y México; CASABACA S.A. no tendrá que realizar la retención en la fuente de impuesto a la

renta, al momento de registrar la factura o proporcionar el pago a la compañía mexicana.

En este ejemplo si no aplicamos el convenio; debemos proceder con el rubro de gross up en la liquidación de compras de bienes o servicios. Este rubro retribuirá al valor de la retención que se debe realizar al tratarse de un pago al exterior. El gross up incrementa el costo del servicio y de esta manera realiza la retención en la fuente de impuesto a la renta; el proveedor no se verá afectado y recibirá el importe original de la factura.

Se debe tomar en cuenta que el valor incurrido por gross up es un gasto no deducible de impuesto a la renta conforme lo establecido en el artículo 30 del Reglamento (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).

El cálculo sería el siguiente:

Tabla 2: Total de liquidación – Rentas de los bienes inmuebles

Valor a pagar	3.000,00
Gross up	846,15
Valor liquidación	3.846,15
IVA 12%	461,54
Total Liquidación	4.307,69

La manera que calculamos el **gross up** para este ejemplo es la siguiente:

Tabla 3: Gross up - Rentas de los bienes inmuebles

3.000	78%
x	100%
x=	<u>3.000 x 100%</u>
	78%
x=	3.846,15
Gross up=	3846,15-3000
Gross up=	846,15

De la misma manera calculamos el **gross up** para todo el año.

Procedemos a realizar la liquidación de compras; que también se utiliza en los otros ejemplos de la investigación según fuera el caso.

Tabla 4: Liquidación de compras

CASABACA S.A.	Dirección:				LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIONES DE		
	Av. 10 de agosto y colón						
	PBX:8524-819 FAX: 247568		001-0001		N° 1234		
	CASILLA: 17-01-4231						
	QUITO-ECUADOR				RUC: 1724976285001		
FECHA:	13/03/2016						
VENDEDOR:							
SR:	EZQUERRO Y CATALA				CI:	1711117562	
DOMICILIO:	MEXICO				TELF:	2540242	
LUGAR DE TRANSACCIÓN	MEXICO						
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ARRIENDO DE OFICINA					3846,15	3846,15
					Total gravado con IVA 0%		3.846,15
					BASE IMPONIBLE IVA 12%		461,54
					IMPORTE DEL IVA		
					TOTAL DE ESTA LIQUIDACIÓN		4.307,69
RODRIGUEZ ALVARADO NELSON OCT AVO. SERGRAFICA.RUC 1724728676001.AUT 123. TEL.22227287							
FECHA DE AUTORIZACIÓN 26/ENE/2016 - FECHA DE CADUCIDAD 26/ENE/2017							

El cuadro siguiente que vamos a presentar trata de los cálculos que utiliza sin la aplicación del convenio o con su respectiva aplicación:

Tabla 5: Facturas Ezquerro y Catalá

Total facturas Ezquerro y Catalá		36.000,00	
Con la aplicación del convenio		Sin la aplicación del convenio	
Valor a pagar	36.000,00		36.000,00
<i>Gross up</i>	-		10.153,85
Valor liquidación	36.000,00		46.153,85
IVA	4.320,00		5.538,46
Total liquidación	40.320,00		51.692,31
Retención 22% de I.R.	-		(10.153,85)
Retención 100% de IVA	(4.320,00)		(5.538,46)
Pago al proveedor	36.000,00		36.000,00
Gasto total real:	36.000,00		46.153,85
Porción deducible	36.000,00		36.000,00
Porción no deducible	-		10.153,85

Se verifica que el valor de la factura coincide con el valor a pagar al proveedor después de realizar la retención del 100% de IVA conforme lo establecido en el artículo 1 numeral 4 de la Resolución 124 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 263 del 30 de enero de 2008 (Servicio de Rentas Internas, 2008); y el 22% (tarifa vigente para sociedades) del Impuesto a la Renta correspondiente al artículo 4 de la Resolución NAC-DGERCGC14-00787 del Suplemento del Registro Oficial 346 del 30 de septiembre del 2014 (Servicio de Rentas Internas, 2014).

El ahorro neto para este ejemplo aplicando el convenio correctamente es de 8.965,85 dólares que detallamos en las siguientes cifras:

Tabla 6: Cálculo de ahorro neto - Rentas de los bienes inmuebles

Ahorro bruto:	10.153,85	Efecto en el incremento de Participación Trabajadores por un menor gasto Efecto por la deducción adicional de I.R. por Participación Trabajadores
15% Part. Trabajadores:	(1.523,08)	
22% Impuesto a la renta:	335,08	
Ahorro neto:	8.965,85	

La retención del IVA realizamos mensualmente según la ley en el art. 70 párrafo 3 que dice: En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, y a efectuar la retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de servicios, a los que se presten por parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero. (Servicio de Rentas Internas, 2015)

3.2 BENEFICIOS EMPRESARIALES

En el artículo 7 de los convenios de doble tributación entre Ecuador con Canadá, México, Chile, Brasil, Uruguay expresan: “Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice o ha realizado su actividad en el otro Estado Contratante por

medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente.” (Convenio entre Ecuador y Canadá, 2002) (Convenio entre Ecuador y México, 2000) (Convenio entre Ecuador y Chile, 2004) (Convenio entre Ecuador y Uruguay, 2012) (Convenio entre Ecuador y Brasil, 1988).

Ejemplo de aplicación del convenio.-

La empresa ecuatoriana AVELA S.A. contrata los servicios de CIATA compañía brasileña que no posee establecimiento en el Ecuador, para realizar una asesoría de construcción del proyecto UNAM, en la ciudad de Quito, lugar en el que la empresa AVELA S.A. presta sus servicios de construcción de casas. El costo de la asesoría prestada por CIATA es de 300.000 dólares. La compañía brasileña entrega su certificado de residencia fiscal que acredita su residencia en Brasil y le permite a AVELA S.A. aplicar el artículo 7 correspondiente a beneficios empresariales.

Dado que CIATA no posee un establecimiento permanente en Ecuador los beneficios obtenidos por este servicio prestado deberán ser sometidos a imposición en Brasil, por lo que no representa un ingreso gravado de un impuesto a la renta en el Ecuador.

En este ejemplo si no aplicamos el convenio; debemos proceder con el rubro de gross up en la liquidación de compras de bienes o servicios. Este rubro retribuirá al valor de la retención que se debe realizar al tratarse de un pago al exterior. El gross up incrementa el costo del servicio y de esta manera realiza la retención en la fuente de impuesto a la renta; el proveedor no se verá afectado y recibirá el importe original de la factura.

Se debe tomar en cuenta que el valor incurrido por gross up es un gasto no deducible de impuesto a la renta conforme lo establecido en el artículo 30 del Reglamento (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).

El cálculo sería el siguiente:

Tabla 7: Total de liquidación – Beneficios empresariales

Valor a pagar	300.000,00
Gross up	84.615,38
Valor liquidación	384.615,38
IVA 12%	46.153,85
Total Liquidación	430.769,23

La manera que calculamos el **gross up** para este ejemplo es la siguiente:

Tabla 8: Gross up – Beneficios empresariales

300.000	78%
x	100%
x=	300.000 x 100%
	78%
x=	384.615,38
Gross up=	384.615,38-300.000
Gross up=	84.615,38

El cuadro siguiente que vamos a presentar trata de los cálculos que utiliza sin convenio o con su respectiva aplicación:

Tabla 9: Total Honorarios profesionales Sr. Da Silva

Factura CIATA		300.000,00	
	Con la aplicación del convenio		Sin la aplicación del convenio
Valor a pagar	300.000,00		300.000,00
<i>Gross up</i>	-		84.615,38
Valor liquidación	300.000,00		384.615,60
IVA	36.000,00		46.153,85
Total liquidación	336.000,00		430.769,23
Retención 22% de I.R.	-		(84.615,38)
Retención 100% de IVA	(36.000,00)		(46.153,85)
Pago al proveedor	300.000,00		300.000,00
Gasto total real:	300.000,00		384.615,38
Porción deducible	300.000,00		300.000,00
Porción no deducible	-		84.615,38

Se verifica que el valor de la factura coincide con el valor a pagar al proveedor después de realizar la retención del 100% de IVA conforme lo establecido en el artículo 1 numeral 4 de la Resolución 124 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 263 del 30 de enero de 2008 (Servicio de Rentas Internas, 2008); y el 22% (tarifa vigente para sociedades) del Impuesto a la Renta correspondiente al artículo 4 de la Resolución NAC-DGERCGC14-00787 del Suplemento del Registro Oficial 346 del 30 de septiembre del 2014 (Servicio de Rentas Internas, 2014).

El ahorro neto para este ejemplo aplicando el convenio correctamente es de 74.715,38 dólares que detallamos en las siguientes cifras:

Tabla 10: Cálculo del ahorro neto - Beneficios empresariales

Ahorro bruto:	84.615,38	Efecto en el incremento de Participación Trabajadores por un menor gasto Efecto por la deducción adicional de I.R. por Participación Trabajadores
15% Part. Trabajadores:	(12.692,31)	
22% Impuesto a la renta:	2.792,31	
Ahorro neto:	74.715,38	

3.3 TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO Y FLUVIAL

El artículo 8 de los convenios entre Ecuador con Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay expresan; Los beneficios procedentes del tráfico internacional obtenidos por empresas de transporte aéreo, marítimo o fluvial sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el que esté situada la sede de dirección o administración efectiva de las mismas. (Convenio entre Ecuador y Brasil, 1988)

El artículo 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno que explica sobre:

Art. 31.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Los ingresos de fuente ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga, empresas aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes extranjeras y que operen en el país a través de sucursales, establecimientos permanentes, agentes o representantes, se determinarán a base de los ingresos brutos por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos generados por sus operaciones habituales de transporte. Se considerará como base imponible el 2% de estos ingresos. Los ingresos provenientes de actividades distintas a las de transporte se someterán a las normas generales de esta Ley.

Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas con o sin domicilio en el Ecuador, estarán exentas del pago de impuestos en estricta relación a lo que se haya establecido por convenios internacionales de reciprocidad tributaria, exoneraciones tributarias equivalentes para empresas nacionales y para evitar la doble tributación internacional (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004).

Ejemplo de aplicación del convenio:

La compañía LATAM Airlines Group, es una compañía fusionada entre LAN de Chile y TAM de Brasil que brinda transporte aéreo a pasajeros y presta servicios de carga. La dirección principal está ubicada en Chile como también su residencia fiscal. La compañía también cuenta con su presencia en el Ecuador; su sede esta Quito y su aeropuerto es en Guayaquil, por este caso se debería someterse a calcular y pagar un impuesto a la renta sobre una base del 2% de todos sus ingresos brutos de cada año. Sin embargo la sede efectiva se encuentra en Chile de este modo se puede aplicar al convenio para evitar de doble imposición, únicamente deberá mantener su certificado de residencia fiscal Chileno y la compañía estará exenta de pagar el impuesto a la renta en Ecuador ya que los ingresos estarán sometidos a imposición en Chile acorde a las leyes chilenas.

3.4 EMPRESAS ASOCIADAS

Una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante; o, Unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el

capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir estas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia. (Convenio entre Ecuador y México, 2000)

El Ecuador para considerar a una compañía o persona natural parte relacionada de una sociedad o persona debe cumplir con lo que fija sin numerar después del artículo 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno. El Régimen de Precios de Transferencia sin embargo es un tema muy amplio y no es objeto de esta investigación.

3.5 DIVIDENDOS

En los dividendos de los convenios existe una serie de casos y cómo proceder ante cada uno, sin embargo, para las transacciones relacionadas al pago de dividendos desde Ecuador hacia Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay o de los países ya mencionados hacia el Ecuador, que son los únicos casos de objeto de estudio de esta investigación la ley local provee los lineamientos a seguir los cuales presentan un mayor beneficio económico para el contribuyente por lo tanto no es fundamental aplicar lo establecido en los Convenios.

3.5.1 Dividendos pagados desde el Ecuador hacia Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay

Para empezar el análisis de este tipo de transacciones se debe considerar lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual habla lo siguiente:

1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador (...) (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004).

Los dividendos pagados por una sociedad de Ecuador a una sociedad o persona natural residente en Canadá, México, Brasil, Chile o Uruguay están exentos del impuesto a la renta en el Ecuador debido a que ninguno de estos países no están en la lista de paraísos fiscales divulgada por el Servicio de Rentas Internas en el artículo 2 de la Resolución No.- NAC-DGERCGC15-00000052 de 2015 que fue publicada en el segundo Suplemento del Registro Oficial 430; el 3 de febrero de 2015. (Servicio de Rentas Internas, 2015)

Los países de Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay no están considerados como países con un régimen de menor imposición conforme al artículo 4 de la Resolución No.- NAC-DGERCGC15-00000052 de 2015 que fue publicada en el segundo Suplemento del Registro Oficial 430; el 3 de febrero de 2015 que cita lo siguiente:

Jurisdicción de menor imposición.- Tendrán el mismo tratamiento de paraíso fiscal, aquellas jurisdicciones cuya tasa efectiva de impuesto sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica o análoga sea inferior a un sesenta por ciento (60%) a la que corresponda en el Ecuador sobre las rentas de la misma naturaleza de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, durante el último periodo fiscal, según corresponda. (Servicio de Rentas Internas, 2015)

La tarifa del impuesto a la renta para sociedades en Ecuador está establecida en el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que menciona lo siguiente:

Las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004).

En el siguiente cuadro presentamos los porcentajes de retención Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay:

Tabla 11: Porcentajes de Retención - Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay

Países	Porcentaje de retención
Canadá	15%
México	30%
Chile	24%
Brasil	15%
Uruguay	25%

Nos damos cuenta que los porcentajes superan el valor del 13.20% ($22\% * 60\%$) por lo tanto se afirma que ningún país estudiado en el presente trabajo posee una jurisdicción de menor imposición según el artículo 4 de la resolución NAC-

DGERCGC15-00000052 publicada en el Registro Oficial 430 del 3 de febrero de 2015.

La legislación ecuatoriana establece también que en cuanto a la Salida de Divisas (ISD) existe una exención de pagar el impuesto siempre y cuando se paguen los dividendos al exterior como se expresa en el artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador:

(...) están exonerados del pago del Impuesto a la Salida de Divisas, los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la persona natural -según corresponda-no esté domiciliada en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. No se aplicará esta exoneración cuando los dividendos se distribuyan a favor de sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, sean accionistas las personas naturales o sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, que son accionistas de la sociedad domiciliada en Ecuador que los distribuye (...) (Ley Equidad Tributaria, 2007).

En conclusión los ingresos de dividendos distribuidos por sociedades ecuatorianas a sociedades o persona natural residentes en Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay están exentas de la retención del impuesto a la renta, por lo que no es necesario aplicar las disposiciones de los Convenios.

3.5.2 Dividendos recibidos en el Ecuador provenientes de Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay

Con respecto a la imposición de los dividendos recibidos por sociedades o personas naturales ecuatorianas; que son pagados por Canadá o México, Brasil,

Chile o Uruguay. Se aplica la norma ecuatoriana referente a la exención que dictamina el artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno:

Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, que han sido sometidas a imposición en otro Estado, se excluirán de la base imponible en Ecuador y en consecuencia no estarán sometidas a imposición. En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no se aplicará la exención y las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004).

El artículo 136 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno rectifica lo anteriormente mencionado:

Sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales, las personas naturales residentes en el país y las sociedades nacionales que perciban ingresos en el exterior sujetos a Impuesto a la Renta en el Ecuador, que hubiesen sido sometidos a imposición en otro Estado, se excluirán de la base imponible en el Ecuador, y se tratarán como rentas exentas (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).

En conclusión los ingresos por dividendos distribuidos por sociedades de Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay a sociedades o persona natural residentes en Ecuador están exentos de la retención del impuesto a la renta, por lo que no es necesario aplicar las disposiciones de los Convenios.

3.6 INTERESES

En el artículo 11 de los convenios de Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay se observa una similitud entre ellos. Por ello tomaremos el tratado de México que cita:

Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado y según la legislación del mismo.

Sin embargo, estos intereses pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que proceda y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido, no puede exceder del:

10% del importe bruto de los intereses cuando se perciban por un banco que sea beneficiario efectivo; y, 15% del importe bruto de los intereses en los demás casos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, durante un período de cinco años a partir de la fecha en que surtan sus efectos las disposiciones del presente Convenio, en lugar de la tasa prevista en el párrafo 2.a) del presente artículo, se aplicará la tasa del 15%.

No obstante las disposiciones de los párrafos 2 y 3, los intereses mencionados en el párrafo 1 sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que es residente el beneficiario de los intereses, si satisface alguno de los requisitos siguientes:

El beneficiario sea uno de los Estados Contratantes, una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales; los intereses sean pagados por una persona de las mencionadas en el inciso a) anterior; los intereses sean pagados por préstamos a plazo de tres años o más, concedidos o garantizados por entidades de financiamiento o de garantía de carácter público, cuyo objeto sea promover la exportación mediante el otorgamiento de créditos o garantías en condiciones preferenciales. (Convenio entre Ecuador y México, 2000)

El termino de interés de igual manera tienen una similitud de significado en los convenios de los países mencionados anteriormente: “intereses”, empleado en el presente artículo, significa los rendimientos de crédito de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y especialmente las rentas de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a estos títulos, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas en préstamo. (Convenio entre Ecuador y México, 2000)

Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, ejerce o haya ejercido en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado o presta o haya prestado unos servicios profesionales por medio de una base fija situada en él, con los que el crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.

Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una de sus entidades locales o un residente de este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda que da origen al pago de los intereses y que soporten la carga de los mismos, éstos se considerarán procedentes del Estado Contratante donde estén situados el establecimiento permanente o la base fija.

Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de los intereses o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses pagados exceda, por cualquier motivo, del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables cuando el crédito por el cual se pagan los intereses, se concertó o asignó principalmente con el propósito de tomar ventaja de este artículo. (Convenio entre Ecuador y México, 2000)

Ejemplo del convenio:

La empresa INACORP S.A. del Ecuador domiciliada en la ciudad de QUITO, tiene como actividad económica la comercialización de equipos de computación. El 1 de enero de 2015 recibe un préstamo por un valor de 500.000 dólares americanos por parte del inversionista mexicano Jorge Espinoza, residente mexicano, el préstamo es pagadero a un plazo de 5 años con una tasa de interés anual simple del 7%, los pagos se realizarán de manera mensual.

Fue cotejada la tasa de interés con la tasa de interés autorizada por el Banco Central del Ecuador de manera que es posible obtener la deducibilidad total de los gastos incurridos por el concepto de intereses de este préstamo, de conformidad con el artículo 10, numeral 2 y el artículo 13 numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario

Interno (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) y el artículo 30 de su respectivo reglamento (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).

A continuación presentamos la tabla de amortización del pago y otra tabla indicando el pago de todo el año 2015 al señor Espinoza:

Tabla 12: Tabla de Amortización Total - Inversionista

TABLA DE AMORTIZACIÓN				
Periodos	60			
Interés anual	7%			
Mes	Cuota	Interés	Capital	Total
0	-	-	-	500.000,00
1	\$ 9.900,60	2.916,67	6.983,93	493.016,07
2	\$ 9.900,60	2.875,93	7.024,67	485.991,40
3	\$ 9.900,60	2.834,95	7.065,65	478.925,75
4	\$ 9.900,60	2.793,73	7.106,87	471.818,88
5	\$ 9.900,60	2.752,28	7.148,32	464.670,56
6	\$ 9.900,60	2.710,58	7.190,02	457.480,54
7	\$ 9.900,60	2.668,64	7.231,96	450.248,57
8	\$ 9.900,60	2.626,45	7.274,15	442.974,42
9	\$ 9.900,60	2.584,02	7.316,58	435.657,84
10	\$ 9.900,60	2.541,34	7.359,26	428.298,58
11	\$ 9.900,60	2.498,41	7.402,19	420.896,39
12	\$ 9.900,60	2.455,23	7.445,37	413.451,02
13	\$ 9.900,60	2.411,80	7.488,80	405.962,22
14	\$ 9.900,60	2.368,11	7.532,49	398.429,73
15	\$ 9.900,60	2.324,17	7.576,43	390.853,31
16	\$ 9.900,60	2.279,98	7.620,62	383.232,68
17	\$ 9.900,60	2.235,52	7.665,08	375.567,61
18	\$ 9.900,60	2.190,81	7.709,79	367.857,82
19	\$ 9.900,60	2.145,84	7.754,76	360.103,06
20	\$ 9.900,60	2.100,60	7.800,00	352.303,06
21	\$ 9.900,60	2.055,10	7.845,50	344.457,56
22	\$ 9.900,60	2.009,34	7.891,26	336.566,30
23	\$ 9.900,60	1.963,30	7.937,30	328.629,00
24	\$ 9.900,60	1.917,00	7.983,60	320.645,41

TABLA DE AMORTIZACIÓN				
Periodos	60			
Interés anual	7%			
Mes	Cuota	Interés	Capital	Total
25	\$ 9.900,60	1.870,43	8.030,17	312.615,24
26	\$ 9.900,60	1.823,59	8.077,01	304.538,23
27	\$ 9.900,60	1.776,47	8.124,13	296.414,10
28	\$ 9.900,60	1.729,08	8.171,52	288.242,58
29	\$ 9.900,60	1.681,42	8.219,18	280.023,40
30	\$ 9.900,60	1.633,47	8.267,13	271.756,27
31	\$ 9.900,60	1.585,24	8.315,35	263.440,92
32	\$ 9.900,60	1.536,74	8.363,86	255.077,06
33	\$ 9.900,60	1.487,95	8.412,65	246.664,41
34	\$ 9.900,60	1.438,88	8.461,72	238.202,68
35	\$ 9.900,60	1.389,52	8.511,08	229.691,60
36	\$ 9.900,60	1.339,87	8.560,73	221.130,87
37	\$ 9.900,60	1.289,93	8.610,67	212.520,20
38	\$ 9.900,60	1.239,70	8.660,90	203.859,30
39	\$ 9.900,60	1.189,18	8.711,42	195.147,88
40	\$ 9.900,60	1.138,36	8.762,24	186.385,64
41	\$ 9.900,60	1.087,25	8.813,35	177.572,29
42	\$ 9.900,60	1.035,84	8.864,76	168.707,53
43	\$ 9.900,60	984,13	8.916,47	159.791,06
44	\$ 9.900,60	932,11	8.968,48	150.822,58
45	\$ 9.900,60	879,80	9.020,80	141.801,78
46	\$ 9.900,60	827,18	9.073,42	132.728,35
47	\$ 9.900,60	774,25	9.126,35	123.602,00
48	\$ 9.900,60	721,01	9.179,59	114.422,42
49	\$ 9.900,60	667,46	9.233,14	105.189,28
50	\$ 9.900,60	613,60	9.287,00	95.902,28
51	\$ 9.900,60	559,43	9.341,17	86.561,12
52	\$ 9.900,60	504,94	9.395,66	77.165,46
53	\$ 9.900,60	450,13	9.450,47	67.714,99
54	\$ 9.900,60	395,00	9.505,60	58.209,39
55	\$ 9.900,60	339,55	9.561,04	48.648,35
56	\$ 9.900,60	283,78	9.616,82	39.031,53
57	\$ 9.900,60	227,68	9.672,92	29.358,62
58	\$ 9.900,60	171,26	9.729,34	19.629,28
59	\$ 9.900,60	114,50	9.786,10	9.843,18
60	\$ 9.900,60	57,42	9.843,18	0,00

Tabla 13: Tabla de Amortización – Año 2015

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL AÑO 2015				
Periodos	60			
Interés anual	7%			
Mes	Cuota	Interés	Capital	Total
0	-	-	-	500.000,00
1	\$ 9.900,60	2.916,67	6.983,93	493.016,07
2	\$ 9.900,60	2.875,93	7.024,67	485.991,40
3	\$ 9.900,60	2.834,95	7.065,65	478.925,75
4	\$ 9.900,60	2.793,73	7.106,87	471.818,88
5	\$ 9.900,60	2.752,28	7.148,32	464.670,56
6	\$ 9.900,60	2.710,58	7.190,02	457.480,54
7	\$ 9.900,60	2.668,64	7.231,96	450.248,57
8	\$ 9.900,60	2.626,45	7.274,15	442.974,42
9	\$ 9.900,60	2.584,02	7.316,58	435.657,84
10	\$ 9.900,60	2.541,34	7.359,26	428.298,58
11	\$ 9.900,60	2.498,41	7.402,19	420.896,39
12	\$ 9.900,60	2.455,23	7.445,37	413.451,02
TOTAL	118.807,19	32.258,21	86.548,98	

El artículo 11 del convenio; la empresa INACORP S.A. está en la obligación de hacer la retención del impuesto a la renta del 15% del importe bruto de los intereses. El inversionista mexicano Jorge Espinoza posee el certificado de residencia fiscal, en este caso la retención asciende a 4.838,73 dólares. Por lo tanto la realización de la retención sobre el interés pactado causaría que el inversionista mexicano reciba un valor menor del que espera obtener, como se presenta a continuación:

Tabla 14: Retención del 15%

Intereses	\$ 32.258,21
Retención 15%	(4.838,73)
Valor a pagar	\$ 27.419,48

El artículo 24 numeral 4 cita:

A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del Artículo 9 o de los apartados 6 de los Artículos 11 ó 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del otro Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio imponible de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar. (Convenio entre Ecuador y Uruguay, 2012)

En el caso que el proveedor no acepte aplicar el convenio por que no está dispuesto a recibir un valor menor al pactado, la empresa ecuatoriana deberá realizar un **gross up** para incrementar el costo del pago del interés al realizar la retención del impuesto a la renta, el inversionista no se verá afectado y recibirá el importe original del valor de los intereses.

Calculamos el gross up de la aplicación del convenio y sin la aplicación del convenio.

Aplicando el convenio:

Tabla 15: Calculamos el gross up – Aplicando el convenio

Valor a pagar	32.258,21
Gross up 15%	5.692,63
Base para la retención	37.950,84

32.258,21	85%
x	100%
x=	32.258,21 x 100%
	85%
x=	37.950,84
Gross up=	37.950,84 - 32.258,21
Gross up=	5.692,63

Sin la aplicación del convenio:

Tabla 16: Calculamos el gross up – Sin la aplicación del convenio

Valor a pagar	32.258,21
Gross up 22%	9.098,47
Base para la retención	41.356,68

32.258,21	78%
x	100%
x=	32.258,21 x 100%
	78%
x=	41.356,68
Gross up=	41.356,68 - 32.258,21
Gross up=	9.098,47

En el siguiente cuadro vamos a comprar la aplicación del convenio y sin aplicar el convenio:

Tabla 17: Comparativo con la aplicación y sin la aplicación del convenio del 15% de retención

INTERESES		\$ 32.258,21	
Con la aplicación del convenio		Sin la aplicación del convenio	
Valor a pagar	\$ 32.258,21		\$ 32.258,21
<i>Gross up</i>	\$ 5.692,63		\$ 9.098,47
Valor liquidación	\$ 37.950,84		\$ 41.356,68
Total liquidación	\$ 37.950,84		\$ 41.356,68
Retención 15% /22% de I.R.	\$ (5.692,63)		\$ (9.098,47)
Pago al proveedor	\$ 32.258,21		\$ 32.258,21
Gasto total real:	\$ 32.258,21		\$ 41.356,68
Porción deducible	\$ 32.258,21		\$ 32.258,21
Porción no deducible	\$ 5.692,63		\$ 9.098,47

El cobro de intereses no es objeto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de acuerdo a la absolución de consultas de la Administración Tributaria no se deberá emitir ninguna factura, pues la operación de crédito realizada a través de un contrato de mutuo o préstamo de dinero, no produce el hecho generador del IVA, en vista que no implica ningún tipo de transferencia de bienes corporales ni la prestación de un servicio, conforme lo establece el artículo 52 de la Ley (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004), no es necesario emitir tampoco una liquidación de compras de bienes y prestación de servicios por no cumplir con el pre supuesto del artículo 70 de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) y debido al

mismo motivo mencionado anteriormente conforme el artículo 13 del Reglamento (Reglamento de comprobantes de venta, 2010).

Tabla 18: Ahorro Neto del 15% aplicando el convenio

Ahorro bruto:	3.405,84	Efecto en el incremento de Participación
15% Part. Trabajadores:	(510,88)	Trabajadores por un menor gasto.
22% Impuesto a la renta:	112,39	Efecto por la deducción adicional de I.R. por
Ahorro neto:	3.007,36	Participación Trabajadores.

El caso anterior se demostró que el inversionista mexicano no accedió a recibir la retención como parte del pago, por lo que no es posible obtener el ahorro total por el monto de gross up que figura como gasto no deducible. Sin embargo si el inversionista mexicano accediera a recibir la retención como parte de pago es posible alcanzar un mayor beneficio.

En el siguiente cuadro, se plantea el ejercicio si el inversionista accediera a la retención y la aplicación del convenio y sin la aplicación del convenio:

Tabla 19: Comparativo con la aplicación y sin la aplicación del convenio con aprobación de la retención

INTERESES		\$ 32.258,21	
Con la aplicación del convenio		Sin la aplicación del convenio	
Valor a pagar	\$ 32.258,21		\$ 32.258,21
<i>Gross up</i>	\$ -		\$ 9.098,47
Valor liquidación	\$ 32.258,21		\$ 41.356,68
Total liquidación	\$ 32.258,21		\$ 41.356,68
Retención 22% de I.R.	\$ -		\$ (9.098,47)
Pago al proveedor	\$ 32.258,21		\$ 32.258,21
Gasto total real:	\$ 32.258,21		\$ 41.356,68
Porción deducible	\$ 32.258,21		\$ 32.258,21
Porción no deducible	\$ -		\$ 9.098,47

Ahorro bruto:	9.098,47	Efecto en el incremento de Participación
15% Part. Trabajadores:	(1.364,77)	Trabajadores por un menor gasto.
22% Impuesto a la renta:	300,25	Efecto por la deducción adicional de I.R.
Ahorro neto:	8.033,95	por Participación Trabajadores.

Ejemplo del convenio entre instituciones financieras:

Banco del Pichincha del Ecuador domiciliada en la ciudad de QUITO, es una institución financiera privada. El 1 de enero de 2013 recibe un préstamo por un valor de 300.000 dólares americanos por parte del Banco Nacional de México (BANAMEX), residente mexicano, el préstamo es pagadero a un plazo de 6 años con una tasa de interés anual simple del 8%, los pagos se realizaran de manera mensual.

Fue cotejada la tasa de interés con la tasa de interés autorizada por el Banco Central del Ecuador de manera que es posible obtener la deducibilidad total de los gastos incurridos por el concepto de intereses de este préstamos, de conformidad con el artículo 10, numeral 2 y el artículo 13 numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) y el artículo 30 de su respectivo reglamento (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).

A continuación presentamos la tabla de amortización del pago del año 2013 a BANAMEX:

Tabla 20: Tabla de Amortización - BANAMEX

TABLA DE AMORTIZACIÓN					
Períodos	72				
Interés anual	8%				
Mes	Cuota	Interés	Capital	Total	
0	-	-	-	300.000,00	
1	\$ 5.259,97	2.000,00	3.259,97	296.740,03	
2	\$ 5.259,97	1.978,27	3.281,71	293.458,32	
3	\$ 5.259,97	1.956,39	3.303,58	290.154,74	
4	\$ 5.259,97	1.934,36	3.325,61	286.829,13	
5	\$ 5.259,97	1.912,19	3.347,78	283.481,35	
6	\$ 5.259,97	1.889,88	3.370,10	280.111,26	
7	\$ 5.259,97	1.867,41	3.392,56	276.718,69	
8	\$ 5.259,97	1.844,79	3.415,18	273.303,51	
9	\$ 5.259,97	1.822,02	3.437,95	269.865,56	
10	\$ 5.259,97	1.799,10	3.460,87	266.404,70	
11	\$ 5.259,97	1.776,03	3.483,94	262.920,75	
12	\$ 5.259,97	1.752,81	3.507,17	259.413,59	
TOTAL	63.119,67	22.533,25	40.586,41		

El artículo 11 del convenio; Banco Pichincha está en la obligación de hacer la retención del impuesto a la renta del 10% del importe bruto de los intereses. BANAMAX posee el certificado de residencia fiscal, en este caso la retención asciende a 2.253,33 dólares. Por lo tanto la realización de la retención sobre el interés pactado causaría que BANAMEX reciba un valor menor del que espera obtener, como se presenta a continuación:

Tabla 21: Retención del 10%

Intereses	22.533,25
Retención 10%	(2.253,33)
Valor a pagar	20.279,93

El artículo 24 numeral 4 cita:

A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del Artículo 9 o de los apartados 6 de los Artículos 11 ó 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del otro Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio imponible de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar. (Convenio entre Ecuador y Uruguay, 2012)

En el caso que BANAMEX no acepte aplicar el convenio por que no está dispuesto a recibir un valor menor al pactado, Banco Pichincha deberá realizar un **gross up** para incrementar el costo del pago del interés al realizar la retención del impuesto a la renta, BANAMEX no se verá afectado y recibirá el importe original del valor de los intereses.

Calculamos el gross up de la aplicación del convenio y sin la aplicación del convenio.

Aplicando el convenio:

Tabla 22: Calculamos el gross up – Aplicando el convenio - BANAMEX

Valor a pagar	22.533,25
Gross up 10%	2.503,69
Base para la retención	25.036,94

22.533,25	90%
x	100%
x=	22533,25 x 100%
	90%
x=	25.036,94
Gross up=	25.036,94 - 22.533,25
Gross up=	2.503,69

Sin la aplicación del Convenio:

Tabla 23: Calculamos el gross up – Sin la aplicación del convenio - BANAMEX

Valor a pagar	22.533,25
Gross up 22%	6.355,53
Base para la retención	28.888,78

22.533,25	78%
x	100%
x=	22.533,25 x 100%
	78%
x=	28.888,78
Gross up=	25.036,94 - 22.533,25
Gross up=	6.355,53

En el siguiente cuadro vamos a comprar la aplicación del convenio y sin aplicar el convenio:

Tabla 24: Comparativo con la aplicación y sin la aplicación del convenio del 10% de retención

INTERESES		\$ 22.533,25	
	Con la aplicación del convenio		Sin la aplicación del convenio
Valor a pagar	\$ 22.533,25		\$ 22.533,25
<i>Gross up</i>	\$ 2.503,69		\$ 6.355,53
Valor liquidación	\$ 25.036,94		\$ 28.888,78
Total liquidación	\$ 25.036,94		\$ 28.888,78
Retención 10% /22% de I.R.	\$ (2.503,69)		\$ (6.355,53)
Pago al proveedor	\$ 22.533,25		\$ 22.533,25
Gasto total real:	\$ 22.533,25		\$ 28.888,78
Porción deducible	\$ 22.533,25		\$ 22.533,25
Porción no deducible	\$ 2.503,69		\$ 6.355,53

El cobro de intereses no es objeto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de acuerdo a la absolución de consultas de la Administración Tributaria no se deberá emitir ninguna factura, pues la operación de crédito realizada a través de un contrato de mutuo o préstamo de dinero, no produce el hecho generador del IVA, en vista que no implica ningún tipo de transferencia de bienes corporales ni la prestación de un servicio, conforme lo establece el artículo 52 de la Ley (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004), no es necesario emitir tampoco una liquidación de compras de bienes y prestación de servicios por no cumplir con el pre supuesto del artículo 70 de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) y debido al mismo motivo mencionado anteriormente conforme el artículo 13 del Reglamento (Reglamento de comprobantes de venta, 2010).

Tabla 25: Ahorro Neto del 10% aplicando el convenio

Ahorro bruto:	3.851,84	Efecto en el incremento de Participación Trabajadores por un menor gasto.
15% Part. Trabajadores:	(577,78)	
22% Impuesto a la renta:	127,11	Efecto por la deducción adicional de I.R. por Participación Trabajadores.
Ahorro neto:	3.401,17	

El caso anterior se demostró que BANAMEX no accedió a recibir la retención como parte del pago, por lo que no es posible obtener el ahorro total por el monto de gross up que figura como gasto no deducible. Sin embargo si BANAMEX accediera a recibir la retención como parte de pago es posible alcanzar un mayor beneficio.

En el siguiente cuadro, se plantea el ejercicio si BANAMEX accediera a la retención y la aplicación del convenio y sin la aplicación del convenio:

Tabla 26: Comparativo con la aplicación y sin la aplicación del convenio con aprobación de la retención

INTERESES		\$ 22.533,25	
Con la aplicación del convenio		Sin la aplicación del convenio	
Valor a pagar	\$ 22.533,25		\$ 22.533,25
<i>Gross up</i>	\$ -		\$ 6.355,53
Valor liquidación	\$ 22.533,25		\$ 28.888,78
Total liquidación	\$ 22.533,25		\$ 28.888,78
Retención 22% de I.R.	\$ -		\$ (6.355,53)
Pago al proveedor	\$ 22.533,25		\$ 22.533,25
Gasto total real:	\$ 22.533,25		\$ 28.888,78
Porción deducible	\$ 22.533,25		\$ 22.533,25
Porción no deducible	\$ -		\$ 6.355,53

Ahorro bruto:	6.355,53	Efecto en el incremento de Participación
15% Part. Trabajadores:	(953,33)	Trabajadores por un menor gasto.
22% Impuesto a la renta:	209,73	Efecto por la deducción adicional de I.R.
Ahorro neto:	5.611,93	por Participación Trabajadores.

3.7 CÁNONES O REGALÍAS

En el artículo 12 de los convenios de Ecuador con Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay tomamos como referencia varios convenios que expresan:

Tenemos en cuenta que el término “cánones” en el sentido de este Artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión del uso, de derechos de autor, patentes, marcas registradas, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimientos secretos, o cualquier otra propiedad intangible, o por el uso o la

concesión de uso de equipo industrial, comercial o científico, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, e incluye los pagos de cualquier naturaleza relacionados con películas cinematográficas y obras grabadas en películas, cintas y otros medios de reproducción destinadas a la televisión. (Convenio entre Ecuador y Canadá, 2002)

O el término "regalías", en el sentido de este Artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y sonido, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad intangible, incluido los derechos relacionados con la obtención de variedades vegetales, o por el uso o el derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. (Convenio entre Ecuador y Uruguay, 2012)

El artículo 12 en el numeral 2 cita lo siguiente: Sin embargo, dichas regalías pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 10 por ciento del importe bruto de las regalías por el uso o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos; 15 por ciento del importe bruto de las regalías en todos los demás casos. (Convenio entre Ecuador y Uruguay, 2012)

Ejemplo de aplicación del convenio:

Corporación Favorita C.A. es una empresa ecuatoriana que brinda servicios y comercio ubicada en Quito - Ecuador, contrata a Doria Sistemas Uruguay ubicada en Uruguay para que implemente un software sobre facturación, control de stock y gestión comercial; la Corporación Favorita C.A. paga anualmente 1'500.000 dólares a Doria Sistemas Uruguay. Esta empresa envía la factura a Corporación Favorita C.A. y adjunta el certificado de residencia fiscal que acredita su residencia para efectos fiscales en Uruguay.

Por el convenio que se brinda de Ecuador con Uruguay por el concepto de regalía aplicamos el 15% de retención, se le pagaría un valor menor a Doria Sistemas Uruguay:

Tabla 27: Valor a pagar aplicando el convenio

Valor facturado	1.500.000,00
Retención 15%	(225.000,00)
Valor a pagar	1.275.000,00

El artículo 24 numeral 4 cita: A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del Artículo 9 o de los apartados 6 de los Artículos 11 o 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del otro Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio imponible de dicha

empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar. (Convenio entre Ecuador y Uruguay, 2012)

En el caso que el proveedor no acepte aplicar el convenio por que no está dispuesto a recibir un valor menor al pactado de la factura, la empresa ecuatoriana deberá realizar un **gross up** para incrementar el costo del servicio al realizar la retención del impuesto a la renta, el proveedor no se verá afectado y recibirá el importe original del valor de la factura.

Calculamos el gross up de la aplicación del convenio y sin la aplicación del convenio.

Aplicando el convenio:

Tabla 28: Calculamos el gross up – Aplicando el convenio – 15 % de retención

Valor a pagar	1.500.000
Gross up 15%	264.705,88
Valor liquidación	1.764.705,88
IVA 12%	211.764,71
Total Liquidación	1.976.470,59

1.500.000	85%
x	100%
x=	$1.500.000 \times 100\%$
	85%
x=	1.764.705,88
Gross up=	$1.764.705,88 - 1.500.000$
Gross up=	264.705,88

Sin la aplicación del convenio:

Tabla 29: Valor a pagar sin aplicar el convenio

Valor a pagar	1.500.000
Gross up	423.076,92
Valor liquidación	1.923.076,92
IVA 12%	230.769,23
Total Liquidación	2.153.846,15

La manera que calculamos el **gross up** para este ejemplo es la siguiente:

Tabla 30: Calculo del Gross up - Regalias

1.500.000	78%
x	100%
x=	$1.500.000 \times 100\%$
	78%
x=	1.923.076,92
Gross up=	$1.923.076,92 - 1.500.000$
Gross up=	423.076,92

Ahora vamos a realizar un cuadro comparativo, donde se aplica el convenio y cuando no se aplica el convenio:

Tabla 31: Cánones del 15 % de Retención

CÁNONES		1.500.000	
	Con la aplicación del convenio		Sin la aplicación del convenio
Valor a pagar	1.500.000		1.500.000
<i>Gross up</i>	264.705,88		423.076,92
Valor liquidación	1.764.705,88		1.923.076,92
IVA	211.764,71		230.769,23
Total liquidación	1.976.470,59		2.153.846,15
Retención 15% /22% de I.R.	(264.705,88)		(423.076,92)
Retención 100% de IVA	(211.764,71)		(230.769,23)
Pago al proveedor	1.500.000,00		1.500.000,00
Gasto total real:	1.500.000,00		1.923.076,92
Porción deducible	1.500.000,00		1.500.000,00
Porción no deducible	264.705,88		423.076,92

Se verifica que el valor de la factura coincide con el valor a pagar al proveedor después de realizar la retención del 100% de IVA conforme lo establecido en el artículo 1 numeral 4 de la Resolución 124 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 263 del 30 de enero de 2008 (Servicio de Rentas Internas, 2008); y el 22% (tarifa vigente para sociedades) del Impuesto a la Renta correspondiente al artículo 4 de la Resolución NAC-DGERCGC14-00787 del Suplemento del Registro Oficial 346 del 30 de septiembre del 2014 (Servicio de Rentas Internas, 2014).

Tabla 32: Ahorro Neto del 10% aplicando el convenio

Ahorro bruto:	158.371,04	Efecto en el incremento de Participación Trabajadores por un menor gasto Efecto por la deducción adicional de I.R. por Participación Trabajadores
15% Part. Trabajadores:	(23.755,66)	
22% Impuesto a la renta:	5.226,24	
Ahorro neto:	139.841,63	

El caso anterior se demostró que el proveedor no accedió a recibir la retención como parte del pago, por lo que no es posible obtener el ahorro total por el monto de gross up que figura como gasto no deducible. Sin embargo si el proveedor accediera a recibir la retención como parte de pago es posible alcanzar un mayor beneficio.

En el siguiente cuadro, se plantea el ejercicio si el proveedor accediera a la retención y la aplicación del convenio y sin la aplicación del convenio:

Tabla 33: Comparativo con la aplicación y sin la aplicación del convenio con aprobación de la retención

CÁNONES		1.500.000	
Con la aplicación del convenio		Sin la aplicación del convenio	
Valor a pagar	1.500.000		1.500.000
Gross up	-		423.076,92
Valor liquidación	1.500.000,00		1.923.076,92
IVA	180.000,00		230.769,23
Total liquidación	1.680.000,00		2.153.846,15
Retención 22% de I.R.	-		(423.076,92)
Retención 100% de IVA	(180.000,00)		(230.769,23)
Pago al proveedor	1.500.000,00		1.500.000,00
Gasto total real:	1.500.000,00		1.923.076,92
Porción deducible	1.500.000,00		1.500.000,00
Porción no deducible	-		423.076,92

Ahorro bruto:	423.076,92	Efecto en el incremento de Participación Trabajadores por un menor gasto Efecto por la deducción adicional de I.R. por Participación Trabajadores
15% Part. Trabajadores:	(63.461,54)	
22% Impuesto a la renta:	13.961,54	
Ahorro neto:	373.576,92	

Ganancias de capital

En el artículo 13 de los convenios de Ecuador con Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay tomamos como referencia al convenio con Uruguay que expresa:

Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, tal como se define en el artículo 6, situados en el otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en este último Estado.

Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante para la prestación de servicios personales independientes, incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o, aeronaves, solo pueden someterse a imposición en el Estado contratante donde resida el enajenante.

Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante en la enajenación de títulos u otros derechos representativos del capital de una sociedad situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 pueden someterse a imposición solo en el Estado contratante en el que el bien está situado. (Convenio entre Ecuador y Uruguay, 2012)

Ejemplo de la aplicación del Convenio:

La empresa ecuatoriana INMOBIONICA que brinda servicios de hotelería, posee un establecimiento en Uruguay, dicho establecimiento ha decidido vender todos los hoteles que se encuentran en la capital de Uruguay, estos mismo se encontraban formando parte del activo de la entidad, como beneficio de esta venta se generó una utilidad de 300.000 dólares, el establecimiento de la empresa INMOBIONICA tributó por este valor de conformidad con la legislación Uruguaya, conforme lo establece el artículo 13 del Convenio.

La renta fue sometida por la legislación de Uruguay, la legislación ecuatoriana por medio del artículo 59 de la Ley de Régimen Tributario Interno plantea una exención indicando que toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en el exterior, que han sido sometidas a imposición en otro Estado, se excluirán de la base imponible en Ecuador y en consecuencia no estarán sometidas a imposición. En el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales no se aplicará la exención y las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004).

Es posible acogerse a esta exención debido a que Uruguay no consta en la lista de paraísos fiscales difundida por el Servicio de Rentas Internas por medio del artículo 2

de la resolución NACDGERCGC15-00000052 publicada en el Registro Oficial 430 del 3 de febrero de 2015. (Servicio de Rentas Internas, 2015)

3.8 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

En el artículo 14 de los convenios de Ecuador con Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay, menciona que cuando una persona física residente de un Estado presta sus servicios profesionales en el otro Estado, la renta solo podrá ser sometida a imposición en el estado que sea residente o que la persona haya permanecido 183 días o más durante el año correspondiente en el otro Estado, en cuyo caso estas rentas podrán ser sometidas a imposición en este estado donde se prestaron los servicios.

El término “servicios profesionales” comprende las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o formativo así como las actividades independientes de Médicos Abogados, Ingenieros, Arquitectos, Dentistas y Auditores. (Convenio entre Ecuador y Canadá, 2002) (Convenio entre Ecuador y México, 2000) (Convenio entre Ecuador y Chile, 2004) (Convenio entre Ecuador y Uruguay, 2012) (Convenio entre Ecuador y Brasil, 1988)

Considera el artículo 8 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno el cual establece, al igual que el Convenio, un plazo de 183 días de permanencia para que una persona sea considerada residente fiscal de Ecuador (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010), por lo cual, si la persona natural extranjera que presta un servicio en el país no permanece por un período mayor a 183 días dentro del mismo año, el ingreso obtenido como contraprestación no estará

sometido a imposición en Ecuador, esto sólo si esta remuneración u honorarios son pagados en el exterior por sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador, conforme lo establece el artículo 8 numeral 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004)..

Ejemplo de la aplicación del convenio:

El hospital de Clínicas de Pichincha de Ecuador requiere los servicios profesionales del doctor Francisco Peralta cardiólogo, ciudadano residente uruguayo, el hospital de Clínicas de Pichincha solicita un seminario del Doctor Peralta en cuanto a nuevas formas de operar un corazón abierto, por lo que el seminario durara tres semanas en la ciudad de Quito. El Hospital de Clínicas de Pichincha cancelara una remuneración de 55.000 dólares. El Dr. Peralta entrega su certificado de residencia fiscal.

En este ejemplo si no aplicamos el convenio; debemos proceder con el rubro de **gross up** en la liquidación de compras de bienes o servicios. Este rubro retribuirá al valor de la retención que se debe realizar al tratarse de un pago al exterior. El **gross up** incrementa el costo del servicio y de esta manera realiza la retención en la fuente de impuesto a la renta; el proveedor no se verá afectado y recibirá el importe original de la factura.

Se debe tomar en cuenta que el valor incurrido por **gross up** es un gasto no deducible de impuesto a la renta conforme lo establecido en el artículo 30 del Reglamento (Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno, 2010).

El cálculo sería el siguiente:

Tabla 34: Cálculo total de liquidación - Servicios personales independientes

Valor a pagar	55.000
Gross up	15.512,82
Valor liquidación	70.512,82
IVA 12%	8.461,54
Total Liquidación	78.974,36

La manera que calculamos el gross up es la siguiente:

Tabla 35: Cálculo del Gross up - Servicios personales independientes

55.000	78%
x	100%
x=	55.000 x 100%
	78%
x=	70.512,82
Gross up=	70.512,82 - 55.000
Gross up=	15.512,82

Demostramos por medio de un cuadro comparativo la aplicación del Convenio y sin la aplicación del convenio:

Tabla 36: Total Factura Dr. Peralta

TOTAL FACTURA DR. PERALTA		\$ 55.000,00	
Con la aplicación del convenio		Sin la aplicación del convenio	
Valor a pagar	\$ 55.000,00		\$ 55.000,00
<i>Gross up</i>	\$ -		\$ 15.512,82
Valor liquidación	\$ 55.000,00		\$ 70.512,82
IVA	\$ 6.600,00		\$ 8.461,54
Total liquidación	\$ 61.600,00		\$ 78.974,36
Retención 22% de I.R.	\$ -		\$ (15.512,82)
Retención 100% de IVA	\$ (6.600,00)		\$ (8.461,54)
Pago al proveedor	\$ 55.000,00		\$ 55.000,00
Gasto total real:	\$ 55.000,00		\$ 70.512,82
Porción deducible	\$ 55.000,00		\$ 55.000,00
Porción no deducible	\$ -		\$ 15.512,82

Se verifica que el valor de la factura coincide con el valor a pagar al proveedor después de realizar la retención del 100% de IVA conforme lo establecido en el artículo 1 numeral 4 de la Resolución 124 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 263 del 30 de enero de 2008 (Servicio de Rentas Internas, 2008); y el 22% (tarifa vigente para sociedades) del Impuesto a la Renta correspondiente al artículo 4 de la Resolución NAC-DGERCGC14-00787 del Suplemento del Registro Oficial 346 del 30 de septiembre del 2014 (Servicio de Rentas Internas, 2014).

Tabla 37: Cálculo de Ahorro Neto

Ahorro bruto	15.512,82	Efecto en el incremento de Part. Trabajadores por
15% Part. Trabajadores	(2.326,92)	un menor gasto.
22% Impuesto a la renta	511,92	Efecto por la deducción adicional de I.R. por
Ahorro neto	<u>13.697,82</u>	Part. Trabajadores.

Si el Dr. Peralta estuviera más de 183 días para realizar sus actividades, no se verá beneficiado del convenio como en el caso anterior. Si su permanencia es mayor a los 183 días es recomendable inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Servicio de Rentas Internas en el Ecuador de esta manera se gravaran los ingresos ecuatorianos sometidos bajo la legislación ecuatoriana de manera regular.

3.9 SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES

Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo dependiente solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro Estado contratante. Si el trabajo dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en él.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo dependiente realizado en el otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:

El perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de doce meses que comience

o termine en el año fiscal considerado, las remuneraciones se pagan por, o en nombre de un empleador que no sea residente del otro Estado, y las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente o una base fija que el empleador tenga en el otro Estado.

No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas de un trabajo dependiente realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional solo podrá someterse a imposición en ese Estado. (Convenio entre Ecuador y Uruguay, 2012)

Como ejemplo; cuando una compañía Ecuatoriana contratara a una persona natural residente de Ecuador para ejercer un empleo en Uruguay, y si esta misma compañía paga la remuneración de la persona; la imposición solo se sujetara en Ecuador de acuerdo con la ley ecuatoriana. Esto es siempre y cuando permanezca a un periodo menor de 183 días. Caso contrario si pasa de este límite para ejercer su empleo sus ingresos recibidos tendrán su imposición en Uruguay, de igual manera bajo la normativa uruguaya.

3.10 OTRAS RENTAS

El artículo 21 de los convenios de Canadá, México, Chile y Uruguay y artículo 22 del convenio de Brasil habla sobre el tratamiento a las rentas que no están mencionadas en ninguno de los otros artículos anteriores, lo que indica que las rentas de un residente de un Estado, cualquiera que sea la procedencia de las mismas, que no estén mencionadas en los demás artículos del Convenio, sólo pueden someterse a imposición en dicho Estado.

“Las rentas de un residente de un Estado Contratante no tratadas en los artículos anteriores y procedentes del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.” (Convenio entre Ecuador y Brasil, 1988)

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- Los convenios internacionales para evitar la doble tributación, firmados por el Ecuador con Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay en el ámbito latinoamericano, constituyen una normativa tributaria vital que favorece la inversión extranjera y que permite dinamizar el comercio exterior con estos países siendo un atractivo para los inversionistas, la tributación en uno solo de los países.
- Para los contribuyentes ecuatorianos y de los países mencionados, los convenios para evitar la doble tributación facilitan que las transacciones comerciales entre los mismos y desde el punto de vista tributario, simplifican temas puntuales como retenciones en la fuente de renta, que da como efecto la minimización de gastos no deducibles en los pagos que se realicen al exterior.
- Los convenios para evitar la doble tributación de los países antes citados facilitan la provisión de bienes y servicios de aquellos países que tienen determinadas ventajas competitivas de sus productos y servicios, en otras palabras cada país tiene una ventaja competitiva que la aprovecha en este tipo de transacciones.

- A pesar que el marco jurídico de los convenios se encuentran vigentes desde hace mucho tiempo, sin embargo los contribuyentes del Ecuador y muchos asesores tributarios no han aprovechado las ventajas que estos cuerpos legales brindan en su artículo, en otras palabras no existe la adecuada difusión, capacitación y conocimiento que permita cumplir con el objeto para el cual fueron creados.

4.2 RECOMENDACIONES

- Organizar a través de centros de capacitación profesional, temas vinculados con el conocimiento y la difusión del alcance y de los beneficios de los Convenios internacionales para evitar la doble tributación con los países mencionados en el presente trabajo de titulación.
- Buscar relación entre pares profesionales tributarios de Canadá, México, Chile, Brasil y Uruguay, con la finalidad de profundizar la normativa tributaria en esos países y orientar adecuadamente el tipo de transacciones comerciales que beneficien al inversionista ecuatoriano.
- Organizar con la facultad de ciencias administrativas y contables, seminarios, talleres, charlas vinculadas con la temática de los convenios internacionales para evitar la doble tributación en el marco de la vinculación con la comunidad por parte de docentes y estudiantes.

REFERENCIAS

1. Código Civil. (24 de Junio de 2005). Ecuador: Registro Oficial, Suplemento 46.
2. Convenio entre Ecuador y Brasil. (1 de Enero de 1988). *Convenio entre la República del Ecuador y la República Federativa del Brasil para evitar la doble imposición y prevenir la evasión tributaria con respecto a los impuestos sobre la renta*. Registro Oficial, Suplemento 865, Febrero 2 de 1988.
3. Convenio entre Ecuador y Canadá. (1 de Enero de 2002). *Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta*. Registro Oficial, Suplemento 484, Diciembre 31 de 2001.
4. Convenio entre Ecuador y Chile. (1 de Enero de 2004). *Convenio entre la República del Ecuador y la República de Chile para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio*. Registro Oficial, Suplemento 189, Octubre 14 de 2003.
5. Convenio entre Ecuador y México. (13 de Diciembre de 2000). *Convenio entre la República del Ecuador y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta*. Registro Oficial, Suplemento 281, Marzo 9 de 2001.
6. Convenio entre Ecuador y Uruguay. (16 de Enero de 2012). *Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal*. Registro Oficial, Suplemento 619, Enero 16 de 2012.
7. Ferrer Grau, V. P., & García López, R. M. (2012). *La fiscalidad internacional*. Fundación para la investigación Juan Manuel Flores Jimeno.
8. Humana, M. d. (s.f.). *Legalización para presentar documentos en el Exterior*. Obtenido de Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: <http://www.cancilleria.gob.ec/legalizacion-para-presentar-documentos-en-el-exterior/>
9. Ley de Régimen Tributario Interno. (21 de Octubre de 2004). Quito, Ecuador: Registro Oficial, Suplemento 463 del 17 de noviembre del 2004.

10. Ley Equidad Tributaria. (28 de Diciembre de 2007). *Ley Reformativa para la Equidad Tributaria del Ecuador*. Manabí, Ecuador: Registro Oficial Suplemento 242 del 29 de diciembre de 2007.
11. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (s.f.). *¿En que consiste Apostillar un documento?* Obtenido de <http://www.cancilleria.gob.ec/en-que-consiste-apostillar-un-documento/>
12. Reglamento de comprobantes de venta. (15 de Julio de 2010). *Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios*. Quito, Ecuador: Registro Oficial 247 del 30 de julio de 2010.
13. Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno. (28 de Mayo de 2010). *Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno*. Quito, Ecuador: Registro Oficial, Suplemento 209 del 8 de junio de 2010.
14. SA, E. E. (05 de 2016). *Brasil Fiscalidad*. Obtenido de Santander: <https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/brasil/fiscalidad#individual>
15. SA, E. E. (03 de 2016). *Canadá fiscalidad*. Obtenido de Santander: <https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/canada/fiscalidad>
16. SA, E. E. (04 de 2016). *Chile Fiscalidad*. Obtenido de Sanatander: <https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/chile/fiscalidad>
17. SA, E. E. (06 de 2016). *México fiscalidad*. Obtenido de Santander: <https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/mexico/fiscalidad>
18. SA, E. E. (06 de 2016). *Uruguay Entorno de Negocios*. Obtenido de Santander: <https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/uruguay/entorno-empresarial>
19. Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica. (s.f.). *Modelos de certificado de residencia fiscal*. Obtenido de http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ecofin/docs/normativa/referencias/modelos_certificado_rf.pdf
20. Servicio de Rentas Internas. (21 de Febrero de 2008). Paraísos y regímenes fiscales preferentes. *NAC-DGER2008-0182*. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Suplemento 285 del 29 de febrero de 2008.
21. Servicio de Rentas Internas. (2008). Porcentajes de retención en la fuente del IVA. *NAC-DGER2008-0124*. Quito, Ecuador: Registro Oficial, Suplemento 263 del 30 de enero de 2008.

22. Servicio de Rentas Internas. (30 de Septiembre de 2014). Porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta. *NAC-DGERCGC14-00787*. Quito, Ecuador: Registro Oficial, Suplemento 346 del 2 de octubre de 2014.
23. Servicio de Rentas Internas. (18 de Diciembre de 2015). Ley de Régimen Tributario Interno . *Ley de Régimen Tributario Interno* . Registro Oficial, Suplemento 652, Diciembre 18 de 2015.
24. The Hague Conference on Private International Law. (2013). Apostille Handbook. *A Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention*. The Hague, Netherlands.
25. Vallejo Aristizábal , S., & Maldonado López, G. (s.f.). *Los convenios para evitar la doble imposición*. Ecuador: SRI.

ANEXOS

Anexo 1: Convenio Canadá

Celebrado en Quito, el 28 de junio de 2001.

Protocolo suscrito en Quito el 21 de diciembre de 2001

Publicado en el Registro Oficial # 484 de 31 de diciembre de 2001.

Fecha de vigencia: 1 de enero de 2002

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL
GOBIERNO DE CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO A LA RENTA**

I. Ámbito del convenio

Art. 1.- Personas Comprendidas.- El presente Convenio se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

Art. 2.- Impuestos Comprendidos.-

1. El presente Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción.
2. Se considerarán impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre ganancias provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles.
3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el presente Convenio son:
 - (a) en Canadá: los impuestos sobre la renta gravados por el Gobierno de Canadá en la Ley de Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act), denominado en lo sucesivo “impuesto canadiense”; y,
 - (b) en Ecuador: el impuesto sobre la renta gravado por el Gobierno del Ecuador en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), denominado en lo sucesivo “impuesto ecuatoriano”.

4. El presente Convenio se aplicará asimismo a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de suscripción del mismo y que se añadan o sustituyan a los impuestos actuales. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se notificarán las modificaciones importantes que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

II. Definiciones

Art. 3.- Definiciones Generales.-

1. A los efectos de este Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:
 - (a) el término “Canadá”, empleado en un sentido geográfico, significa el territorio del Canadá;
 - (b) el término “Ecuador” significa la República del Ecuador;
 - (c) las expresiones “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante”, significan Ecuador o Canadá, según el contexto;
 - (d) el término “nacional” significa:
 - (i) toda persona natural que posea la nacionalidad de un Estado Contratante;
 - (ii) toda persona jurídica, sociedad de personas o asociación constituida de conformidad con la legislación vigente de un Estado Contratante;
 - (e) el término “persona” comprende las personas naturales, las sucesiones indivisas, los fideicomisos, las personas jurídicas y cualquier otra agrupación de personas;
 - (f) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica para efectos impositivos;.

(g) las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;

(h) la expresión “autoridad competente” significa:

(i) en Canadá, el Ministro de Renta Nacional o su representante autorizado;

(ii) en Ecuador, el Director General del Servicio de Rentas Internas; e,

(i) la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando el buque o aeronave opera exclusivamente entre puntos situados en el otro Estado Contratante.

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un momento determinado, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación impositiva sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.

Art. 4.- Residente.-

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado Contratante” significa:

(a) toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga; sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado; y,

(b) ese Estado, o una subdivisión política o autoridad local del mismo, o cualquier agencia o instrumentalidad de dicho Estado, subdivisión o autoridad.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona natural fuere residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

- (a) la persona será considerada como residente solamente del Estado donde disponga de una vivienda permanente; si dispusiese de una vivienda permanente en ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

- (b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no dispusiera de una vivienda permanente en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde viva habitualmente;

- (c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional; y,

- (d) si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los dos Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una compañía sea residente de ambos Estados Contratantes, su caso se resolverá de la siguiente manera:

- (a) se considerará residente solamente del Estado del cual es nacional; y,

- (b) si no es nacional de ninguno de los Estados, las autoridades competentes de los Estados Contratantes tratarán de mutuo acuerdo de resolver el caso y determinar el modo de aplicación del Convenio. En ausencia de tal acuerdo, dicha persona no tendrá derecho a reclamar las desgravaciones o exoneraciones impositivas previstas por el presente Convenio.

4. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona distinta de una persona natural o de una compañía sea residente de ambos Estados Contratantes, las autoridades competentes de los Estados Contratantes tratarán de mutuo acuerdo de resolver el caso y determinar el modo de aplicación del Convenio. En ausencia de tal acuerdo, dicha

persona no tendrá derecho a reclamar las desgravaciones o exoneraciones impositivas previstas por el presente Convenio.

Art. 5.- Establecimiento Permanente.-

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial:
 - (a) una sede de dirección;
 - (b) una sucursal;
 - (c) una oficina;
 - (d) una fábrica, planta o taller industrial o de ensamblaje; y,
 - (e) una mina, pozo de petróleo o gas, cantera o cualquier otro, lugar relacionado con la exploración o explotación de recursos naturales.
3. El término “establecimiento permanente” incluirá igualmente:
 - (a) Una obra de construcción o un proyecto de construcción o instalación, y las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto de construcción o actividad tenga una duración mayor a seis meses; y,
 - (b) La prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, por parte de una empresa de un Estado Contratante a través de sus empleados u otras personas naturales contratadas por la empresa para tal propósito en el otro Estado Contratante, pero solo donde aquellas actividades continúen (para el mismo proyecto o para uno relacionado) dentro de ese Estado por un período o períodos que en total excedan de 183 tres días, dentro de un período cualquiera de doce meses.

A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este párrafo, la duración de las actividades realizadas por una empresa incluirá las actividades realizadas por empresas asociadas en el sentido del artículo 9, si las actividades de ambas empresas asociadas están relacionadas entre sí.

4. No obstante las disposiciones anteriores del presente Artículo, se entenderán que el término “establecimiento permanente” no incluye:

(a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;

(b) el mantenimiento de existencias de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

(c) el mantenimiento de existencias de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;

(d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de recoger información, para la empresa;

(e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar; y,

(f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

5. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 cuando una persona, distinta de un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculen para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las

mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.

6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
7. El hecho de que una compañía con domicilio o residencia en un Estado Contratante controle o sea controlada por una compañía con domicilio o residencia en el otro Estado Contratante, o que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas compañías en establecimiento permanente de la otra.

III. Imposición de ingresos

Art. 6.- Rendimientos de Bienes Inmuebles.-

1. Los rendimientos que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles, incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales, situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Para los fines del presente Convenio, la expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya, para los fines del impuesto pertinente, la legislación del Estado Contratante en donde los bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado, el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques y aeronaves no tendrán la consideración de bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos provenientes de la utilización directa o el arrendamiento, así como a cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles y a los ingresos provenientes de su enajenación.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales independientes.

Art.- 7.- Beneficios Empresariales.-

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente.
2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la cual constituye un establecimiento permanente y con todas las otras personas relacionadas a la misma.
3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines de establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines incurridos de ese modo, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte, siempre y cuando dichos gastos sean deducibles de acuerdo con la legislación tributaria de ese Estado Contratante.

4. No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por razón de la simple compra bienes o mercancías para la empresa.
5. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año según el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.
6. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente artículo.

Art. 8.- Transporte Marítimo y Aéreo.-

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante derivados de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y en el artículo 7, los beneficios derivados de la explotación de buques o aeronaves utilizados principalmente en el transporte de pasajeros o carga exclusivamente entre lugares de un Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 son también aplicables a los beneficios provenientes de la participación en un “pool”, en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional.
4. En este artículo,
 - (a) el término “beneficios” incluye:
 - (i) utilidades brutas y rentas generadas directamente por la operación de buques o aeronaves en tráfico internacional; y,

(ii) los intereses sobre cantidades generadas directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, siempre que dichos intereses sean con ocasión de tales operaciones;

(b) el término “explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional” por una empresa incluye:

(i) el fletamento o arrendamiento de buques o aeronaves; y,

(ii) el arrendamiento de contenedores y equipo conexo.

Por dicha empresa, siempre y cuando tal fletamento o arrendamiento sea con ocasión de la explotación por dicha empresa de los buques o aeronaves en tráfico internacional.

Art. 9.-Empresas Asociadas.-

1. Cuando:

(a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante; o,

(b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante:

Y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas entre empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y, en consecuencia, serán sometidos a imposición.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado- y someta, en consecuencia, a imposición- los beneficios sobre los cuales una empresa del

otro Estado Contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, y los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario.

3. Un Estado Contratante no podrá modificar los beneficios de una empresa de acuerdo a las circunstancias referidas en el apartado 1 después de haber expirado el plazo previsto en su legislación nacional y, en ningún caso, después de cinco años desde el final del año en el cual los beneficios que estarían sujetos a tal cambio habrían, a no ser por las condiciones mencionadas en el apartado 1, sido devengados por esa empresa.
4. Lo previsto en los apartados 2 y 3 no se podrá aplicar en casos de fraude, incumplimiento premeditado o negligencia grave.

Art. 10.- Dividendos.-

1. Los dividendos pagados por una compañía residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado Contratante en que resida la compañía que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder el:
 - (a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una compañía que controla directa o indirectamente al menos el 25 por ciento del poder de voto en la compañía que paga los dividendos, salvo en el caso de dividendos pagados por una corporación de inversiones perteneciente a no residentes y, que sea residente del Canadá; y,

(b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los otros casos.

Las disposiciones de este apartado no afectan la imposición de la compañía respecto de los beneficios con cargo a los que se pagan los dividendos.

3. El término “dividendos” en el sentido de este artículo significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar de los beneficios, así como los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación tributaria del Estado del que la compañía que hace la distribución es residente.
4. Las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que es residente la compañía que paga los dividendos, una actividad industrial o comercial a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro Estado unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
5. Cuando una compañía residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la compañía, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado, o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o una base fija situados en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la compañía a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.
6. Nada en este Convenio se interpretará como un impedimento para que un Estado Contratante imponga a la enajenación de bienes inmuebles situados en ese Estado por una compañía que se dedica al comercio de bienes inmuebles o a las ganancias de una compañía imputables a un establecimiento permanente en ese Estado, un impuesto

adicional al que se cobraría sobre las ganancias de una compañía nacional de ese Estado, salvo que cualquier impuesto adicional así exigido no exceda del 5 por ciento del monto de tales ganancias y las mismas no hayan sido sujetas a este impuesto adicional en los años fiscales anteriores. Para los fines de esta disposición, el término “ganancias” significa las ganancias atribuibles a la enajenación de tales bienes inmuebles situados en un Estado Contratante que pueden ser gravadas por dicho Estado a tenor de lo dispuesto en el Artículo 6 o en los apanados 1 ó 4 del artículo 13, y las utilidades, incluida cualquier ganancia, imputable a un establecimiento permanente en un Estado Contratante en el año o en los años anteriores después de deducir todos los impuestos, distintos del impuesto adicional aquí mencionado, que fueron cobrados sobre dichas utilidades en ese Estado.

Art. 11.- Intereses.-

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante de dónde procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo del interés es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto de los intereses.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses que provengan de un Estado Contratante estarán exentos de impuestos en dicho Estado sí:
 - (a) son pagados al Gobierno del otro Estado Contratante o a una subdivisión política o autoridad local o al Banco Central de ese Estado;
 - (b) son pagados a un residente de Ecuador en relación con un préstamo o crédito otorgado, garantizado o asegurado por una organización especificada y acordada por un intercambio de notas entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes; y,
 - (c) son pagados a un residente de Canadá en relación con un préstamo o crédito otorgado, garantizado o asegurado por la Corporación de Fomento a las Exportaciones.

4. El término “intereses” en el sentido de este artículo, significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria, y en particular los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos y obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos, así como cualquier otro rendimiento que por la legislación del Estado de donde procedan estén sujetos al mismo tratamiento tributario que los rendimientos obtenidos de las cantidades dadas en préstamo. Sin embargo el término “intereses” no incluye las rentas comprendidas en los artículos 8 ó 10.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el pagador sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando la persona que paga los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y éstos estén a cargo del establecimiento permanente o de la base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante en que estén situados el establecimiento permanente o la base fija.
7. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el pagador y el beneficiario efectivo, o de las que ambos mantengan con terceros, el importe de los intereses habida cuenta del crédito por el que se paguen exceda del que hubieran convenido el pagador y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Art. 12.- Cánones.-

1. Los cánones procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos cánones también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante de donde procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
 - (a) 10 por ciento del importe bruto de los cánones por el uso o la concesión del uso de equipos industriales, comerciales, o científicos; y,
 - (b) 15 por ciento del importe bruto de los cánones en todos los demás casos.
3. El término “cánones” en el sentido de este Artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión del uso, de derechos de autor, patentes, marcas registradas, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimientos secretos, o cualquier otra propiedad intangible, o por el uso o la concesión de uso de equipo industrial, comercial o científico, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, e incluye los pagos de cualquier naturaleza relacionados con películas cinematográficas y obras grabadas en películas, cintas y otros medios de reproducción destinadas a la televisión.
4. Las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán cuando el beneficiario efectivo de los cánones, residente de un Estado Contratante, realiza en el Estado Contratante de donde procede los cánones, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y el derecho o el bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
5. Los cánones se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando la persona que los paga es residente de ese Estado. Sin embargo, cuando la persona que paga los

cánones, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales la obligación de pagar los cánones fue establecida, y éstos estén a cargo del establecimiento permanente o de la base fija, tales cánones se considerarán procedentes del Estado Contratante en que estén situados el establecimiento permanente o la base fija.

6. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de los cánones, o de ambos mantengan con terceros, el importe de los cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones del presente artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Art. 13.- Ganancias de Capital.-

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las ganancias provenientes de la enajenación de bienes muebles que forman parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga o hubiese tenido en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija de la que disponga o hubiese dispuesto un residente de un Estado Contratante en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, comprendidas las ganancias provenientes de la enajenación de dicho establecimiento permanente (sólo o con toda la empresa) o base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. Las ganancias percibidas por una empresa de un Estado Contratante, derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, sólo podrán someterse a imposición en ese Estado.

4. Las ganancias que obtenga un residente de un Estado Contratante por la enajenación de:

(a) acciones, cuyo valor principalmente provenga de bienes raíces situados en el otro Estado; o,

(b) los derechos representativos en una asociación o fideicomiso, cuyo valor principalmente provenga de bienes raíces situados en ese otro Estado.

Pueden ser sometidas a imposición en ese otro Estado. Para los propósitos de este párrafo, el término “bienes raíces” no incluye ninguna propiedad, que sea de alquiler, en la cuál se desenvuelva el giro ordinario del negocio, compañía, asociación o fideicomiso.

5. Las ganancias obtenidas de la enajenación de cualquier propiedad distinta a las referidas en los apartados 1, 2, 3 y 4 sólo se someterán a imposición en el Estado Contratante del cual el enajenante sea residente.

6. Las disposiciones del apartado 5 no afectarán el derecho de un Estado Contratante de gravar de acuerdo a su Legislación, las ganancias que obtenga de la enajenación de cualquier propiedad de una persona natural residente del otro Estado Contratante y que ha sido residente del primer Estado mencionado en cualquier tiempo dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la enajenación de la propiedad.

7. Cuando una persona natural deja de ser residente de un Estado Contratante e inmediatamente después se hace residente del otro Estado Contratante, para fines impositivos será tratada en el primer Estado mencionado como si hubiese enajenado una propiedad y será gravada en ese Estado debido a aquello, esta persona podrá escoger, para fines impositivos, ser tratada en el otro Estado como si, inmediatamente antes de ser residente de ese Estado, hubiese vendido y vuelto a comprar la propiedad por un importe igual al valor justo de mercado en ese momento.

Art. 14.- Servicios Profesionales Independientes.-

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga por la prestación de servicios profesionales u otros similares sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a menos que estos servicios hayan sido o sean realizados en el otro Estado Contratante y:

(a) las rentas sean atribuibles a una base fija, de la que dicho residente disponga o haya dispuesto regularmente en el otro Estado Contratante; o,

(b) el residente permanezca en el otro Estado Contratante por un período o períodos que en total sumen o excedan 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses.

En tal caso, la renta atribuible a esos servicios puede ser gravada en ese otro Estado de conformidad a principios similares a aquellos del artículo 7 para la determinación de los valores por beneficios empresariales y la atribución de dichos beneficios a un establecimiento permanente.

2. La expresión “servicios profesionales” incluye especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, auditores y contadores.

Art. 15.- Servicios Personales Dependientes.-

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones percibidos por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se realice en el otro Estado Contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante las disposiciones del apartado 1, los sueldos, los salarios y otras remuneraciones percibidos por un residente de un Estado Contratante por razón de un

empleo realizado en el otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:

(a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier periodo de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado;

(b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro Estado; y,

(c) las remuneraciones no estén a cargo de un establecimiento permanente o una base fija que el empleador tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, los sueldos, salarios y otras remuneraciones percibidos por razón de un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional por un residente de un Estado Contratante, pueden someterse a imposición únicamente en ese Estado, a menos que los sueldos, salarios y otras remuneraciones sean percibidos por un residente del otro Estado Contratante.

Art. 16.- Honorarios de los Miembros de Directorios.- Los honorarios, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga en su calidad de miembro del Directorio o de un órgano similar de una compañía que es residente en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.

Art. 17.- Artistas y Deportistas.-

1. No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15, las remitas que un residente, de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión, o música, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las remitas derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o de los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas remitas pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que se realicen las actividades del artista del espectáculo o el deportista.
3. Las disposiciones del apartado 2 no serán aplicables si se determina que ni el artista ni el deportista ni las personas relacionadas a su actividad participan directa o indirectamente en los beneficios de la persona referida en dicho apartado.

Art. 18.- Pensiones y Rentas Ciertas o Vitalicias.-

1. Las pensiones y las rentas vitalicias procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las pensiones procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden también someterse a imposición en el Estado del cual proceden, de conformidad con la legislación de ese Estado. Sin embargo, en el caso de pagos periódicos de pensiones, el impuesto así exigido no podrá exceder el menor de los siguientes:
 - (a) 15 por ciento del importe bruto de tales pensiones periódicas pagadas al perceptor en el año calendario respectivo, por sobre doce mil dólares canadienses o su equivalente en la moneda ecuatoriana; y,
 - (b) la tarifa determinada en referencia al monto de impuesto que al perceptor de estos pagos se le hubiese requerido en el año sobre el importe total de pensiones periódicas recibidas por él en ese año, si dicho perceptor fuese residente del Estado Contratante de donde proceden las pensiones.
3. Las rentas vitalicias distintas de las pensiones procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse también a imposición en el Estado del que proceden, y de conformidad con la legislación del Estado; pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento de la porción sujeta a

imposición en ese Estado. Sin embargo, esta limitación no es aplicable a los pagos únicos procedentes de la renuncia, cancelación, redención, venta o cualquier otra enajenación de una renta vitalicia o pago de cualquier clase al amparo de un contrato de remitas ciertas o vitalicias, cuyo costo en todo o en parte, fue deducido al computar el ingreso de cualquier persona que adquirió dicho contrato.

4. No obstante cualquier disposición en este Convenio:

(a) las pensiones de guerra y las asignaciones (incluidas las pensiones y las asignaciones pagadas a los veteranos de guerra o pagadas como consecuencia de los daños o heridas sufridos como consecuencia de una guerra) procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante no serán sometidas a imposición en este otro Estado en la medida que las mismas estén exentas en el Estado mencionado en primer lugar; y,

(b) los alimentos y otros pagos similares procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante, sujeto a imposición en ese Estado en relación como los mismos, sólo serán imponibles en ese otro Estado.

Art. 19.- Funciones Públicas.-

(a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagados por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o una autoridad local a una persona natural por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o autoridad local en cualquier otro Estado, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado; y,

(b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones similares sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que:

(i) es nacional de ese Estado; o,

(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.

2. Las disposiciones del apartado 1 no serán aplicables a los sueldos, salarios y remuneraciones similares por concepto de servicios prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales.

Art. 20.- Estudiantes.- Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación práctica un estudiante, aprendiz o practicante, quien es o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con él único fin de proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que proceda de fuentes situadas fuera de ese Estado.

Art. 21.- Otras Rentas.- Sea cual fuere su procedencia, las rentas de un residente de un Estado Contratante, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del cual proceden, y según la legislación de dicho Estado. Si tal renta procede de una sucesión o fideicomiso, excluido el fideicomiso cuyas contribuciones sean deducibles, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto, siempre que el ingreso sea imponible en el Estado Contratante de cual es residente el beneficiario efectivo.

IV. Métodos para prevenir la doble imposición

Art. 22.- Eliminación de la doble imposición.-

1. En el caso de Canadá, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:

(a) sujeto a las disposiciones existentes en la legislación de Canadá en relación con la deducción sobre el impuesto a pagar en Canadá por concepto del impuesto pagado fuera de, Canadá, y con cualquier modificación subsecuente a dichas disposiciones que no afecte sus principios generales y a miembros que se otorgue una mayor deducción o beneficio en los términos de la legislación de Canadá, el impuesto pagado en Ecuador sobre beneficios, rentas o ganancias procedentes de Ecuador podrá ser deducido de cualquier impuesto canadiense a pagar respecto de dichos beneficios, remitas o ganancias;

(b) sujeto a las disposiciones existentes en la legislación de Canadá respecto a la posibilidad de utilizarse el impuesto pagado en un territorio fuera de Canadá como crédito tributario contra el impuesto canadiense y a cualquier modificación subsecuente de dichas disposiciones que no afectarán los principios generales del presente Convenio cuando una sociedad que es residente de Ecuador pague un dividendo a una sociedad que es residente de Canadá y que la misma controle directa o indirectamente al menos el 10 por ciento del poder de voto en la primera sociedad mencionada, el crédito deberá tomar en cuenta el impuesto pagado en el Ecuador por la primera sociedad mencionada respecto a las utilidades sobre las cuales tal dividendo es pagado; y,

(c) cuando de conformidad con cualquier disposición del Convenio, ingresos obtenidos por un residente de Canadá están exonerados de impuestos en Canadá, Canadá puede no obstante, al calcular el monto del impuesto sobre otros ingresos, tomar en cuenta los ingresos exonerados de impuestos.

2. En el caso de Ecuador, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:

(a) Los residentes de Ecuador podrán acreditar contra el Impuesto a la Renta ecuatoriano aplicable a los ingresos provenientes de Canadá, el impuesto sobre la renta pagado en Canadá, hasta por un monto que no exceda del impuesto que se pagaría en Ecuador por el mismo ingreso; y,

(b) sujeto a las condiciones previstas por la legislación ecuatoriana, las compañías que sean residentes en Ecuador podrán acreditar contra el Impuesto a la Renta a su cargo derivado de las utilidades, el impuesto sobre la renta pagado en Canadá por los beneficios con cargo a los cuales se pagaron los dividendos.

3. Para los efectos del presente Artículo, se considerará que los beneficios, rentas o ganancias de un residente de un Estado Contratante que puedan estar sujetos a imposición en el otro Estado Contratante de conformidad con el presente Convenio tienen su origen en ese otro Estado.

V. Disposiciones especiales

Art. 23.- No discriminación.-

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sujetos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones.
2. Los establecimientos permanentes que una empresa residente de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.
3. Nada en este artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración de su estado civil o cargas familiares.
4. Las sociedades que son residentes de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos a los que estén o puedan estar sometidas otras sociedades similares del Estado mencionado en primer lugar, el capital de las cuales esté, total o parcialmente, determinado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes de un tercer Estado.
5. En el presente artículo, los términos “Impuesto” e “Imposición” se refieren a los impuestos que son objeto de este Convenio.

Art. 24.- Procedimiento Amistoso.-

1. Cuando una persona considera que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no está conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de ambos Estados, dicha persona podrá presentar a la autoridad competente del Estado Contratante del cual es residente una petición por escrito declarando los fundamentos por los cuales solicita la revisión de dicha imposición. Para ser admitida, dicha petición debe ser presentada dentro de los dos años siguientes a la primera notificación de la medida que da origen a la imposición no conforme con las disposiciones del Convenio.
2. La autoridad competente a que se refiere el apartado 1, si la reclamación le parece fundada y si ella misma no está en condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajusta a este Convenio.
3. Un Estado Contratante no puede aumentar la base impositiva de un residente de cualquiera de los Estados Contratantes mediante la inclusión en la misma de rentas que también hayan sido sometidas a imposición en el otro Estado Contratante, después del vencimiento de los plazos previstos en su legislación interna, y en todo caso, después de cinco años contados a partir del último día del ejercicio fiscal en el que la renta en cuestión se obtuvo. Lo previsto en este párrafo no se aplicará en el caso de fraude, culpa o negligencia grave.
4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. Con este propósito se podrán comunicar directamente entre sí.
5. Si surge cualquier dificultad o duda relacionada con la interpretación o aplicación del presente Convenio y no puede ser resuelta por las autoridades competentes de acuerdo con los apartados anteriores de este artículo, y la dificultad o duda es el resultado de una

determinación realizada por uno o ambos Estados Contratantes, el caso puede someterse a arbitraje si ambas autoridades competentes y el contribuyente por escrito acuerdan estar sujetos a la decisión del tribunal arbitral. El laudo arbitral sobre un caso en particular será vinculante para ambos Estados respecto a ese caso. El procedimiento será establecido mediante el intercambio de notas entre los Estados Contratantes.

Art. 25.- Intercambio de información.-

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán las informaciones relevantes para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o en el derecho interno de los Estados Contratantes relativo a los impuestos comprendidos en el Convenio, en la medida en que la imposición exigida por aquél no fuera contraria al mismo. El intercambio de información no está limitado por el artículo 1. Las informaciones recibidas por un Estado Contratante serán mantenidas secretas en igual manera que las informaciones obtenidas sobre la base del derecho interno de este Estado y sólo se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos establecidos por este Estado, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos en relación con los impuestos establecidos en ese Estado. Estas personas o autoridades utilizarán dichos informes sólo para tales fines. Podrán revelar estas informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
2. En ningún caso las disposiciones del apartado 1 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:
 - (a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado Contratante;
 - (b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las del otro Estado Contratante;y,

(c) suministrar información que revele un secreto comercial, industrial o profesional o un procedimiento comercial, o información cuya comunicación sea contraria al orden público (ordre public).

3. Cuando la información es solicitada por un Estado Contratante de conformidad con el presente artículo, el otro Estado Contratante hará lo posible por obtener la información a la que se refiere la solicitud en la misma forma como si se tratan de su propia imposición, aunque este otro Estado, en ese momento, no requiera tal información. Cuando sea solicitada en forma específica por la autoridad competente de un Estado Contratante, la autoridad competente del otro Estado Contratante hará lo posible por proporcionar la información en los términos del presente artículo en la forma requerida, la misma que podrá consistir en declaraciones de testigos y copias de documentos originales y sin enmiendas (incluyendo libros, papeles, declaraciones, registros, informes o escritos), en la misma medida en que tales declaraciones y documentos puedan ser obtenidos, de conformidad con la legislación y prácticas administrativas de este otro Estado Contratante en relación con sus propios impuestos.

Art. 26.- Miembros de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.-

1. Nada en el presente Convenio afectará los privilegios fiscales de que disfrutaban los miembros de misiones diplomáticas u oficinas consulares, de acuerdo con las reglas generales del Derecho Internacional o en virtud de acuerdos especiales.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, una persona que es miembro de una misión diplomática, oficina consular o misión permanente de un Estado Contratante ubicada en el otro Estado Contratante o en un tercer Estado será considerada, para los fines de este Convenio, como residente sólo del Estado que lo envía si dicha persona está sujeta en el Estado que la envía a las mismas obligaciones relativas a impuestos sobre remitas totales que los residentes de ese Estado.
3. El Convenio no se aplicará a organizaciones internacionales, a los órganos o funcionarios de las mismas, ni a personas que sean miembros de una misión diplomática, oficina consular o misión permanente de un tercer Estado o de un grupo de Estados, quienes presentes en un Estado Contratante, no están sujetos a imposición en cualquiera de los

Estados Contratantes por las mismas obligaciones que en relación al impuesto sobre sus remitas totales estén sujetos los residentes de ese Estado.

Art. 27.- Reglas Diversas.-

1. Las disposiciones del presente Convenio no se interpretarán en el sentido de restringir en cualquier forma toda exención, reducción, crédito u otra deducción otorgada.
 - (a) por la legislación de un Estado Contratante en la determinación del impuesto establecido por ese Estado; o,
 - (b) por cualquier otro acuerdo celebrado por un Estado Contratante.
2. Nada de lo previsto en el Convenio podrá ser interpretado como impedimento para que un Estado Contratante someta a imposición los montos incluidos en las rentas de un residente de este Estado respecto de una asociación, un fideicomiso o una subsidiaria extranjera controlada en la que dicho residente tenga participación.
3. El Convenio no será aplicable a cualquier sociedad, fideicomiso, asociación u otra entidad que sea residente de un Estado Contratante y que efectivamente pertenezca a una o varias personas no residentes de ese Estado, o que sea controlada directa o indirectamente por las mismas, si el monto de impuesto exigido por parte de ese Estado sobre las rentas o el capital de la sociedad, fideicomiso, asociación, u otra entidad, es substancialmente inferior al monto que hubiese sido exigido por ese Estado si todas las acciones del capital de la sociedad o todas las participaciones del fideicomiso, asociación, u otra entidad, según sea el caso, pertenezcan efectivamente a una o varias personas naturales residentes de ese Estado.
4. Para los fines del párrafo 3 del artículo 22 (Consulta) del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, los Estados Contratantes convienen que, no obstante dicho párrafo, cualquier disputa entre ellos sobre si una medida cae dentro del ámbito de este Convenio puede ser sometida al Consejo para el Comercio de Servicios, según lo dispuesto en dicho párrafo, solamente con el consentimiento de ambos Estados Contratantes. Cualquier duda relativa a la interpretación de este párrafo será resuelta a

tenor del párrafo 4 del artículo 24, o, en ausencia de un acuerdo en virtud de dicho procedimiento, de conformidad con cualquier otro procedimiento acordado entre ambos Estados Contratantes.

5. Las contribuciones en un año con respecto de servicios prestados en dicho año y pagados por o en representación de una persona natural que es residente de un Estado Contratante o que está temporalmente presente en dicho Estado a un plan de pensión que es reconocido para fines impositivos en el otro Estado Contratante, durante un período que no exceda en total de 60 meses, serán tratadas en la misma forma para fines impositivos en el primer Estado mencionado como una contribución pagada a un plan de pensión que es reconocido para fines impositivos en aquel primer Estado mencionado, si:

(a) dicha persona natural contribuía regularmente al plan de pensión durante un período que terminó inmediatamente antes de que dicha persona natural se convirtiera en residente o estuviera temporalmente presente en el primer Estado mencionado; y,

(b) la autoridad competente del primer Estado mencionado conviene que el plan de pensión corresponde generalmente a un plan de pensión reconocido para fines impositivos por dicho Estado.

Para los fines de este párrafo, “Plan de pensión” comprende planes de pensión creados bajo el sistema de seguridad social de un Estado Contratante.

VI. Disposiciones finales

Art. 28.- Entrada en Vigor.-

1. Los gobiernos de los Estados Contratantes se notificarán entre ellos, por medio de los canales diplomáticos, que los requisitos constitucionales para la entrada en vigor del presente Convenio han sido cumplidos.
2. El Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la última notificación referida en el apartado 1 y sus disposiciones serán aplicables:

(a) en lo que concierne a los impuestos percibidos por medio de la retención en la fuente sobre las sumas pagadas o acreditadas, a partir del 10 de enero del año siguiente a aquel en que el Convenio entra en vigor; y,

(b) en lo que concierne a otros impuestos aplicables, por los períodos fiscales que comiencen a partir o después del 1 de enero del año calendario, el año siguiente a aquel en que el Convenio entra en vigor.

Art. 29.- Denuncia.-

1. El presente Convenio permanecerá en vigor en tanto no sea denunciado por un Estado Contratante. Cada Estado Contratante podrá denunciar el Convenio por vía diplomática con una notificación previa de mínimo seis meses antes del fin de cada año calendario, a partir del quinto año siguiente a aquél de su entrada en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de aplicarse:

(a) en lo que concierne a los impuestos percibidos por medio de la retención en la fuente sobre sumas pagadas o acreditadas, a partir del 1 de enero del año calendario siguiente; y,

(b) en lo que concierne a los otros impuestos sobre la renta aplicables, por cada período fiscal que comienza a partir del 1 de enero del año calendario siguiente.

PROTOCOLO

Al momento de suscribir el Convenio entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Ecuador para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto a la renta, los suscritos acuerdan que las siguientes disposiciones constituyen parte integrante de este Convenio:

1. El Convenio no será aplicable al Impuesto a la Circulación de Capitales del Ecuador.

Nota: El impuesto a la circulación de capitales fue derogado por la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (Decreto Ley 2000-1, Registro Oficial Suplemento # 144, de 18 de agosto de 2000).

2. Con referencia al literal (b) del apanado 2 del artículo 12, si en virtud de un acuerdo o convenio celebrado por Ecuador con otro Estado que sea miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, en una fecha posterior a aquella en la que se firma el Convenio, Ecuador acuerda una tasa del impuesto sobre cánones referida en el literal (b), que sea inferior al 15 por ciento, para los fines de dicho literal lo siguiente será aplicable:

(a) Se entiende que dicha tasa menor se aplicará para:

(i) derechos de autor y otros pagos similares respecto a la producción o reproducción de cualquier obra literaria, dramática, musical u otras obras artísticas (pero no incluye los cánones referentes a películas cinematográficas ni obras grabadas en películas o cintas en otros medios de reproducción destinados a la televisión); o,

(ii) cánones por el uso o el derecho de uso de programas de computación o cualquier patente o por información relacionada con experiencia industrial comercial o científica (con exclusión de aquella información proporcionada en conexión con un convenio de arrendamiento o concesión.).

Esa tasa menor se aplicará automáticamente en circunstancias similares.

(b) En la medida que aquellas tasas menores se apliquen a otros cánones referentes a ese literal, la tasa que sea mayor y la tasa del diez por ciento se aplicarán automáticamente en circunstancias similares.

3. Con relación al apanado 3 del artículo 12, se entiende que el término “cánones incluye los pagos por el uso o el derecho al uso, de los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

Anexo 2: Convenio México

Celebrado el 30 de julio de 1992.

Publicado en el Registro Oficial # 281 de 9 de marzo de 2001.

Fecha de vigencia: 13 de diciembre de 2000.

**CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR
LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA**

Art. 1.- Ámbito subjetivo.-El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

Art. 2.- Impuestos comprendidos.-

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción.
2. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica este Convenio son, en particular:
 - a) En el caso del Ecuador:
 - El impuesto sobre la renta, de las personas naturales;
 - El impuesto sobre la renta, de las sociedades; (en adelante denominados el “impuesto ecuatoriano”).
 - b) En el caso de los Estados Unidos Mexicanos:
 - El impuesto sobre la renta;
 - (En adelante denominado el “impuesto mexicano”).

3. El Convenio se aplicará igualmente. a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de firma del mismo y se añadan a los actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán las modificaciones importantes que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

Art. 3.- Definiciones generales.-

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:
 - a) El término “Ecuador” significa la República del Ecuador, en la forma y con los elementos territoriales determinados en su Constitución y Leyes;
 - b) El término “México” significa los Estados Unidos Mexicanos, en la forma y con los elementos territoriales denominados en su Constitución y Leyes;
 - c) Las expresiones “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” significan, según sea el caso, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador;
 - d) Los términos “residencia” y “residente” utilizados en el presente Convenio, en cuanto se refiere al Ecuador, significan “domicilio” y “domiciliado”, respectivamente;
 - e) El término “persona” comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
 - f) El término “persona física” utilizado en el presente Convenio, en cuanto se refiere al Ecuador, significa “persona natural”;
 - g) El término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere como persona moral a efectos impositivos;
 - h) Las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de

un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;

i) El término “nacional” significa:

i) Todas las personas físicas que poseen la nacionalidad en un Estado Contratante; y,

ii) Todas las personas jurídicas, sociedades de personas y asociaciones constituidas conforme a la legislación vigente en un Estado Contratante.

j) La expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado Contratante, salvo cuando el buque o aeronave no sea objeto de explotación más que entre dos puntos situados en el otro Estado Contratante;

k) La expresión “autoridad competente” significa:

i) En el caso del Ecuador, el Ministro de Finanzas y Crédito Público, el Director General de Rentas, o cualquier otra autoridad delegada; y,

Notas:

- El Ministerio de Finanzas y Crédito Público es actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas (D.E. 366, R.O. 81, 19-V-2000).

- Las funciones del Director General de Rentas fueron asumidas por el Director General del Servicio de Rentas Internas a partir del 1 de enero de 1998, según la Primera Disposición Transitoria de la Ley de creación del Servicio de Rentas Internas (R.O. 206, 2-XII-97).-

ii) En el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación

diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio.

Art. 4.- Residencia o domicilio

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado Contratante” significa toda persona que en virtud de la legislación de este Estado esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado.
2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:
 - a) Esta persona será considerada residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
 - b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado Contratante donde viva habitualmente;
 - c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional; y,
 - d) Si no fuera nacional de alguno de los Estados, las autoridades competentes resolverán el caso de común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, se considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

Art. 5.- Establecimiento permanente.-

1. A efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial:
 - a) Una sede de dirección;
 - b) Una sucursal;
 - c) Una oficina;
 - d) Una fábrica;
 - e) Un taller; y,
 - f) Una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.
3. La expresión “establecimiento permanente” comprende asimismo las obras, la construcción o el proyecto de instalaciones o montaje, o las actividades de inspección relacionadas con ellos, pero sólo cuando tales obras, construcción o actividades continúen durante un periodo superior a seis meses.
4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo, se considera que el término “establecimiento permanente” no incluye:
 - a) La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
 - b) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

- c) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
 - d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa;
 - e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, suministrar información, realizar investigaciones científicas o desarrollar otras actividades que tengan carácter preparatorio o auxiliar, siempre que estas actividades se realicen para la empresa; y,.
 - f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin del ejercicio combinado de las actividades mencionadas en los incisos a) al e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona -distinta de un agente que goce de un estatuto independiente, al cual se le aplica el párrafo 7- actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado Contratante poderes que la faculden para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esta empresa tiene un establecimiento permanente en este Estado respecto de todas las actividades que esta persona realiza por cuenta de la empresa, a menos que las actividades de esta persona se limiten a las mencionadas en el párrafo 4 y que, de haber sido ejercidas por medio de un lugar fijo de negocios, no se hubiera considerado este lugar como un establecimiento permanente, de acuerdo con las disposiciones de este párrafo.
6. No obstante las disposiciones del presente artículo, se considera que una empresa aseguradora de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado si recauda primas en el territorio del otro Estado o si asegura contra riesgos situados en él por medio de una persona distinta de un agente que goce de un estatuto independiente al que se le aplique el siguiente párrafo.
7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades por medio de un corredor, un comisionista general, o cualquier otro agente que goce de un estatuto independiente,

siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando ese representante realice todas o casi todas sus actividades en nombre de tal residente, no será considerado como representante independiente en el sentido del presente párrafo.

8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice actividades en este otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

Art. 6.- Rentas inmobiliarias.-

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende, en todo caso, los accesorios, el ganado y equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y silvícolas, los derechos a los que se apliquen las disposiciones de Derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimiento minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas derivadas de la utilización directa, del arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de trabajos independientes.

Art. 7.- Beneficios empresariales.-

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que la empresa realice o haya realizado su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a:
 - a) Este establecimiento permanente; o,
 - b) Las ventas en este otro Estado de bienes o mercancías de tipo idéntico o similar al de las vendidas por medio de ese establecimiento.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos en los que se haya incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte. Sin embargo, no serán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, el establecimiento permanente (que no sean los hechos por concepto de reembolso de gastos efectivos) a la oficina central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales, a título de regalías, honorarios o pagos análogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, a título de comisión, por servicios concretos prestados o por gestiones hechas o, salvo en el caso de una empresa bancaria, a título de intereses sobre el dinero prestado al establecimiento permanente.

4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá que este Estado Contratante determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo con los principios contenidos en este artículo.
5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías para la empresa.
6. A los efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder en otra forma.
7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente artículo.

Art. 8.- Navegación marítima y aérea.-

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
2. Los beneficios a que se refiere el párrafo 1, no incluyen los beneficios que se obtengan de la explotación de hoteles o de una actividad de transporte distinta a la de operación de buques o aeronaves en tráfico internacional.
3. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de navegación estuviera a bordo de un buque, se considerará que se encuentra en el Estado Contratante donde esté el puerto base del mismo, o si no existiera tal puerto base, en el Estado Contratante en el que resida la persona que explote el buque.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un consorcio o en un organismo internacional de explotación.

Art. 9.- Empresas asociadas.- Cuando:

- a) Una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante; o,
- b) Unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir estas condiciones, y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia.

Art. 10.- Dividendos.-

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado y según la legislación del mismo.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este Estado, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5% del importe bruto de los dividendos, siempre que el receptor de los dividendos sea el beneficiario efectivo de los mismos. Las disposiciones de este párrafo no afectan a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.
3. El término “dividendos” empleado en el presente artículo significa los rendimientos de las acciones, o aportaciones, o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen

fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en que resida la sociedad que las distribuya.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, ejerce o haya ejercido en el otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad industrial o comercial a través de un establecimiento permanente aquí situado, o presta o haya prestado unos trabajos independientes por medio de una base fija aquí situada con los que la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, este otro Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que estos dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o la participación que genere los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situada en este otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de este otro Estado.

Art. 11.- Intereses.-

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado y según la legislación del mismo.
2. Sin embargo, estos intereses pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procesa y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido, no puede exceder del:
 - a) 10% del importe bruto de los intereses cuando se perciban por un banco que sea beneficiario efectivo; y,

- b) 15% del importe bruto de los intereses en los demás casos.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, durante un período de cinco años a partir de la fecha en que surtan sus efectos las disposiciones del presente Convenio, en lugar de la tasa prevista en el párrafo 2.a) del presente artículo, se aplicará la tasa del 15%.
4. No obstante las disposiciones de los párrafos 2 y 3, los intereses mencionados en el párrafo 1 sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que es residente el beneficiario de los intereses, si satisface alguno de los requisitos siguientes:
- a) El beneficiario sea uno de los Estados Contratantes, una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales;
 - b) Los intereses sean pagados por una persona de las mencionadas en el inciso a) anterior;
 - c) Los intereses sean pagados por préstamos a plazo de tres años o más, concedidos o garantizados por entidades de financiamiento o de garantía de carácter público, cuyo objeto sea promover la exportación mediante el otorgamiento de créditos o garantías en condiciones preferenciales.
5. El término “intereses”, empleado en el presente artículo, significa los rendimientos de crédito de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y especialmente las rentas de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a estos títulos, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas en préstamo.
6. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, ejerce o haya ejercido en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado o presta o haya prestado unos servicios profesionales por medio de una base fija situada en él, con los que el crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.

7. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una de sus entidades locales o un residente de este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda que da origen al pago de los intereses y que soporten la carga de los mismos, éstos se considerarán procedentes del Estado Contratante donde estén situados el establecimiento permanente o la base fija.
8. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de los intereses o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses pagados exceda, por cualquier motivo, del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
9. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables cuando el crédito por el cual se pagan los intereses, se concertó o asignó principalmente con el propósito de tomar ventaja de este artículo.

Art. 12.- Regalías.-

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado y según la legislación del mismo.
2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el perceptor de las regalías es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder del 10% del importe bruto de las regalías.
3. El término “regalías” empleado en el presente artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una

obra literaria, artística o científica, incluidas las películas cinematográficas, de una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, así como por el uso o la concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico, y por las informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. El término “regalías” también incluye las ganancias derivadas de la enajenación de cualquiera de dichos bienes o derechos que estén condicionadas a la productividad o uso de los mismos.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, ejerce o haya ejercido en el otro Estado Contratante de donde proceden las regalías una actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado o presta o haya prestado unos servicios profesionales por medio de una base fija situada en él, con los que el derecho o propiedad por los que se pagan las regalías estén vinculados efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.
5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones política, una de sus entidades locales o un residente de este Estado. Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la obligación de pago de las regalías y que soporten la carga de los mismos, éstos se consideran procedentes del Estado Contratante donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.
6. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de las regalías o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías pagadas exceda, por cualquier motivo, del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

7. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables cuando el derecho o el bien por el que se paguen las regalías, se concertó o asignó principalmente con el propósito de tomar ventaja de este artículo.

Art. 13.- Ganancias de capital.-

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se definen en el Artículo 6, situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones, partes sociales u otros derechos de una sociedad cuyos activos estén principalmente constituidos, directa o indirectamente, por bienes inmuebles situados en un Estado Contratante o por derechos relacionados con tales bienes inmuebles, pueden someterse a imposición en ese Estado. Para estos efectos, no se tomarán en consideración los bienes inmuebles que dicha sociedad, o persona moral o jurídica, afecte a su actividad industrial, comercial o agrícola, o la prestación de servicios profesionales.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones que representen una participación de más del 25% en el capital de una sociedad residente de un Estado Contratante pueden someterse según la legislación de este Estado a imposición en el mismo.
4. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante posea en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en este otro Estado.
5. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de estos buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

6. Las ganancias derivadas de la enajenación de los bienes o derechos a que se refiere el Artículo 12 de este Convenio serán sometidas a imposición de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo.
7. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los párrafos anteriores del presente artículo, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida el transmitente.

Art. 14.- Trabajos independientes.-

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de naturaleza independiente sólo pueden someterse a imposición en este Estado, salvo en las siguientes circunstancias, en que dichas rentas podrán también ser sometidas a imposición en el otro Estado Contratante:
 - a) Cuando dicho residente tenga en el otro Estado Contratante una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades; en tal caso, sólo puede someterse a imposición en este otro Estado Contratante la parte de las rentas que sean atribuibles a dicha base fija; o,
 - b) Cuando su estancia en el otro Estado Contratante sea por un período o períodos que sumen o excedan en total de ciento ochenta y tres días en cualquier período continuo de doce meses; en tal caso, sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en este otro Estado.
2. La expresión “servicios profesionales” comprende especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de los médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores.

Art. 15.- Trabajos dependientes.-

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante por razón

de un empleo sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce aquí, las remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en este otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si:
 - a) El beneficiario no permanece en total en el otro Estado, en uno o varios períodos, más de ciento ochenta y tres días, en cualquier periodo continuo de doce meses;
 - b) Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que no es residente del otro Estado; y,
 - c) Las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una base fija que la persona empleadora tiene en el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

Art. 16.- Participaciones de consejeros.- Las participaciones, dietas de asistencia, honorarios y otras retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio, consejo de administración o de vigilancia, o en su calidad de administrador o de comisario, de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.

Art. 17.- Artistas y deportistas.-

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado Contratante, en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio y televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en este otro Estado. Cuando un artista

del espectáculo o un deportista, residente de un Estado Contratante, obtenga del otro Estado Contratante rentas derivadas de sus actividades personales relacionadas con su notoriedad personal como artista del espectáculo o deportista desarrolladas en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades ejercidas por un artista o deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o deportista, sino a otra persona, estas rentas pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que se realicen las actividades del artista o deportista.

Art. 18.- Pensiones.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en este Estado.

Art. 19.- Funciones públicas.-

1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado Contratante o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, a una persona física, por razón de servicios prestados a este Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en este Estado.

b) Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en este Estado y la persona física es un residente de este Estado que:

(i) Posee la nacionalidad de este Estado; o,

(ii) No ha adquirido la condición de residente de este Estado solamente para prestar los servicios.
2. a) Las pensiones pagadas por un Estado Contratante o por alguna de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos a

una persona física por razón de servicios prestados a este Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en este Estado; y,

b) Sin embargo, estas pensiones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si la persona física fuera residente y nacional de este Estado.

3. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16 y 18, se aplica a las remuneraciones y pensiones pagadas por razón de servicios prestados dentro del marco de una actividad industrial o comercial realizada por un Estado Contratante o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales.

Art. 20.- Estudiantes.- Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación un estudiante o una persona en prácticas que sea o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el primer Estado con el único fin de proseguir sus estudios o formación no pueden someterse a imposición en este Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de este Estado.

Art. 21.- Otras rentas.-

1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, sólo pueden someterse a imposición en este Estado.
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica a las rentas, excluidas las que se deriven de bienes definidos como inmuebles en el párrafo 2 del Artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado Contratante, realice en el otro Estado Contratante una actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente situado en él o preste servicios profesionales por medio de una base fija igualmente situada en él, con los que el derecho o propiedad por los que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los artículos anteriores y que tengan su origen en el otro Estado Contratante, también pueden someterse a imposición en este otro Estado.

Art. 22.- Método de eliminación de la doble imposición.-

1. En lo que concierne a Ecuador, bajo las condiciones previstas por la legislación ecuatoriana, la doble imposición se evitará de la manera siguiente:
 - a) Los domiciliados en Ecuador podrán acreditar el impuesto sobre la renta mexicano hasta por un monto que no exceda del impuesto ecuatoriano por el mismo ingreso; y,
 - b) Las sociedades domiciliadas en el Ecuador podrán acreditar contra el impuesto ecuatoriano derivado de la obtención de dividendos, el impuesto sobre la renta mexicano por los beneficios con cargo a los cuales la sociedad domiciliada en México pagó los dividendos.
2. En lo que concierne a México, bajo las condiciones previstas por la legislación mexicana, la doble imposición se evitará de la manera siguiente:
 - a) Los residentes en México podrán acreditar el impuesto sobre la renta ecuatoriano hasta por un monto que no exceda del impuesto mexicano por el mismo ingreso; y,
 - b) Las sociedades que sean residentes en México podrán acreditar contra el impuesto mexicano derivado de la obtención de dividendos, el impuesto sobre la renta ecuatoriano por los beneficios con cargo a los cuales la sociedad residente en Ecuador pagó los dividendos.

Art. 23.- No discriminación.-

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tengan en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en este Estado de manera menos favorable que las empresas de este otro Estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición no puede interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del artículo 9, del párrafo 7 del Artículo 11 o del párrafo 7 del Artículo 12, los intereses, las regalías así como los demás gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de esta empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del primer Estado.
4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante no estarán sometidas en el primer Estado a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas las otras empresas similares del primer Estado.

Art. 24.- Procedimiento amistoso.-

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de estos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que es residente. El caso deberá ser planteado dentro de los dos años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.
2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si ella misma no está en condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio.

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o aplicación del presente Convenio mediante un acuerdo amistoso.
4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden comunicarse directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo según se indica en los párrafos anteriores. Cuando se considere que este acuerdo puede facilitarse mediante contactos personales, el intercambio de puntos de vista puede tener lugar en el seno de una Comisión compuesta por representantes de las autoridades competentes de los Estados Contratantes.

Art. 25.- Intercambio de información.-

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán las informaciones necesarias para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o en el derecho interno de los Estados Contratantes relativo a los impuestos establecidos por los Estados Contratantes, en la medida en que la imposición exigida por aquél no fuera contraria al Convenio. El intercambio de información no está limitado por el Artículo 1. Las informaciones recibidas por un Estado Contratante serán mantenidas secretas en igual forma que las informaciones obtenidas en base al derecho interno de este Estado y sólo se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargados de la gestión o recaudación de los impuestos percibidos por cuenta de este Estado. De los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos en relación con estos impuestos. Estas personas o autoridades sólo utilizarán estos informes para estos fines. Podrán revelar estas informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
2. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:
 - a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado Contratante;

- b) Suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las del otro Estado Contratante; y,
- c) Suministrar informaciones que revelen un secreto comercial, industrial o profesional o un procedimiento comercial, o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

Art. 26.- Agentes diplomáticos y funcionarios consulares.- Las disposiciones del presente Convenio no afectan a los privilegios fiscales de que disfruten los agentes diplomáticos o funcionarios consulares, de acuerdo con los principios generales del Derecho internacional o en virtud de acuerdos especiales.

Art. 27.- Entrada en vigor.-

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor del presente Convenio. Dicho Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación.
2. Las disposiciones del Convenio se aplicarán:
 - a) En relación a los impuestos retenidos en la fuente, por las cantidades pagadas o exigibles a partir del primer día del mes de enero siguiente a la fecha en que el Convenio entre en vigor; y,
 - b) En relación a otros impuestos, por los ejercicios fiscales iniciados a partir del primer día del mes de enero siguiente a la fecha en que el Convenio entre en vigor.

Art. 28.- Terminación.- El presente Convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de los Estados Contratantes. Cualquiera de los Estados Contratantes puede denunciar el Convenio comunicándolo, por vía diplomática, al menos con un plazo de seis meses de antelación a la terminación de cada año calendario. En tal caso, el Convenio dejará de tener efecto:

- a) En relación a los impuestos retenidos en la fuente, por las cantidades pagadas o exigibles a partir del primer día del mes de enero siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de seis meses referido.
- b) En relación a otros impuestos, por los ejercicios fiscales iniciados a partir del primer día del mes de enero siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de seis meses referido.

Dado en la ciudad de México, a los treinta días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos, en dos ejemplares originales, en el idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

PROTOCOLO

Al momento de proceder a la firma del presente Convenio entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, los suscritos han acordado que las disposiciones siguientes formen parte integrante del Convenio.

1. En relación al inciso e), párrafo 4 del Artículo 5, las oficinas de representación de los bancos ecuatorianos en México, no tendrán el carácter de establecimiento permanente, si sus actividades se limitan a preparar la colocación de préstamos en este último Estado.
2. En relación con el artículo 10 y el artículo 23, en el caso, de Ecuador, el impuesto exigible por los dividendos pagados a residentes en México no podrá ser superior al límite que establece el párrafo 2 de este artículo, una vez efectuado el crédito tributario a que se refieren los Artículos 38 y 39 de la Ley número 56 de Régimen Tributario Interno. También se consideran dividendos para los efectos de este artículo, a las remesas, efectuadas por establecimientos permanentes en Ecuador de residentes en México.

Nada de lo dispuesto en el Artículo 23 del presente Convenio se entiende que impide a Ecuador a someter a la imposición a que se refiere el párrafo anterior en la forma que señala ese mismo párrafo.

Nota: El Art. 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno fue derogado por el Art. 71, numeral 6, de la Ley 31 (R.O. 199-S, 28-V-93).

3. En relación con el párrafo 7 del Artículo 11 y el párrafo 5 del Artículo 12, se acuerda que los Estados Contratantes deberán aplicar estas disposiciones de conformidad con los comentarios del Modelo de Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio de 1977, realizado por el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, extendiendo su aplicación al supuesto previsto en el inciso c) del párrafo 25 de dichos Comentarios al Artículo 11, en la medida en que los, conceptos correspondientes serán deducibles para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente.
4. Sin perjuicio de un acuerdo entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes, cada uno de los Estados conserva el derecho de someter a imposición, de conformidad con su legislación, las rentas de sus residentes o domiciliados cuya imposición se atribuya al otro Estado por el Convenio, pero que no se encuentren efectivamente sometidas a imposición por la Legislación de éste otro Estado.

Dado en la ciudad de México, a los treinta días del mes de julio de 1992, en dos ejemplares originales en el idioma español, siendo ambos textos, igualmente auténticos.

Anexo 3: Convenio Chile

Celebrado en Quito, el 26 de agosto de 1999.

Protocolo suscrito en Quito el 26 de agosto de 1999

Ratificado el 24 de octubre de 2003.

Ratificación publicado en el Registro Oficial # 189 de 14 de octubre de 2003.

Fecha de vigencia: 1 de enero de 2004

Texto publicado en Registro Oficial 293 de 16 de marzo de 2004

**CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA REPUBLICA DE
CHILE PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PARA PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL
PATRIMONIO**

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Chile, deseando concluir un Convenio para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio;

Han acordado lo siguiente:

CAPITULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Art. 1.- Ámbito Subjetivo.-

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

Art. 2.- Impuestos Comprendidos.-

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías.
3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
 - (a) en la República del Ecuador,
 - (i) los impuestos sobre la renta de las personas naturales;
 - (ii) los impuestos sobre la renta de las sociedades y cualquier otra entidad similar;’ (en adelante denominado “Impuesto ecuatoriano”).
 - (b) en la República de Chile, los impuestos establecidos en la “Ley sobre Impuesto a la Renta”, (en adelante denominado “Impuesto chileno”); y
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente análoga e impuestos al patrimonio que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente, al final de cada año, las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones impositivas.

CAPITULO II

DEFINICIONES

Art. 3.- Definiciones Generales.-

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

(a) las expresiones “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” significan, según lo requiera el contexto, la República del Ecuador o la República de Chile, en adelante “Ecuador” y “Chile”, respectivamente;

(b) el término “persona” comprende las personas naturales, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;

(c) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;

(d) las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;

(e) la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando el transporte se realice exclusivamente entre dos puntos situados en el otro Estado Contratante;

(f) la expresión “autoridad competente” significa:

(i) en el caso del Ecuador, el Director General del Servicio de Rentas Internas;

(ii) en el caso de Chile, el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;

(g) el término “nacional” significa:

(i) cualquier persona natural que posea la nacionalidad de un Estado Contratante; o

(ii) cualquier persona jurídica o asociación constituida conforme a la legislación vigente de un Estado Contratante.

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un momento dado, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación impositiva sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.

Art. 4.- Residente.-

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado Contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye también al propio Estado y a cualquier subdivisión política o autoridad local. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo.
2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona natural sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:
 - (a) dicha persona será considerada residente sólo del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente sólo del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

- (b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente sólo del Estado donde viva habitualmente;
 - (c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente sólo del Estado del que sea nacional;
 - (d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso mediante un procedimiento de acuerdo mutuo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona, que no sea persona natural, sea residente de ambos Estados Contratantes, será considerada residente sólo del Estado de la que sea nacional. Si fuere nacional de ambos Estados Contratantes, o no lo fuere de ninguno de ellos, los Estados Contratantes harán lo posible, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, por resolver el caso. En ausencia de acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes, dicha persona no tendrá derecho a exigir ninguno de los beneficios o exenciones impositivas contempladas por este Convenio.

Art. 5.- Establecimiento Permanente.-

1. A efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial:
 - (a) las sedes de dirección;
 - (b) las sucursales;
 - (c) las oficinas;
 - (d) las fábricas;
 - (e) los talleres;
 - (f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar en relación a la exploración o explotación de recursos naturales.

3. La expresión “establecimiento permanente” también incluye:

- (a) una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje y las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto de construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses, y
- (b) la prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, por intermedio de empleados u otras personas naturales encomendados por la empresa para ese fin, pero sólo en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un período o períodos que en total excedan seis meses, dentro de un período cualquiera de doce meses.

A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este párrafo, las actividades realizadas por una empresa asociada a otra empresa en el sentido del Artículo 9, serán agregadas al período durante el cual son realizadas las actividades por la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son idénticas o sustancialmente similares.

4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este Artículo, se considera que la expresión “establecimiento permanente” no incluye:

- (a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
- (b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
- (c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
- (d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de recoger información, para la empresa;

- (e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, suministrar información o realizar investigaciones científicas, u otras actividades similares, que tengan carácter preparatorio o auxiliar para la empresa;
5. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona, distinta de un agente independiente al que le sea aplicable el párrafo 7, actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado Contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de cualquiera de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el párrafo 4 y que, de ser realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, dicho lugar fijo de negocios no fuere considerado como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese párrafo.
 6. No obstante las disposiciones anteriores del presente Artículo, se considera que una empresa aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante si recauda primas en el territorio de este otro Estado o si asegura riesgos situados en él por medio de un representante distinto de un agente independiente al que se aplique el párrafo 7.
 7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad, y que en sus relaciones comerciales o financieras con dichas empresas no se pacten o impongan condiciones aceptadas o impuestas que sean distintas de las generalmente acordadas por agentes independientes.
 8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

CAPITULO III

IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS

Art. 6.- Rentas de Bienes Inmuebles.-

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Para los efectos del presente Convenio, la expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho general relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques y aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales independientes.

Art. 7.- Beneficios Empresariales.-

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice o ha realizado su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la

empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente.

2. Sujeto a lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos en que se haya incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte.
4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá que ese Estado Contratante determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este Artículo.
5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías para la empresa.
6. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.
7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros Artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las del presente Artículo.

Art. 8.- Transporte Marítimo y Aéreo.-

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. Para los fines de este Artículo:
 - (a) El término “beneficios” comprende:
 - (i) los ingresos brutos que se deriven directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, y
 - (ii) los intereses sobre cantidades generadas directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, siempre que dichos intereses sean accesorios a la explotación.
 - (b) La expresión “explotación de buque o aeronave” por una empresa, comprende también:
 - (i) el fletamento o arrendamiento de nave o aeronave a casco desnudo;
 - (ii) el arrendamiento de contenedores y equipo relacionado.

Siempre que dicho flete o arrendamiento sea accesorio a la explotación, por esa empresa, de buques o aeronaves en tráfico internacional.
3. Las disposiciones del párrafo 1 son también aplicable a los beneficios procedentes de la participación en un “pool”, en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional.

Art. 9.- Empresas Asociadas.-

1. Cuando

(a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o

(b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, las rentas que habrían sido obtenidas por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en la renta de esa empresa y sometidos a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en la renta de una empresa de ese Estado, y someta, en consecuencia, a imposición, la renta sobre la cual una empresa del otro Estado Contratante ha sido sometida a imposición en ese otro Estado, y la renta así incluida es renta que habría sido realizada por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará, si está de acuerdo, el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esa renta. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario.

Art. 10.- Dividendos.-

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Dichos dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este Estado.

Sin embargo, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:

(a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que controla directa o indirectamente no menos del 25 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga dichos dividendos;

(b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.

Las disposiciones de este párrafo no afectan la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos. Para los fines de este párrafo, la expresión “imposición de la sociedad” comprende, en el caso de Chile, tanto el impuesto de primera categoría como el impuesto adicional, siempre que el impuesto de primera categoría sea deducible contra el impuesto adicional.

3. El término “dividendos” en el sentido de este Artículo significa las rentas de las acciones u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otros derechos sujetos al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación del Estado del que la sociedad que hace la distribución sea residente.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro Estado unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos

esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situados en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.

Art. 11.- Intereses.-

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto de los intereses.
3. El término “intereses”, en el sentido de este Artículo significa las rentas de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria, y en particular, las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, así como cualquiera otra renta que la legislación del Estado de donde procedan los intereses asimile a las rentas de las cantidades dadas en préstamo. Sin embargo, el término “interés” no incluye las rentas comprendidas en el Artículo 10.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dichos establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.
5. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente del Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda por la

que se pagan los intereses, y éstos se soportan por el establecimiento permanente o la base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante en que estén situados el establecimiento permanente o la base fija.

6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses habida cuenta del crédito por el que se paguen exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
7. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito o uno de los principales propósitos de cualquier persona vinculada con la creación o atribución del crédito en relación al cual los intereses se pagan, fuera el sacar ventajas de este Artículo mediante tal creación o atribución.

Art. 12.- Regalías.-

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no puede exceder del:
 - (a) 10 por ciento del importe bruto de las regalías por el uso o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos;
 - (b) 15 por ciento del importe bruto de las regalías en todos los demás casos.
3. El término “regalías” empleado en este Artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias,

artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y el sonido, las patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad intangible, incluido el derecho de obtentores de variedades vegetales, o por el uso o derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el Estado Contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y el bien o el derecho por el que se pagan las regalías están vinculados efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.
5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija que soporte la carga de las mismas, éstas se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.
6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
7. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito principal o uno de los principales propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de derechos en relación a los cuales las regalías se paguen fuera el de sacar ventajas de este Artículo mediante tal creación o atribución.

Art. 13.- Ganancias de Capital.-

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en este último Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa de la que forme parte) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde resida el enajenante.
4. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga por la enajenación de títulos u otros derechos representativos del capital de una sociedad o de cualquier otro tipo de instrumento financiero situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.
5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los párrafos anteriores sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida el enajenante.

Art. 14.- Servicios Personales Independientes.-

1. Las rentas que una persona natural residente de un Estado Contratante obtenga por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de naturaleza independiente sólo pueden someterse a imposición en este Estado, salvo las siguientes circunstancias, en que dichas rentas podrán también ser sometidas a imposición en el otro Estado Contratante:

(a)cuando dicha persona tenga en el otro Estado Contratante una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades; en tal caso, sólo puede someterse a imposición en este otro Estado Contratante la parte de las rentas que sean atribuibles a dicha base fija; o

(b)cuando dicha persona permanezca en el otro Estado Contratante por un periodo o periodos que en total suman o excedan 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses; en tal caso, sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en este otro Estado.

2. La expresión “servicios profesionales” comprende especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores.

Art. 15.- Servicios Personales Dependientes.-

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se realice en el otro Estado Contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón de un empleo realizado en el otro Estado Contratante se gravarán exclusivamente en el primer Estado si:
 - (a)el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y
 - (b)las remuneraciones se pagan por, o en nombre de una persona que no sea residente del otro Estado, y

(c) las remuneraciones no se imputen a un establecimiento permanente o una base fija que una persona tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional sólo podrá someterse a imposición en ese Estado.

Art. 16.- Participaciones de Consejeros.-

Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un órgano de administración o directorio de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Art. 17.- Artistas y Deportistas.-

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Las rentas a que se refiere el presente párrafo incluyen las rentas que dicho residente obtenga de cualquier actividad personal ejercida en el otro Estado Contratante relacionada con su renombre como artista del espectáculo o deportista.
2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que se realicen las actividades del artista del espectáculo o el deportista.

Art. 18.- Pensiones.-

Las pensiones pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Art. 19.- Funciones Públicas.-

1. (a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona natural por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

(b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que:

(i) posee la nacionalidad de este Estado; o

(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.

2. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales.

Art. 20.- Estudiantes.-

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación práctica un estudiante, aprendiz o una persona en práctica que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

Art. 21.- Otras Rentas.-

Las rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los Artículos anteriores del presente Convenio y que provengan del otro Estado Contratante, también pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.

CAPITULO IV
IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

Art. 22.- Patrimonio.-

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, que posea un residente de un Estado Contratante y esté situado en el otro Estado Contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.
2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga el en otro Estado Contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante disponga en el otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales independientes, puede someterse a imposición en ese otro Estado.
3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en tráfico internacional por una empresa de un Estado Contratante, así como por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo puede someterse a imposición en este Estado.
4. Todos los demás elementos del patrimonio que posea un residente de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en este Estado.

CAPITULO V
MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Art. 23.- Método de Imputación.-

1. En el caso del Ecuador, la doble tributación se evitará de la manera siguiente:

Cuando el residente del Ecuador obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a imposición en Chile, el Ecuador deducirá:

- (a) Del impuesto que perciba sobre las rentas de este residente un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Chile; y,
- (b) Del impuesto que perciba sobre el patrimonio de este residente un importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en Chile.

2. En el caso de Chile, la doble tributación se evitará de la manera siguiente:

(a) las personas residentes en Chile que obtengan rentas que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en el Ecuador, podrán acreditar contra los impuestos chilenos correspondientes a esas rentas los impuestos aplicados en el Ecuador, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación chilena. Este párrafo también se aplicará a las rentas a que se refieren los Artículos 6 y 11; y

(b) cuando de conformidad con cualquier disposición del presente Convenio, las rentas obtenidas por un residente de Chile o el patrimonio que éste posea estén exentos de imposición en Chile, Chile podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre las demás rentas o el patrimonio de dicho residente.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES ESPECIALES

Art. 24.- No Discriminación.-

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se exijan o que sean más gravosas que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia.
2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos en ese Estado a una imposición menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.
3. Nada de lo establecido en el presente Artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
4. A menos que se apliquen las disposiciones del Artículo 9, del párrafo 7 del Artículo 11 o del párrafo 6 del Artículo 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de esta empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar.
5. Las sociedades de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante no estarán sometidas en el primer Estado a ninguna imposición u obligación relativa al mismo que no se exijan o sean más gravosas que aquéllos a los que estén o puedan estar sometidas las sociedades similares del Estado mencionado en primer lugar.

6. En el presente Artículo, el término “imposición” se refiere a los impuestos que son objeto de este Convenio.

Art. 25.- Procedimiento de Acuerdo Mutuo.-

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 24, a la del Estado Contratante del que sea nacional.
2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un procedimiento de acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio.
3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo.
4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse directamente a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los párrafos anteriores.
5. Si surge una dificultad o duda acerca de la interpretación o aplicación de este Convenio, que no pueda ser resuelta por las autoridades competentes de los Estados Contratantes, el caso podrá, si las autoridades competentes lo acuerdan, ser sometido a arbitraje. El procedimiento será acordado entre los Estados Contratantes por medio de notas que serán intercambiadas a través de los canales diplomáticos. El laudo arbitral en un caso particular, conforme el procedimiento acordado por las partes, será obligatorio para ambos Estados respecto a dicho caso, pero no tendrá efecto retroactivo.

Art. 26.- Intercambio de Información.-

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán las informaciones necesarias para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o en el derecho interno de los Estados Contratantes relativo a los impuestos comprendidos en el Convenio en la medida en que la imposición prevista en el mismo no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no se verá limitado por el Artículo 1. Las informaciones recibidas por un Estado Contratante serán mantenidas en secreto en igual forma que la informaciones obtenidas en base al derecho interno de ese Estado y sólo se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos, o de la resolución de los recursos relativos a los mismos. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán estas informaciones para estos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
2. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:
 - (a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estados Contratante;
 - (b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado Contratante;
 - (c) suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.
3. Cuando la información sea solicitada por un Estado Contratante de conformidad con el presente Artículo, el otro Estado Contratante hará lo posible por obtener la información a que se refiere la solicitud en la misma forma como si se tratara de su propia imposición, sin importar el hecho de que este otro Estado, en ese momento, no requiera de tal información. Cuando sea solicitado en forma específica por la autoridad competente de

un Estado Contratante, la autoridad competente del otro Estado Contratante hará lo posible por proporcionar la información a la que se refiere el presente Artículo en la forma requerida, la que podrá consistir en declaraciones de testigos y copias de documentos originales y sin enmiendas (incluyendo libros, papeles, declaraciones, registros, informes o escritos), en la misma medida en que tales declaraciones y documentos puedan ser obtenidos de conformidad con la legislación y prácticas administrativas de ese otro Estado Contratante en relación a sus propios impuestos.

Art. 27.- Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares.-

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las representaciones consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

Art. 28.- Disposiciones Misceláneas.-

1. Nada en este convenio podrá evitar la aplicación del derecho interno de alguno de los Estados Contratantes en relación a la tributación de las rentas, beneficios, dividendos, ganancias o remesas de instituciones de inversión, o fondos de cualquier tipo incluyendo los fondos de inversión y de pensiones o sus participantes, que sean residentes del otro Estado Contratante, siempre que dicha renta no se someta a imposición de conformidad con las disposiciones de este Convenio.
2. Nada en este Convenio afectará la aplicación de las actuales disposiciones del D.L. 600 (Estatuto de la Inversión extranjera) de la legislación chilena, conforme estén en vigor a la fecha de la firma de este Convenio y aún cuando fueren eventualmente modificadas sin alterar su principio general.
3. Considerando que el objetivo principal de este Convenio es evitar la doble imposición internacional, los Estados Contratantes acuerdan que, en el evento de que las disposiciones del Convenio sean usadas en forma tal que otorguen beneficios no contemplados ni pretendidos por él, las autoridades competentes de los Estados Contratantes deberán, en conformidad al procedimiento de acuerdo mutuo del Artículo

25, recomendar modificaciones específicas al Convenio. Los Estados Contratantes además acuerdan que cualquiera de dichas recomendaciones será considerada y discutida de manera expedita con miras a modificar el Convenio en la medida en que sea necesario.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 29.- Entrada en Vigor.-

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de los canales diplomáticos, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor del presente Convenio. Dicho Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación.

2. Las disposiciones del Convenio se aplicarán:

(a) en el Ecuador,

con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, así como el impuesto al patrimonio, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor; y

(b) en Chile,

con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, así como el impuesto al patrimonio, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor.

Art. 30.- Denuncia.-

1. El presente Convenio permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Contratantes podrá, a más tardar el 30 de junio de cada año calendario dar al otro Estado Contratante un aviso de término por escrito, a través de la vía diplomática.
2. Las disposiciones del Convenio dejarán de surtir efecto:

(a) en el Ecuador,

con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, así como el impuesto al patrimonio, a partir del primer día del mes de Enero del año calendario inmediatamente siguiente;y,

(a) en Chile,

con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como gasto, así como el impuesto al patrimonio, a partir del primer día del mes de Enero del año calendario inmediatamente siguiente.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.

HECHO en Quito, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en duplicado, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE CHILE**

**POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRIMONIO

Al momento de la firma del Convenio entre la República de Chile y la República del Ecuador para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, los abajo firmantes han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante del presente Convenio:

1. Con referencia al Artículo 4

En relación al párrafo 1 del Artículo 4 de este Convenio, no se considera residente a las sociedades constituidas al amparo de las leyes de un Estado Contratante, si el régimen tributario de dicho Estado establece la no sujeción a impuesto por las rentas de fuente externa. No se aplicará la disposición antes mencionada tratándose de una persona natural que durante sus primeros años de residencia en Chile no tributa por sus rentas de fuente externa.

2. Con referencia al Artículo 7

(a) El establecimiento permanente deberá tratar en la forma indicada en el párrafo 2 del Artículo 7 del este Convenio con todas aquellas empresas con las cuales se encuentra relacionada la empresa de la que es establecimiento permanente, en los términos del párrafo 1 del Artículo 9 de este Convenio.

(b) Se entiende que las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 7 sólo se aplicarán si los gastos pueden ser atribuidos al establecimiento permanente en conformidad con las disposiciones de la legislación impositiva del Estado Contratante en el cual el establecimiento permanente esté situado.

En particular, no serán deducibles los pagos que efectúe, en su caso, el establecimiento permanente (que no sean los hechos por conceptos de reembolso de gastos efectivos) a la oficina central de la empresa o a alguna de sus otras sucursales, a título de regalías,

honorarios o pagos análogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, a título de comisión u otros cargos, por servicios concretos prestados o por gestión o, salvo en el caso de un banco, a título de intereses sobre el dinero prestado al establecimiento permanente.

3. Con referencia al Artículo 11

Si en una fecha posterior a aquella en la que se firme el presente Convenio, Chile concluye un Acuerdo o Convenio con otro Estado, por el que Chile acuerde una tasa de impuesto sobre intereses que sea menor o preferencial a la propuesta en el presente Convenio respecto de tales ingresos, dicha tasa menor o preferencial se aplicará para los propósitos del párrafo 2 del Artículo 11 en forma automática bajo las mismas condiciones a los efectos de este Convenio, a partir de la fecha en que las disposiciones de dicho nuevo Acuerdo o Convenio sean aplicables, según corresponda.

4. Con referencia al Artículo 12

Si en una fecha posterior a aquella en la que se firme el presente Convenio, Chile concluye un Acuerdo o Convenio con otro Estado, por el que Chile acuerde una tasa de impuesto sobre regalías que sea menor a la propuesta en el presente Convenio respecto de tales ingresos, dicha tasa menor se aplicará para los propósitos del párrafo 2 del Artículo 12 en forma automática bajo las mismas condiciones a los efectos de este Convenio, a partir de la fecha en que las disposiciones de dicho nuevo Acuerdo o Convenio sean aplicables, según corresponda. Sin embargo, dicha tasa menor no podrá ser inferior al 10 por ciento.

5. Con referencia al Artículo 24

La tasa de 30 por ciento a la que se refiere el Artículo 31, Número 12 de la Ley de la Renta de Chile, se sustituirá por la tasa de 15 por ciento para los beneficiarios efectivos de los pagos por regalías residentes en el Ecuador.

6. Con referencia al Artículo 24

Nada de lo dispuesto en el Artículo 24 del Convenio afectará la aplicación, renovación o modificación de una disposición existente al tiempo de la firma del Convenio que sea disconforme a lo dispuesto en dicho Artículo.

7.

Nada en este Convenio afectará la imposición en Chile de una sociedad residente en el Ecuador en relación a los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente de esa sociedad situado en Chile, tanto bajo el impuesto de primera categoría como el impuesto adicional, siempre que el impuesto de primera categoría sea deducible contra el impuesto adicional.

Este párrafo se aplicará igualmente al Ecuador, si en el futuro implementa un régimen tributario integrado similar al que rige en Chile al momento de la firma de este Convenio, el que deberá incluir un crédito total por el impuesto a la renta contra el impuesto de retención que afecta a una remesa.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Protocolo.

HECHO en Quito, a los veintiséis días del mes de agosto, de mil novecientos noventa y nueve, en duplicado, en el idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE CHILE**

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR**

Anexo 4: Convenio Brasil

Celebrado en Quito, el 26 de mayo de 1983.

Publicado en el Registro Oficial 865, de 2 de febrero de 1988.

Fecha de vigencia: 1 de enero de 1988.

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR
LA EVASIÓN TRIBUTARIA CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Federativa del Brasil,

Deseando concluir un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión
Tributaria con respecto a los Impuestos sobre la Renta,

Han acordado lo siguiente:

Art. 1.- Ámbito personal.-

Este Convenio se aplicará a las personas residentes en uno o en ambos Estados Contratantes.

Art. 2.- Impuestos comprendidos.-

1. Este Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta exigidos por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera fuera el sistema de percepción.
2. Los impuestos existentes a los cuales se aplicará este Convenio son:

a) en la República del Ecuador:

- el impuesto a la renta inclusive los adicionales establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta (en adelante denominado "impuesto ecuatoriano").

Nota: La Ley de Impuesto a la Renta fue derogada y sustituida por la Ley de Régimen Tributario Interno.

b) en la República Federativa del Brasil:

- el impuesto federal sobre la renta, con exclusión de las incidencias sobre remesas excedentes y sobre actividades menos importantes (en adelante denominado "impuesto brasileño").

3. El presente Convenio se aplicará también a los impuestos de naturaleza idéntica o substancialmente similar que se añadan a los existentes o que los sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán cualquier modificación relevante que se haya introducido en sus respectivas legislaciones tributarias.

Art. 3.- Disposiciones generales.-

1. En este Convenio, a menos que el contexto lo disponga de otro modo:

a) el término "Ecuador" significa la República del Ecuador;

b) el término "Brasil" significa la República Federativa del Brasil;

c) el término "nacionales" significa:

i. todas las personas naturales o físicas que poseen la nacionalidad de un Estado Contratante, según las leyes de ese Estado Contratante;

ii. todas las personas jurídicas, sociedades de personas o asociaciones cuyo carácter de nacional se deriven de las leyes en vigor en un Estado Contratante;

d) las expresiones "un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante" significan Ecuador o Brasil, tal como el texto lo requiera;

e) el término "persona" comprende una persona natural o física, una sociedad o cualquier otra agrupación de personas, sujetas a responsabilidad tributaria;

f) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que es tratada como una persona jurídica a los fines impositivos;

g) el término "empresa" significa una organización constituida por una o más personas que realice una actividad lucrativa;

h) las expresiones "empresa de un Estado Contratante" y "empresa del otro Estado Contratante" significan, respectivamente, una empresa explotada por una persona residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por una persona residente del otro Estado Contratante, según se infiera del texto;

i) la expresión "tráfico internacional" significa cualquier transporte por buque, embarcación o aeronave explotado por una empresa que tiene su sede de dirección o administración efectiva establecida en un Estado Contratante excepto cuando el buque, la embarcación o la aeronave es explotado solamente entre lugares del otro Estado Contratante (cabotaje);

j) el término "impuesto" significa impuesto ecuatoriano o impuesto brasileño, tal como el texto lo requiera;

k) la expresión "autoridad competente", significa:

I en Ecuador: el Ministro de Finanzas y Crédito Público, el Director General de Rentas o sus representantes autorizados;

Nota:

Las facultades del Director General de Rentas las ejerce ahora el Director General del Servicio de Rentas Internas.

II en Brasil: el Ministro de Fazenda, el Secretario da Receita Federal o sus representantes autorizados.

2. Para la aplicación del presente Convenio por un Estado Contratante, cualquier expresión o término no definido de otra manera tendrá, a menos que el texto exija una interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de ese Estado Contratante relativa a los impuestos que son objeto del presente Convenio. En el caso que los sentidos acordados resulten contrapuestos o antagónicos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes, de común acuerdo, establecerán la interpretación a acordar.

Art. 4.- Domicilio tributario.-

1. A los fines de este Convenio, la expresión "residente de un Estado Contratante" significa cualquier persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga.
2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona natural o física es residente de ambos Estados Contratantes, el caso será resuelto de acuerdo con las siguientes reglas:
 - a) esta persona será considerada residente del Estado Contratante en el cual tiene una vivienda permanente disponible. Si tiene una vivienda permanente disponible en ambos Estados Contratantes, será considerada residente del Estado Contratante con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
 - b) si no pudiera determinarse el Estado Contratante en el cual dicha persona tiene su centro de intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente disponible en ninguno de los Estados Contratantes, será considerada residente del Estado Contratante donde vive de manera habitual;
 - c) si viviera de manera habitual en ambos Estados Contratantes o no lo hiciera en ninguno de ellos, será considerada residente del Estado Contratante del cual es nacional;
 - d) si es nacional de ambos Estados Contratantes o no lo es de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado I, una persona, que no sea una persona natural o física, sea residente de ambos Estados Contratantes, se la considerará residente del Estado Contratante en que se encuentre su sede de dirección o administración efectiva.

Art. 5.- Establecimiento permanente.-

1. A los fines del presente Convenio, la expresión "establecimiento permanente" significa un lugar fijo de negocios en el que una empresa efectúa toda o parte de su actividad.
2. La expresión "establecimiento permanente" incluye especialmente:
 - a) una sede de dirección;
 - b) una sucursal;
 - c) una oficina;
 - d) una fábrica;
 - e) un taller;
 - f) una mina, cantera u otro lugar de extracción de recursos naturales;
 - g) una obra de construcción, instalación o montaje, cuya duración exceda de doce meses.
3. la expresión "establecimiento permanente" no comprende:
 - a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercaderías pertenecientes a la empresa;
 - b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercaderías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
 - c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercaderías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean procesadas por otra empresa;
 - d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de adquirir bienes o mercaderías, o de recoger información, para la empresa;

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, de suministrar información, de realizar investigación científica o actividades similares que tengan carácter preparatorio o auxiliar para la empresa.

4. Una persona que actúe en un Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro Estado Contratante -salvo que se trate de un agente independiente comprendido en el apartado 5- será considerada un establecimiento permanente en el Estado primeramente mencionado si tiene y habitualmente ejerce en este Estado poderes para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que sus actividades se limiten a la compra de bienes o mercaderías para la empresa.

Sin embargo, una sociedad aseguradora de un Estado Contratante se considerará que tiene un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante siempre que, a través de un representante distinto de las personas a las que les resulta aplicable el apartado 5, reciba premios o asegure riesgos en ese otro Estado.

5. No se considerará que una empresa de un Estado Contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante por el mero hecho de que realice negocios en ese otro Estado Contratante por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro intermediario que goce de una situación independiente, siempre que estas personas actúen en el curso ordinario de su negocio.
6. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por una sociedad que sea residente del otro Estado Contratante, o que ejerza actividades en este otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otro modo), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en un establecimiento permanente de la otra.

Art. 6.- Rentas de los bienes inmuebles.-

1. Las rentas procedentes de los bienes inmuebles, inclusive las rentas de la agricultura y forestación, pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que tales bienes están situados.

2. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b) y c), la expresión "bienes inmuebles" se definirá de acuerdo con la ley del Estado Contratante en que los bienes estén situados;
- b) la expresión comprende, en todo caso, los accesorios de la propiedad inmobiliaria, el ganado y equipo utilizados en agricultura y forestación, los derechos a los que se apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a propiedad inmobiliaria, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a pagos variables o fijos por la explotación o el derecho a explotar yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales;
- c) los buques, embarcaciones y aeronaves no serán considerados como bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán a las rentas derivadas del uso directo, del arrendamiento o de cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de profesiones independientes.

Art. 7.- Beneficios de las empresas.-

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa lleve a cabo negocios en el otro Estado por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa lleva a cabo negocios en la forma mencionada sus beneficios pueden someterse a imposición en el otro Estado pero sólo en la cantidad atribuible a ese establecimiento permanente.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cuando una empresa de un Estado Contratante desarrolla actividades en el otro Estado Contratante mediante un establecimiento permanente en él situado, en cada Estado Contratante serán atribuibles al establecimiento permanente los beneficios que éste obtendría si fuera una empresa distinta y separada, que realizase las mismas o similares actividades, bajo las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la cual es un establecimiento permanente.

3. Para la determinación de los beneficios de un establecimiento permanente se permitirá deducir los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, incluyendo los gastos de dirección y generales de administración realizados para los mismos fines.
4. Ningún beneficio será atribuido a un establecimiento permanente por el solo hecho de que éste compre bienes o mercaderías para la empresa.
5. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente artículo.

Art. 8.- Transporte aéreo, marítimo y fluvial.-

1. Los beneficios procedentes del tráfico internacional obtenidos por empresas de transporte aéreo, marítimo o fluvial sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el que esté situada la sede de dirección o administración efectiva de las mismas.
2. Si la sede de dirección o administración efectiva de una empresa de transporte marítimo o fluvial estuviera a bordo de un buque o una embarcación, se considerará que se encuentra en el Estado Contratante donde esté el puerto base del mismo, y si no existiera tal puerto base, en el Estado Contratante en el que resida la persona que explote el buque o la embarcación.
3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un "pool", en una explotación en común o en un organismo internacional de explotación.
4. Las disposiciones del apartado 1 del artículo XVI del Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Transporte Marítimo, de fecha 9 de febrero de 1982, cesarán de aplicarse, con respecto a los impuestos comprendidos en el presente Convenio, en el período de vigencia de este Convenio.

Art. 9.- Empresas asociadas.-

Cuando:

- a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una empresa del otro Estado Contratante, o
- b) las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, y, en uno y otro caso, las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas, que difieren de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que una de las empresas independientes habría obtenido de no existir estas condiciones y que de hecho no se han producido a causa de las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia.

Art. 10.- Dividendos.-

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos, y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero, si el perceptor de los dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder el 15 por ciento del importe bruto de los dividendos.

Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad por los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de los dividendos, residente de un Estado Contratante, tiene en el otro Estado Contratante del que es residente la sociedad pagadora de los dividendos, un establecimiento permanente con el que la participación que genere los dividendos esté vinculada efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del artículo 7.

4. El término "dividendos" empleado en este artículo comprende los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, parte de minas, partes de fundador u otros derechos que permitan participar de los beneficios, excepto los de crédito, así como las rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del Estado Contratante en que reside la sociedad que las distribuya.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante tuviera un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante, este establecimiento puede ser sometido a un impuesto retenido en la fuente de acuerdo con la legislación de ese otro Estado Contratante. Sin embargo, el impuesto no puede exceder el 15 por ciento del importe bruto de los beneficios del establecimiento permanente, una vez deducido el impuesto sobre la renta de sociedades relativo a dichos beneficios.
6. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtiene beneficios o rentas procedentes del otro Estado, este otro Estado no puede exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, excepto en la medida en que tales dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o en la medida en que la participación que genera los dividendos pagados esté efectivamente vinculada con un establecimiento permanente o una base fija situada en este otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre beneficios no distribuidos, aun cuando los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas originadas en ese otro Estado.

Art. 11.- Intereses.-

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, tales intereses pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que proceden y de acuerdo con las leyes del mismo, pero, si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder el 15 por ciento del importe bruto de los intereses.
3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2:

- a) los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados al Gobierno del otro Estado Contratante o a una de sus subdivisiones políticas o a cualquier agencia (inclusive una institución financiera) de propiedad total de ese Gobierno o de una de sus subdivisiones políticas están exentos del impuesto en el primer Estado Contratante;
- b) los intereses de la Deuda Pública, de los bonos u obligaciones emitidos por el Gobierno de un Estado Contratante, o una de sus subdivisiones políticas o cualquier agencia (inclusive una institución financiera) de propiedad total de ese Gobierno sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
4. El término "intereses" empleado en este Artículo, comprende los rendimientos de la Deuda Pública, de los bonos u obligaciones, con o sin garantía hipotecaria y con derecho a no participar en beneficios, y de los créditos de cualquier clase, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde proceden los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas en préstamo.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de los intereses, residente de un Estado Contratante, tiene en el otro Estado Contratante del que proceden los intereses, un establecimiento permanente con el que el crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del artículo 7.
6. La limitación establecida en el apartado 2 no se aplica a los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un establecimiento permanente de una empresa del otro Estado Contratante situada en un tercer Estado.
7. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas o un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con el cual se haya contraído la deuda que da origen a los intereses y este establecimiento o base fija soporte el pago de los mismos, los intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.

Art. 12.- Regalías.-

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. Sin embargo, tales regalías pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedente, y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero, si el perceptor de las regalías es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder:
 - a) el 25 por ciento del importe bruto de las regalías procedentes del uso o de la concesión del uso de marcas de fábrica o de comercio; y,
 - b) el 15 por ciento en todos los demás casos.
3. El término "regalías" empleado en este artículo, comprende las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas (incluidas las películas cinematográficas, filmes o cintas de grabación de programas de televisión o radiodifusión), de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como por el uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos y por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
4. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una de sus subdivisiones políticas, una entidad local o un residente del mismo. Sin embargo, cuando el deudor de las regalías sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija al cual está vinculada la prestación porque se pagan las regalías y este establecimiento o base fija soporte el pago de las mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado Contratante donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario de las regalías, residente de un Estado Contratante, tiene en el otro Estado Contratante del cual proceden las regalías, un establecimiento permanente con el cual el derecho o propiedad por el que

se pagan las regalías esté vinculado efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del artículo 7.

6. Cuando, debido a relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario de las regalías o entre ambos y cualquier otra persona, el importe de las regalías pagadas, habida cuenta de la prestación por la que se paguen, exceda del importe que habría sido acordado por el deudor y el beneficiario en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición, de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.

Art. 13.- Ganancias del capital.-

1. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes pueden someterse a imposición en los Estados Contratantes según la legislación interna de cada uno de ellos.
2. No obstante las disposiciones del apartado 1, las ganancias derivadas de la enajenación de buques, embarcaciones o aeronaves, inclusive los bienes muebles afectados a los mismos, utilizados en el tráfico internacional, de propiedad de una empresa comprendida en el artículo 8, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde esté situada la sede de dirección o administración efectiva de la empresa.

Art. 14.- Profesionales independientes.-

1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante por la prestación de servicios profesionales o de otras actividades independientes de naturaleza análoga sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que los pagos por tales actividades y servicios sean soportados por un establecimiento permanente o una base fija que estén situados en el otro Estado Contratante o por una sociedad residente de este otro Estado. En este caso, estas rentas pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. La expresión "servicios profesionales" comprende, especialmente, las actividades independientes de carácter científico, técnico, literario, artístico, educativo o pedagógico,

así como las actividades independientes de médico, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores o auditores.

Art. 15.- Profesionales dependientes.-

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 los salarios, sueldos y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo sólo pueden someterse a imposición en este Estado a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. No obstante las disposiciones del apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante en virtud de un empleo ejercido en el otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si:
 - a) el beneficiario permanece en el otro Estado durante uno o varios períodos que no excedan en total de 183 días en el año fiscal considerado,
 - b) las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un empleador que no es residente del otro Estado, y
 - c) las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una base fija que el empleador posea en el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas en virtud de un empleo ejercido a bordo de un buque, embarcación o aeronave utilizado en el tráfico internacional por una empresa comprendida en el artículo 8 sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante, en que esté situada la sede de dirección o administración efectiva de dicha empresa.

Art. 16.- Honorarios de Directores.-

Los honorarios de directores y otras retribuciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en su calidad de miembro del directorio o de cualquier consejo de una

sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.

Art. 17.- Artistas y deportistas.-

1. No obstante las disposiciones de los artículos 14 y 15, las rentas obtenidas por los profesionales del espectáculo, tales como los artistas de teatro, cine, radiodifusión o televisión, y los músicos, así como los deportistas, por sus actividades personales en este concepto, pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que estas actividades son desarrolladas.
2. No obstante las otras disposiciones del presente Convenio, cuando los servicios mencionados en el apartado 1 de este artículo fueren suministrados en un Estado Contratante por una empresa del otro Estado Contratante, las rentas recibidas por la empresa por el suministro de estos servicios pueden someterse a imposición en el primer Estado Contratante.

Art. 18.- Pensiones y anualidades.-

1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 19, las pensiones y otras remuneraciones semejantes que reconozcan su origen en la prestación de servicios personales, así como también las anualidades y otras rentas similares, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante desde cuyo territorio se efectúan los pagos.
2. En el presente artículo:
 - a) la expresión "pensiones y otras remuneraciones semejantes" designa pagos periódicos, efectuados después de la jubilación, como consecuencia de un empleo anterior o a título de compensación por daños sufridos como consecuencia de un empleo anterior.
 - b) la expresión "anualidades y otras rentas similares" designa una cantidad determinada, pagada periódicamente en plazos determinados, durante la vida o durante un período de tiempo determinado o determinable, a raíz de un compromiso de efectuar los pagos como

retribución de un pleno y adecuado contravalor en dinero o valorable en dinero (que no sea por servicios prestados).

Art. 19.- Retribuciones gubernamentales y pagos de sistemas de seguridad social.-

1. a) Las remuneraciones, excepto las pensiones, pagadas por un Estado Contratante, una subdivisión política o una autoridad local del mismo, a una persona en relación con servicios prestados a este Estado, subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en este Estado.

b) Sin embargo, dichas remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios son prestados en este Estado y la persona:
 1. Es nacional de este Estado; o
 2. No siendo nacional de este Estado, en el período previo a la prestación de dichos servicios era residente de este Estado.
2. Cualquier pensión pagada por, o con fondos creados por un Estado Contratante, una subdivisión política, o una autoridad local del mismo, a una persona natural o física respecto de servicios prestados a este Estado, Subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en este Estado.
3. Las pensiones pagadas a una persona natural o física con fondos provenientes de un sistema de previsión social de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en este Estado.
4. Las disposiciones de los artículos 15, 16 y 18 serán aplicables a las remuneraciones y pensiones respecto de los servicios prestados en relación con una actividad comercial o industrial desarrollada por un Estado Contratante, una subdivisión política o autoridad local del mismo.

Art. 20.- Profesores o investigadores.- Una persona natural o física que es, o fue en el período inmediatamente anterior a su visita a un Estado Contratante, un residente del otro

Estado Contratante, y que, por invitación del primer Estado Contratante, o de una universidad, colegio superior, escuela, museo u otra institución cultural del primer Estado Contratante, o que, cumpliendo un programa oficial de intercambio cultural, permanezca en ese Estado por un período que no exceda de dos años con el único fin de enseñar, pronunciar conferencias o realizar investigaciones en dichas instituciones, estará exenta de imposición en este Estado con relación a las remuneraciones que perciba como consecuencia de tales actividades, en tanto que el pago por dichas remuneraciones provengan del exterior de este Estado.

Art. 21.- Estudiantes y aprendices.-

1. Una persona natural o física que es, o fue en el período inmediatamente anterior a su vista a un Estado Contratante, un residente del otro Estado Contratante, y que permanezca en el primer Estado Contratante solamente:

a) como estudiante de una Universidad, colegio superior o escuela del primer Estado Contratante;

b) como beneficiario de una beca, ayuda escolar o recompensa concedida por una organización religiosa, de caridad, científica o educacional, con el fin primordial de estudiar o realizar investigaciones;

c) como miembro de un programa de cooperación técnica desarrollado por el Gobierno del otro Estado Contratante; o,

d) como aprendiz.

Estará exenta de impuesto en el primer Estado Contratante, y que permanezca en el primer Estado exterior para su sostenimiento, educación o aprendizaje.

2. Una persona natural o física que es, o fue en período inmediatamente anterior a su visita a un Estado Contratante, un residente del otro Estado Contratante, y que permanezca en el primer Estado Contratante con el único fin de estudio o aprendizaje, estará exento de impuesto en el primer Estado Contratante por un período que no exceda de dos años de

estadía, por lo que se refiere a la remuneración que reciba por un empleo ejercido en este Estado con la finalidad de ayudarse en sus estudios o aprendizaje.

Art. 22.- Otras rentas.- Las rentas de un residente de un Estado Contratante no tratadas en los artículos anteriores y procedentes del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.

Art. 23.- Métodos para evitar la doble imposición.-

1. Cuando un residente de un Estado Contratante perciba rentas que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante, el primer Estado Contratante, salvo lo dispuesto en los apartados 2 y 3 deducirá del impuesto sobre las rentas de este residente un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en el otro Estado Contratante.

Sin embargo, la cantidad a deducir no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculada antes de la deducción, correspondiente a las rentas que pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante.

2. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a una sociedad residente del otro Estado Contratante titular de más del 10 por ciento del capital de la sociedad pagadora, que pueden someterse a imposición en el primer Estado Contratante de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, serán eximidos del impuesto en el otro Estado Contratante.
3. Para la deducción mencionada en el apartado 1, el impuesto sobre los dividendos no comprendidos en el apartado 2 de este artículo, sobre los intereses referidos en el apartado 2 del artículo 11 y sobre las regalías referidas en el apartado 2b del artículo 12 se considerará siempre que ha sido pagado con la alícuota del 25 por ciento.

Art. 24.- No discriminación.-

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más

gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones.

2. Un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no será sometido a imposición en este Estado de manera menos favorable que las empresas de este otro estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición no puede interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o más residentes del otro Estado Contratante no serán sometidas en el primer Estado a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos otras empresas similares del primer Estado.
4. Lo dispuesto en el presente artículo sólo es aplicable a los impuestos objeto de este Convenio, mencionados en el artículo 2.

Art. 25.- Procedimiento amistoso.-

1. Cuando un residente de un Estado Contratante considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para él una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por la legislación nacional de estos Estados, podrá someterse su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que es residente dentro del plazo de dos años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme con las disposiciones de este Convenio.
2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si ella misma no está en condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado Contratante a fin de evitar una imposición que no se ajuste al presente Convenio.

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que plantea la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para tratar los casos no previstos en el mismo.
4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden comunicarse directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo según se indica en los apartados anteriores. Cuando se considere que estos acuerdos pueden facilitarse mediante contactos personales, el intercambio de puntos de vista podrá realizarse en el seno de una comisión compuesta por representantes de las autoridades competentes de ambos Estados Contratantes.

Art. 26.- Intercambio de información.-

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán las informaciones necesarias para la aplicación del presente Convenio y de las leyes internas de los Estados Contratantes relativas a los impuestos comprendidos en el mismo que se exijan de acuerdo con él. Las informaciones así intercambiadas serán mantenidas en reserva y sólo se podrán revelar a personas u autoridades incluyendo tribunales jurisdiccionales o administrativos competentes, vinculadas a la liquidación o recaudación de los impuestos objetos del presente Convenio.
2. En ningún caso, las disposiciones del apartado 1 obligan a un Estado Contratante a:
 - a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado Contratante;
 - b) suministrar información que no se puede obtener sobre la base de su propia legislación o práctica administrativa o de las del otro Estado Contratante; y,
 - c) transmitir informaciones que revelen un secreto comercial, industrial o profesional o un procedimiento comercial, o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

Art. 27.- Funcionarios diplomáticos y consulares.- Las disposiciones del presente Convenio no afectan los privilegios fiscales que disfruten los funcionarios diplomáticos o consulares de acuerdo con los principios generales del Derecho Internacional o en virtud de acuerdos especiales.

Art. 28.- Entrada en vigor.-

1. El presente Convenio será ratificado, y los instrumentos de ratificación serán intercambiados en Brasilia lo antes posible.
2. El Convenio entrará en vigor a partir del intercambio de los instrumentos de ratificación, y sus disposiciones se aplicarán por primera vez:
 - i. con respecto a los impuestos retenidos en la fuente, a las sumas pagadas en él o después del primer día de enero del año calendario inmediato siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor.
 - ii. con respecto a los otros impuestos comprendidos en el Convenio, al ejercicio fiscal que comience en el o después del primer día de enero del año calendario inmediato siguiente a aquél en que el Convenio entre en vigor.

Art. 29.- Denuncia.- Cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciar el presente Convenio después de un período de cinco años a contar de la fecha de su entrada en vigor mediante un aviso escrito de denuncia entregado al otro Estado Contratante por vía diplomática siempre que tal aviso tenga lugar hasta el día 30 de junio de cualquier año calendario. En este caso el presente Convenio se aplicará por última vez:

- i. con respecto a los impuestos retenidos en la fuente, a las sumas pagadas antes de la expiración del año calendario en que la denuncia haya tenido lugar;
- ii. con respecto a los otros impuestos comprendidos en el Convenio, al ejercicio fiscal que comience en el año calendario en que la denuncia haya tenido lugar.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios de los Estados Contratantes han firmado y sellado el presente Convenio.

Hecho en la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y tres, por duplicado, en lengua española y lengua portuguesa, siendo igualmente fehacientes ambos textos.

Anexo 5: Convenio Uruguay**Suplemento -- Registro Oficial N° 619 -- Lunes 16 de enero del 2012 --****Quito, D. M., 15 de diciembre del 2011****DICTAMEN N.º 016-11-DTI-CC****CASO N.º 0022-11-TI****CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN**

Juez constitucional ponente: Dr. Patricio Herrera Betancourt

I. ANTECEDENTES

Mediante oficio N.º T.5970-SNJ-11-801 recibido en la Corte Constitucional, el 08 de junio del 2011, el secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, doctor Alexis Mera Giler, refiere:

“...Como es de conocimiento público, en mérito de los Decretos Ejecutivos Nos. 11, 526 y 1246, cuyas respectivas copias me autorizan a comparecer en representación del Presidente Constitucional de la República, acompaño para el trámite correspondiente copias certificadas del Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, suscrito entre las Repúblicas de Ecuador y Oriental del Uruguay, en Montevideo el 26 de mayo de 2011.

Según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 419 de la Constitución de la República, la ratificación de los tratados internacionales, requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional, cuando contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.

En consecuencia, de conformidad con el numeral 1 del artículo 438 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional debe emitir dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de los tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional, solicito se expida el correspondiente dictamen...”.

El 10 de junio del 2011, la Secretaría General de la Corte Constitucional certifica que: "... en referencia a la acción N° 0022-11-TI... no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción...".

El 16 de junio del 2011, el Pleno de la Corte Constitucional efectuó el sorteo de rigor, correspondiéndole el caso N.º 0021-11-TI al juez constitucional, doctor Patricio Herrera Betancourt. Mediante memorando N.º 432-CC-SG del 17 de junio del 2011, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al doctor Patricio Herrera Betancourt el caso N.º 0022-11-TI, a fin de que lo tramite como juez ponente (recibido el 20 de junio del 2011).

II. TRAMITACIÓN

Mediante providencia del 23 de junio del 2011 a las 15h00, el juez ponente, doctor Patricio Herrera Betancourt, avocó conocimiento del caso N.º 0022-11-TI, disponiendo tener por legitimada la comparecencia del secretario jurídico de la Presidencia de la República, a quien se le notificó en la casilla constitucional N.º 001 el mismo día a las 15h40.

Mediante oficio N.º 160/11/CC/J/PHB del 24 de junio del 2011, dirigido a la Secretaría General de la Corte Constitucional, el doctor Patricio Herrera Betancourt remitió el informe sobre la necesidad de aprobación legislativa del instrumento internacional, de conformidad con el artículo 107 numeral 1 y artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 71 numeral 1 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, señalando lo siguiente:

"...De la revisión del contenido del "Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal.", se desprende que su artículo 2, numeral 4, establece lo siguiente: "Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales, dentro de los noventa días contados a partir de su publicación."

Igualmente, los párrafos de este Convenio regulan asuntos concernientes a: “establecimiento permanente”; “imposición de las rentas”; “beneficios empresariales”; “empresas asociadas”, “dividendos”; “intereses”; “regalías”; “ganancias de capital”; “renta del trabajo dependiente”; entre otros, lo cual podría significar para el Estado ecuatoriano una modificación de su legislación interna, específicamente en la normativa tributaria, de manera que guarde armonía con el presente acuerdo internacional.

Por este motivo, considero que el presente tratado internacional guarda concordancia con los casos que requieren aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional en la especie contenido en el artículo 419.3 de la Constitución de la República, que determina: “La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:... 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. [...]”, toda vez que abarca una temática en donde se ve inmerso el compromiso del Estado ecuatoriano en adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para viabilizar el cumplimiento de este Protocolo; por lo que claramente el presente instrumento internacional se encasilla dentro de los casos establecidos en la Constitución de la República y que requieren aprobación por parte del legislador.

De lo expuesto, en mi calidad de Juez ponente, emito mi criterio en el sentido de que el presente instrumento internacional se encasilla dentro de los casos que requieren aprobación legislativa previa, contemplados en el artículo 419.3 de la Constitución de la República...”.

En providencia del 27 de junio del 2011 a las 10h00, la Secretaría General de la Corte Constitucional hizo conocer la recepción del proceso N.º 0022-11-TI al secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, mediante notificación del mismo día a las 14h55, previo al conocimiento y resolución por el Pleno del Organismo.

Mediante providencia del 18 de agosto del 2011 a las 17h00, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó el informe sobre la necesidad de aprobación legislativa presentado por el juez ponente, doctor Patricio Herrera Betancourt, y conforme el artículo 111 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 71 numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, dispuso la publicación del instrumento internacional en el Registro Oficial y portal electrónico institucional para que en el término

de 10 días a partir de tal publicación, la ciudadanía defienda o impugne su constitucionalidad.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, en cumplimiento de esta providencia, emitió el oficio N.º 3142-CC-SG-2011 del 08 de septiembre del 2011, notificando la providencia al secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, y el oficio N.º 2975-SG- CC-2011 del 20 de septiembre del 2011, remitiendo el texto del instrumento internacional al Registro Oficial para su publicación.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para la continuación de la tramitación, dirigió al juez ponente, doctor Patricio Herrera Betancourt, el oficio N.º 3438-SG- CC del 23 de septiembre del 2011, remitiendo el caso N.º 0022-11-TI (recibido el 26 de septiembre del 2011 a las 16h20).

El instrumento internacional se publicó en el Suplemento del Registro Oficial N.º 552 del 10 de octubre del 2011.

Mediante oficio N.º 3720-CC-SG-2011 del 13 de octubre del 2011, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al juez ponente, doctor Patricio Herrera Betancourt, copia de la indicada publicación (recibida el 14 de octubre del 2011 a las 09h20).

Mediante providencia del 25 de octubre del 2011 a las 14h30, el juez sustanciador, doctor Patricio Herrera Betancourt, dispuso incorporar al expediente la publicación del convenio el 10 de octubre del 2011; declarar que una vez transcurrido el término de 10 días contados a partir de la publicación, esto es, hasta el 24 de octubre del 2011, no se ha presentado escrito defendiendo u oponiéndose a la constitucionalidad del convenio; y requerir a la directora de instrumentos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y director general del Servicio de Rentas Internas, que certifiquen en el término de 5 días desde la notificación a las casillas constitucionales números 273 y 052 respectivamente, o desde la recepción del oficio.

correspondiente, los nombres y calidades de los suscribientes del convenio en particular por la República del Ecuador, y finalmente se convalidó la actuación del secretario jurídico de

la Presidencia de la República, determinando que se tenga en cuenta su oficio inicial suscrito, mas no otro no suscrito por dicho funcionario.

Mediante notificaciones a las casillas constitucionales números 273 y 052 del 25 de octubre de 2011 a las 15h57 y remisión de los oficios números 276/11/CC7J/PH y 277/11/CC/J7PH del 25 de octubre del 2011, recibidos el 26 de octubre del 2011 en el Ministerio de Relaciones Exteriores a las 12h30 y en el Servicio de Rentas Internas a las 12h09, se comunicó lo antedicho.

Con oficio N.º MRECI-DII-2011-0205-O del 28 de octubre del 2011, la Directora de instrumentos internacionales (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió al director del Servicio de Rentas Internas “...una copia certificada de los Plenos Poderes a favor del economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, Director del Servicio de Rentas Internas, suscrito el 17 de Mayo de 2011, por el señor Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional del Ecuador...”.

Mediante oficio N.º 00546 del 31 de octubre del 2011, el director del Servicio de Rentas Internas, economista Carlos Marx Carrasco, señala “...Certifico documentadamente que el día 26 de mayo de 2011, en la ciudad de Montevideo comparecí e intervine, autorizado por el Señor Presidente Constitucional de la República, Eco. Rafael Correa Delgado, mediante Carta de Plenos Poderes de fecha 17 de mayo de 2011, a la suscripción del Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador para evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y prevenir la Evasión Fiscal...”.

La Corte Constitucional debe emitir el dictamen vinculante de control automático de constitucionalidad del instrumento internacional, previo a su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, previsto en el artículo 438 numeral 1 de la Constitución, dentro del término de 30 días establecido en el artículo 111 numeral 2 literal c de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (contado desde el vencimiento del término anterior); en concordancia con el artículo 71 numeral 2 y artículo 72 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que confieren respectivamente un término de 15 días al juez ponente para la presentación del proyecto de dictamen y un término de 15 días al Pleno de la Corte Constitucional, contado desde la

notificación de la recepción del proceso por parte de la Secretaría General para la emisión del dictamen.

III. TEXTO DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL

“CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL

La República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador

Deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal

Han acordado lo siguiente:

CAPÍTULO 1 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 1 ÁMBITO SUBJETIVO

El presente Convenio se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.

Artículo 2 IMPUESTOS COMPRENDIDOS

1. El presente Convenio se aplicará a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio establecidos en nombre de un Estado contratante, de una de sus subdivisiones políticas o de sus administraciones locales, con independencia de la forma de recaudación.
2. Se considerarán como Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio todos los que graven la totalidad de las rentas o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias procedentes de la enajenación de bienes

muebles e inmuebles, así como los impuestos sobre los importes totales de los sueldos o salarios pagados por las empresas.

3. Los impuestos actuales a los que se aplicará este Convenio son, en particular:

a) En la República del Ecuador:

(i) El impuesto a la renta de personas naturales; y, (ii) El impuesto a la renta de las sociedades y cualquier otra entidad similar; (en adelante denominados el "impuesto ecuatoriano");

b) en la República Oriental del Uruguay:

(i) El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE); (ii) El Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF); (iii) El Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR); (iv) El Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS); y (v) El Impuesto al Patrimonio (IP); (en adelante denominados el "impuesto uruguayo").

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales, dentro de los noventa días contados a partir de su publicación.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 3

DEFINICIONES GENERALES

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, se entenderá que:

- a) el término "Ecuador" designa a la República del Ecuador. Usado en un sentido geográfico, comprende el territorio en el que se aplican las leyes impositivas, incluyendo el mar territorial, plataforma submarina, las islas adyacentes, subsuelo, el espacio suprayacente, continental, insular y marítimo y demás territorios sobre los cuales el Estado ecuatoriano pueda, de conformidad con su legislación y el derecho internacional, ejercer soberanía, derechos soberanos o jurisdicción;
- b) el término "Uruguay" significa la República Oriental del Uruguay, usado en un sentido geográfico comprende el territorio en el que se aplican las leyes impositivas, incluyendo el espacio aéreo, las áreas marítimas, bajo jurisdicción uruguaya o en las que se ejerzan o puedan ejercer en el futuro derechos de soberanía, de acuerdo con el Derecho Internacional y la legislación nacional;
- c) las expresiones "un Estado contratante" y "el otro Estado contratante" significan según lo requiera el contexto, Ecuador o Uruguay;
- d) el término "persona" comprende las personas naturales o físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
- e) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que de conformidad con la legislación interna de los estados contratantes se considere persona jurídica a efectos impositivos;
- f) el término "empresa" se aplica al ejercicio de toda actividad o negocio;
- g) Las expresiones "empresa de un Estado contratante" y "empresa del otro Estado contratante" significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante;
- h) la expresión "tráfico internacional" significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa de un Estado contratante, salvo cuando el transporte se realice exclusivamente entre dos puntos situados en el otro Estado contratante;
- i) la expresión "autoridad competente" significa:

i) en el caso de Ecuador, el Director General del Servicio de Rentas Internas; ii) en el caso de Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, o la autoridad que lo represente; j) El término "nacional" significa:

i) Cualquier persona natural o física que posea la nacionalidad o ciudadanía de un Estado contratante; y, ii) Cualquier persona jurídica o asociación constituida conforme a la legislación vigente de un Estado contratante.

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado contratante en un momento determinado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por esa legislación impositiva sobre el que resultaría de otras leyes de ese Estado.

Artículo 4

RESIDENTE

1. A los efectos de este Convenio, la expresión "residente de un Estado contratante" significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye también al propio Estado y a cualquier subdivisión política o administración local. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo.
2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona natural o física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:
 - a) dicha persona será considerada residente solo del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en

ambos Estados, se considerará residente solo del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solo del Estado donde viva habitualmente;

c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solo del Estado del que sea nacional;

d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso mediante un procedimiento de acuerdo mutuo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona que no sea una persona natural o física, sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente solo del Estado de la que sea nacional. Si fuere nacional de ambos Estados contratantes, los Estados contratantes harán lo posible, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, por resolver el caso. En ausencia de acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de los Estados contratantes, dicha persona no tendrá derecho a exigir ninguno de los beneficios o exenciones impositivas contempladas por este Convenio.

Artículo 5

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1. A efectos del presente Convenio, la expresión "establecimiento permanente" significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa de un Estado contratante realiza toda o parte de su actividad en el otro Estado contratante.
2. La expresión "establecimiento permanente" comprende, en especial:

a) Las sedes de dirección; b) Las sucursales; c) Las oficinas; d) Las fábricas; e) Los talleres; y, f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de explotación o extracción de recursos naturales.

3. La expresión "establecimiento permanente" comprende asimismo:

a) Una obra o un proyecto de construcción o instalación o montaje o las actividades de inspección o supervisión relacionadas, si su duración excede de seis meses;

b) La prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, por una empresa por intermedio de sus empleados u otro personal contratado por la empresa para dicho propósito, pero solo en el caso de que las actividades de esa naturaleza prosigan en un Estado contratante durante un periodo o periodos que en total excedan de seis meses, dentro de un periodo cualquiera de doce meses.

4. No obstante las disposiciones anteriores de este Artículo, se considera que la expresión "establecimiento permanente" no comprende:

a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;

b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas o exhibirlas;

c) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean procesadas por otra empresa;

d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;

e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a d), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

5. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2, cuando una persona -distinta de un agente independiente al que le será aplicable el apartado 6-, actúe en un Estado contratante en nombre de una empresa del otro Estado contratante, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en el primer Estado contratante respecto a las actividades que esa persona realice para la empresa, si esa persona:
- a) Tiene y habitualmente ejerce en ese Estado poderes para concertar contratos en nombre de la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado;
 - b) No tiene esos poderes, pero mantiene habitualmente en el Estado existencias de bienes o mercaderías que utiliza para entregar regularmente bienes o mercaderías por cuenta de la empresa.
6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, comisionista general, agente, o cualquier otro mediador que goce de un estatuto independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad y asuman directamente –por su cuenta y riesgo- las transacciones de bienes o servicios necesarias para la ejecución de dicha actividad.
7. No obstante las disposiciones anteriores del presente artículo, se considerará que una empresa aseguradora de un Estado contratante tiene, salvo por lo que respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado si recauda primas en el territorio de ese Estado o si asegura contra riesgos situados en él por medio de una persona que no sea un representante independiente al que se aplique el apartado 6.
8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante o que realice actividades empresariales en ese otro Estado ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera, no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

CAPÍTULO III

IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS

Artículo 6

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

1. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Para los efectos del presente Convenio, la expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas, mineras, petroleras y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones del derecho de cada Estado contratante relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques y aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales independientes.

Artículo 7

BENEFICIOS EMPRESARIALES

1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente podrán someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. En tal caso, dichos beneficios podrán ser gravados en el otro Estado, pero solamente en la parte atribuible a:
a) ese establecimiento permanente; o b) las ventas en ese otro Estado de bienes o mercancías de tipo idéntico o similar al de las ventas por medio de ese establecimiento permanente, o c) otras actividades comerciales de naturaleza idéntica o similar a la de las efectuadas por medio del citado establecimiento permanente.
2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta y separada que realizase actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones, y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para determinar el beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte.
4. No se atribuirán utilidades a un establecimiento permanente por la simple compra de bienes o mercancías para la empresa.
5. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año utilizando el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.

6. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del presente Artículo.

Artículo 8

TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. Para los fines de este Artículo:
 - a) El término "beneficios" comprende los ingresos brutos que se deriven directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.
 - b) La expresión "explotación de buque o aeronave" por una empresa, comprende también:
 - i) El fletamento o arrendamiento de nave o aeronave a casco desnudo;
 - ii) El arrendamiento de contenedores y equipo relacionado. Siempre que dicho flete o arrendamiento sea accesorio a la explotación, por esa empresa, de buques o aeronaves en tráfico internacional.

No obstante las disposiciones del apartado 1 y del artículo 7, los beneficios provenientes de la explotación de buques o aeronaves, utilizados principalmente para transportar pasajeros o bienes exclusivamente entre lugares ubicados en un Estado contratante podrán ser sometidos a imposición en este Estado.

3. Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a las utilidades procedentes de la participación en un consorcio -pool-, en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional.

Artículo 9

EMPRESAS ASOCIADAS

1. Siempre que

a) Una empresa de un Estado contratante, participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o

b) Las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante, y, en cualquiera de los casos, las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado - y, en consecuencia, grave- los de una empresa del otro Estado que ya han sido gravados por este segundo Estado, y estos beneficios así incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas independientes, ese otro Estado, si está de acuerdo, practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.

3. Las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán en los casos en que una o más transacciones que den lugar a un ajuste de beneficios de conformidad con el apartado 1, sean consideradas como fraudulentas de acuerdo a una decisión administrativa o judicial.

Artículo 10

DIVIDENDOS

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este Estado; pero, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
 - a) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directamente al menos el 25 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga dichos dividendos;
 - b) 15 por ciento del importe bruto- de los dividendos en todos los demás casos. Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.
3. El término "dividendos", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de las acciones o bonos de disfrute, de las participaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este Artículo no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho

establecimiento permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situados en ese otro Estado, ni tampoco someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.

Artículo 11

INTERESES

1. Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15 por ciento del importe bruto de los intereses.
3. El término "intereses", en el sentido de este Artículo, significa las rentas de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en las utilidades del deudor, y en particular, las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones incluidas las primas y premios unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente Artículo.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento

permanente situado allí, o presta unos servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y si el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.

5. Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos últimos son soportados por el establecimiento permanente o la base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado contratante en que estén situados el establecimiento permanente o la base fija.
6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
7. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito o uno de los principales propósitos de cualquier persona vinculada con la creación o atribución del crédito en relación al cual los intereses se pagan, fuera el sacar ventajas de este Artículo mediante tal creación o atribución.

Artículo 12

REGALÍAS

1. Las regalías procedentes de un Estado contratante y cuyo beneficiario efectivo es un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalías pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
 - a) 10 por ciento del importe bruto de las regalías por el uso o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos;
 - b) 15 por ciento del importe bruto de las regalías en todos los demás casos.
3. El término "regalías", en el sentido de este Artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y sonido, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad intangible, incluido los derechos relacionados con la obtención de variedades vegetales, o por el uso o el derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este Artículo, no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado contratante, realiza en el Estado contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según proceda.
5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor es un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en uno de los Estados contratantes un establecimiento permanente o una base fija que soporte la carga de las mismas, estas en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de las regalías y dicho establecimiento permanente soporte la carga de las mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija.

6. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
7. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito principal o uno de los principales propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de derechos en relación a los cuales las regalías se paguen, fuera el de sacar ventajas de este Artículo mediante tal creación o atribución.

Artículo 13

GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, tal como se define en el artículo 6, situados en el otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en este último Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante para la prestación de servicios personales independientes, incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o, aeronaves, solo pueden someterse a imposición en el Estado contratante donde resida el enajenante.

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante en la enajenación de títulos u otros derechos representativos del capital de una sociedad situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 pueden someterse a imposición solo en el Estado contratante en el que el bien está situado.

Artículo 14

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

1. Las rentas que una persona natural o física residente de un Estado contratante obtenga por la prestación de servicios profesionales o el ejercicio de otras actividades de naturaleza independiente solo podrán someterse a imposición en este Estado, salvo las siguientes circunstancias, en que dichas rentas podrán también ser sometidas a imposición en el otro Estado contratante:
 - a) Cuando dicha persona tenga en el otro Estado contratante una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades; en tal caso, solo podrá someterse a imposición en este otro Estado contratante la parte de las rentas que sea atribuible a dicha base fija; o
 - b) Cuando dicha persona permanezca en el otro Estado contratante por un periodo o periodos que en total suman o excedan 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses; en tal caso, solo podrá someterse a imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en este otro Estado.
2. La expresión "servicios profesionales" comprende especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores.

Artículo 15

RENTA DEL TRABAJO DEPENDIENTE

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo dependiente solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro Estado contratante. Si el trabajo dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en él.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo dependiente realizado en el otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:
 - a) El perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y
 - b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de un empleador que no sea residente del otro Estado, y
 - c) Las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente o una base fija que el empleador tenga en el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas de un trabajo dependiente realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en tráfico internacional solo podrá someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 16

REMUNERACIONES O PARTICIPACIONES DE CONSEJEROS O DIRECTORES

Las participaciones, dietas de asistencia, remuneraciones en calidad de consejero o director y otras retribuciones similares que un residente de un Estado contratante obtenga como miembro de un órgano de administración, directorio, consejo de administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 17

ARTISTAS Y DEPORTISTAS

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio, televisión o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Las rentas a que se refiere el presente párrafo incluyen las rentas que dicho residente obtenga de cualquier actividad personal ejercida en el otro Estado contratante relacionada con su renombre como artista del espectáculo o deportista.
2. No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado contratante donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista.
3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas obtenidas por un artista o deportista no estarán gravadas en el Estado contratante en el cual se realizan dichas actividades cuando están financiadas al menos en un cincuenta por ciento con fondos públicos de uno o de ambos Estados y se realicen al amparo de un acuerdo de colaboración cultural entre los Estados contratantes.

Artículo 18

PENSIONES

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del Artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado contratante por un trabajo dependiente anterior solo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 19

FUNCIONES PÚBLICAS

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o administraciones locales a una persona natural o física en razón de los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o administración local, solo pueden someterse a imposición en ese Estado.

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones solo pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona natural o física es un residente de ese Estado que:

(i) Es nacional de ese Estado, o

(ii) No ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.

2. a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o administraciones locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o administración, solo pueden someterse a imposición en ese Estado. b) Sin embargo, dichas pensiones y otras remuneraciones similares solo pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si la persona física es residente y nacional de ese Estado.

3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, pagadas en razón de los servicios prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o administraciones locales.

Artículo 20

ESTUDIANTES

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación: un estudiante, un aprendiz o una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

Artículo 21

OTRAS RENTAS

Las rentas de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio y que provengan del otro Estado contratante, solo podrán someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

CAPÍTULO IV

IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

Artículo 22

PATRIMONIO

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, en el sentido del Artículo 6, que posea un residente de un Estado contratante y esté situado en el otro Estado contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado.

2. El patrimonio constituido por bienes muebles, que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, o por bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado contratante disponga en el otro Estado contratante para la prestación de servicios personales independientes, puede someterse a imposición en ese otro Estado.
3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o por embarcaciones utilizadas en la navegación por aguas interiores, por una empresa de un Estado contratante, así como por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, solo puede someterse a imposición en este Estado.
4. Todos los demás elementos del patrimonio que posea un residente de un Estado contratante solo pueden someterse a imposición en el Estado, contratante en el que estén situados los bienes que lo componen.

CAPÍTULO V

MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Artículo 23

ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante, el Estado mencionado en primer lugar admitirá:
 - a) La deducción en el impuesto sobre las renta de ese residente de un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en ese otro Estado;
 - b) La deducción en el impuesto sobre el patrimonio de ese residente de un importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en ese otro Estado.

En uno y otro caso, dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción, correspondiente, según el caso, a las rentas o el patrimonio que pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante o el patrimonio que posea estén exentos de imposición en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de dicho residente.
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá que el impuesto pagado en un Estado contratante es el que se habría pagado de acuerdo con el Convenio, de no haberse reducido o exonerado en aplicación de las siguientes normas encaminadas a promover el desarrollo económico:

a) En el caso de Ecuador:

i) Artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario interno, respecto a la exoneración del Impuesto a la Renta para las inversiones nuevas y productivas; ii) Artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, respecto a la reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta en el caso de reinversión de utilidades;

b) En el caso de Uruguay:

i) artículo 53 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 (exoneración por inversiones), respecto de la deducción de la renta neta en la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas; ii) Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998 (régimen de Promoción y Protección de las Inversiones), respecto a la exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas para la inversión efectiva.

Para reconocer el crédito fiscal por las referidas reducciones o exoneraciones, la autoridad competente de cada Estado contratante certificará el monto y la naturaleza de dicho crédito.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 24

NO DISCRIMINACIÓN

1. Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones del Artículo 1, la presente disposición es también aplicable a los nacionales que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados contratantes.
2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.
3. Nada de lo establecido en el presente Artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
4. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del Artículo 9 o de los apartados 6 de los Artículos 11 ó 12, los intereses, las regalías o demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante serán deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del otro Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio imponible de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar.

5. Las sociedades de un Estado contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras sociedades similares del Estado mencionado en primer lugar.
6. No obstante las disposiciones del Artículo 2, las disposiciones del presente Artículo son aplicables a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación.

Artículo 25 LIMITACIÓN DE BENEFICIOS

1. Salvo que en el presente convenio se disponga lo contrario, una persona (distinta de una persona natural o física), que sea residente de un Estado contratante y que obtenga ingreso del otro Estado contratante tendrá derecho a todos los beneficios de este Convenio acordados para los residentes de un Estado contratante, únicamente si dicha persona satisface los requisitos señalados en el apartado 2 y cumple con las demás condiciones de este Convenio para la obtención de cualquiera de dichos beneficios.
2. Una persona de un Estado contratante es una persona que cumple con los requisitos para un ejercicio fiscal únicamente si dicha persona es:
 - (a) Una entidad gubernamental; o
 - (b) Una sociedad constituida en cualquiera de los Estados contratantes, si:
 - (i) la principal clase de sus acciones - cotiza en una bolsa de valores reconocida tal como se define en el apartado 6 de este Artículo y son negociadas ordinariamente en una o más bolsas de valores reconocidas; o
 - (ii) al menos el 50% de los derechos de voto o del valor de las acciones de la sociedad sea propiedad directa o indirectamente de una o más personas físicas residentes en cualquiera de los Estados contratantes o de otras sociedades constituidas en cualquiera de los Estados contratantes, en las que al menos el 50% de los derechos de voto o del valor de las acciones o de la participación en los

beneficios sean propiedad directa o indirectamente de una o más personas físicas residentes en cualquiera de los Estados contratantes; o

- (c) Una institución de beneficencia u otra entidad sin fines de lucro que se encuentre exenta para efectos fiscales, cuyas principales actividades sean realizadas en cualquiera de los Estados contratantes.

Las personas mencionadas anteriormente no tendrán derecho a los beneficios del Convenio, si más del 50% del ingreso bruto de las personas en el ejercicio fiscal es pagable, directa o indirectamente, a personas que no sean residentes de ninguno de los Estados contratantes mediante pagos que sean deducibles para efectos de determinar el impuesto comprendido en este Convenio en el Estado de residencia de la persona.

3. Sin embargo, un residente de un Estado contratante tendrá derecho a los beneficios del Convenio si la autoridad competente del otro Estado contratante determina que dicho residente lleva a cabo activamente actividades empresariales en el otro Estado y que el establecimiento o adquisición o mantenimiento de dicha persona y la realización de dichas operaciones no ha tenido como uno de sus principales fines la obtención de los beneficios del Convenio.
4. Antes de que a un residente de un Estado contratante se le niegue la desgravación fiscal en el otro Estado contratante debido a lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán mutuamente. Asimismo, las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán consultarse mutuamente con respecto a la aplicación de este artículo.
5. A efectos de este Artículo, la expresión "bolsa de valores reconocida" significa:
 - a) En Ecuador, la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil; b) En Uruguay, la Bolsa de Valores de Montevideo y la Bolsa Electrónica de Valores S.A.; y,
 - c) Cualquier otra bolsa de valores que las autoridades competentes acuerden reconocer a efectos de este artículo.

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio podrá, con independencia de los recursos previstos por la legislación interna de esos Estados, someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del Artículo 24, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del presente Convenio.
2. La autoridad competente si la reclamación le parece justificada y si no puede por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver el caso por medio de un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable independientemente de los plazos establecidos en la legislación interna de los Estados contratantes.
3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por resolver, por medio de un acuerdo amistoso, cualquier dificultad o duda que plantee la interpretación o aplicación del presente Convenio. También podrán ponerse de acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el presente Convenio.
4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores, las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse entre sí directamente, incluso en el seno de una comisión mixta integrada por ellas mismas o sus representantes.

Artículo 27

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o para

administrar y exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los Estados contratantes relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados contratantes, sus subdivisiones o administraciones locales en la medida en que la imposición prevista en el mismo no sea contraria al presente Convenio. El intercambio de información no estará limitado por los Artículos 1 y 2 del presente Convenio.

2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 será mantenida secreta o reservada de la misma forma que la información obtenida en virtud de la legislación interna de ese Estado y solo se revelará a las personas o autoridades encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos a los que hace referencia el apartado 1 (incluidos los tribunales y órganos administrativos), de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en relación con los mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas o autoridades solo utilizarán esta información para estos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias o fallos judiciales.
3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a:
 - a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estado contratante;
 - b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado contratante;
 - c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales, industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.
4. Si un Estado contratante solicita información conforme al presente Artículo, el otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está

limitada por lo dispuesto en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea interpretado para impedir a un Estado contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de interés doméstico en la misma.

5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado contratante negarse a proporcionar información únicamente porque esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la participación en la titularidad de una persona.

Artículo 28

ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

1. Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de sus créditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los Artículos 1 y 2. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este Artículo.
2. La expresión "crédito tributario" en el sentido de este Artículo significa todo importe debido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus administraciones locales, en la medida en que esta imposición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro instrumento del que los Estados contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente los intereses, sanciones administrativas y costes de recaudación o de establecimiento de medidas cautelares relacionados con dicho importe.
3. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea exigible en virtud del Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de ese Estado no pueda impedir en ese momento su recaudación, las autoridades, competentes del otro Estado contratante, a petición de las autoridades competentes del primer Estado, aceptarán dicho crédito tributario para los fines de su recaudación por ese otro Estado. Dicho otro Estado recaudará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su

legislación relativa a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos como si se tratara de un crédito tributario propio.

4. Cuando un crédito tributario de un Estado contratante sea de naturaleza tal que ese Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que aseguren su recaudación, las autoridades competentes del otro Estado contratante, a petición de las autoridades competentes del primer Estado, aceptarán dicho crédito tributario para los fines de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributario propio, aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el crédito tributario no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona con derecho a impedir su recaudación.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de dichos apartados, no estará sujeto en ese Estado a la prescripción o prelación aplicables a los créditos tributarios conforme a su Derecho interno por razón de su naturaleza de crédito tributario. Asimismo, un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de los apartados 3 ó 4 no disfrutará en ese Estado de las prelación aplicables a los créditos tributarios en virtud del Derecho del otro Estado contratante.
6. Ningún procedimiento relativo a la existencia, validez o cuantía del crédito tributario de un Estado contratante podrá incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del otro Estado contratante.
7. Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por un Estado contratante en virtud de los apartados 3 ó 4, y previo a su recaudación y remisión por el otro Estado contratante, el crédito tributario dejara de ser:
 - (a) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un crédito exigible conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar y cuyo deudor fuera una persona que en ese momento y según el Derecho de ese Estado no pudiera impedir su recaudación, o

(b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un crédito con respecto al cual, conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar, pudieran adoptarse medidas cautelares para asegurar su recaudación, las autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar notificarán sin dilación a las autoridades competentes del otro Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar suspenderá o retirará su solicitud.

8. En ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán en el sentido de obligar a un Estado contratante a:

(a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado contratante;

(b) adoptar medidas contrarias al orden público;

(c) suministrar asistencia cuando el otro Estado contratante no haya aplicado, razonablemente, todas las medidas cautelares o para la recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme a su legislación o práctica administrativa;

(d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese Estado esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio que vaya a obtener el otro Estado contratante.

Artículo 29

MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS CONSULARES

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

Artículo 30

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

1. La suscripción de este Convenio no limita de ninguna manera las facultades de determinación y control que en función de su legislación interna le corresponden a las autoridades competentes de cada uno de los Estados contratantes. Ningún residente de los Estados contratantes podrá alegar la existencia del presente Convenio para justificar el incumplimiento de obligaciones, y requisitos formales, previstos en la legislación interna de cada uno de los Estados contratantes.
2. Considerando que el objetivo principal de este Convenio es evitar la doble imposición internacional, los Estados contratantes acuerdan que, en el evento de que las disposiciones del presente Convenio sean usadas en forma tal que otorguen beneficios no contemplados ni pretendidos por él, las autoridades competentes de los Estados contratantes deberán, en conformidad al procedimiento de acuerdo mutuo del Artículo 26, recomendar modificaciones específicas al Convenio. Los Estados contratantes además acuerdan que cualquiera de dichas recomendaciones será considerada y discutida de manera expedita con miras a modificar el Convenio en la medida en que sea necesario.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31

ENTRADA EN VIGOR

1. Cada uno de los Estados contratantes notificará al otro, a través de canales diplomáticos, que se han cumplido los requerimientos legales y procedimientos internos exigidos en cada Estado contratante para la entrada en vigor del presente Convenio.
2. El Convenio entrará en vigor transcurrido un plazo de quince días corridos o calendario, a partir de la fecha de recepción de la última notificación a que refiere el apartado 1, y sus disposiciones surtirán efecto:

- a) respecto de los impuestos debidos en la fuente, a las cantidades pagadas o acreditadas a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario siguiente a aquel en que entre en vigor el presente Convenio;
 - b) respecto de los restantes impuestos, a los períodos impositivos que se inicien en o a partir del primer día de enero del año calendario siguiente a aquel en que entre en vigor el presente Convenio;
 - c) En los restantes casos, en la fecha en que el Convenio entre en vigor.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el Artículo 27 surtirá efecto respecto de otros asuntos, desde la fecha de entrada en vigor, pero solamente en relación con los períodos impositivos que se inicien en o a partir de esa fecha, o en los casos en que no haya períodos impositivos, desde o a partir de la citada fecha.

Artículo 32

DENUNCIA

1. El presente Convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá denunciar el Convenio por canal diplomático notificándolo con al menos seis meses de antelación a la terminación de cualquier año calendario.

En tal caso, el Convenio dejará de aplicarse:

- a) respecto de los impuestos debidos en la fuente, a las cantidades pagadas o acreditadas a partir del primer día de enero, inclusive, del año calendario siguiente a aquel en que se comunique la terminación;
- b) respecto de los restantes impuestos, a los períodos impositivos que se inicien en o a partir del primer día de enero del año calendario siguiente a aquel en que se haga la comunicación;

c) la posibilidad de los Estados de solicitar información, en virtud del presente convenio, se mantendrá hasta el último día del cierre del ejercicio fiscal siguiente al ejercicio fiscal en curso en el que se produce la denuncia de este instrumento, y en ningún caso, se referirá a información correspondiente a ejercicios fiscales posteriores a aquel en el que se produjo la denuncia. En el caso de información relativa a impuestos debidos en la fuente o de periodos de liquidación normal inferiores a doce meses, la misma no podrá referirse a hechos acaecidos con posterioridad al 31 de diciembre siguiente a la fecha en que se produce la denuncia;

d) la posibilidad de los Estados de solicitar asistencia en virtud del artículo 28 del presente Convenio, se mantendrá hasta el 31 de diciembre del año en que cualquiera de las partes denuncia este instrumento. Las solicitudes de asistencia en la recaudación que se hubieren efectuado durante la vigencia del convenio, deberán ser tramitadas conforme al procedimiento establecido para estos casos, hasta la culminación del proceso con la atención de dicha solicitud.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Montevideo, el veintiséis de mayo de dos mil once, en dos originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República de Ecuador

f.) Ilegible.

Por la República Oriental del Uruguay

f.) Ilegible.

PROTOCOLO

Al momento de la firma del Convenio entre la República de Ecuador y la República Oriental del Uruguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, los suscritos han acordado que las siguientes disposiciones formarán parte integral del Convenio:

1. Respecto del apartado 3 del Artículo 7 y del apartado 4 del Artículo 24 del Convenio, se entenderá que refiere a aquellos gastos y deudas que son reconocidos como deducibles por la legislación interna de cada Estado contratante. Cada Estado contratante reconocerá los respectivos gastos y deudas, siempre y cuando se cumpla con los requisitos formales establecidos en la legislación interna de los mismos.
2. Respecto del Artículo 9 del Convenio, se entenderán incluidos las siguientes circunstancias de relación entre una empresa de un Estado contratante respecto de una empresa del otro Estado contratante: a) decisiones tomadas por órganos directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros en una empresa de un Estado Contratante y una empresa del otro Estado Contratante, (b) un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, participa indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de una empresa de una Estado contratante y una empresa del otro Estado Contratante.
3. Respecto del Artículo 27 del Convenio, los Estados contratantes observaran lo siguiente:
 - a) el Estado requirente se asegurará de que la información que solicite sea de su interés, razonable y necesaria para la determinación del impuesto o de un ilícito tributario;
 - b) se entiende que un intercambio de información será realizado una vez que el Estado requirente haya agotado todos los recursos regulares de información disponibles bajo los procedimientos tributarios internos;
 - c) la autoridad competente de un Estado contratante proporcionará información previo requerimiento, entendiéndose que sus disposiciones no impedirán a los Estados contratantes intercambiar información de manera automática o espontánea;
 - d) se entiende que para dar trámite a una solicitud de información, la autoridad competente del Estado requirente deberá proveer la siguiente información a la autoridad competente del Estado requerido:

(i) la identidad de la o las personas bajo examen o investigación y, si estuviera disponible, otros datos que faciliten su identificación, tales como la fecha de nacimiento, el estado civil, el número de identificación fiscal, el domicilio; (ii) el período de tiempo por el cual se solicita la información; (iii) un detalle de la información solicitada, incluyendo su naturaleza y la forma en la cual el Estado requirente desea recibir la información por parte del Estado requerido; (iv) los propósitos tributarios por los cuales la información es solicitada; (v) en la medida que se conozca, el nombre y domicilio de cualquier persona que se estime tenga en su poder la información requerida;

e) en casos de requerimientos de información específica por la autoridad competente de un Estado contratante, la autoridad competente del otro Estado contratante hará lo posible por proporcionar la información en la forma requerida, en la misma medida en pueda ser obtenida de conformidad con la legislación y prácticas administrativas de ese otro Estado contratante en relación a sus propios impuestos;

f) sus disposiciones se interpretarán en el sentido de que imponen a uno de los Estados contratantes la obligación de utilizar todos los medios legales y desplegar sus mejores esfuerzos para ejecutar una solicitud. El Estado requerido actuará con la máxima diligencia debiendo remitir su respuesta dentro del plazo de ciento ochenta días corridos o calendario contados desde la recepción de la solicitud, pudiendo las autoridades competentes de los Estados contratantes establecer plazos específicos para casos puntuales comunicados por el Estado requirente.

En caso de imposibilidad del cumplimiento del plazo para la respuesta o de dificultad para obtener las informaciones, la autoridad competente del Estado requerido deberá informarlo a la autoridad competente del Estado requirente, indicando la fecha presumible en que la respuesta podrá ser enviada y la naturaleza de los obstáculos para proporcionar las informaciones solicitadas;

g) para viabilizar de manera ágil y oportuna el intercambio de información, las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán - de mutuo acuerdo un procedimiento específico para tal efecto. Si las autoridades competentes de los Estados

contratantes, de común acuerdo aprueban que se siga un procedimiento propuesto por el Estado requirente, este será cumplido en los términos acordados;

h) la información obtenida tendrá la validez legal que las leyes del Estado requirente les otorgue una vez cumplidas las condiciones para ello, establecidas en las mismas y en el Convenio;

i) las solicitudes de información que se hubieren efectuado durante la vigencia del convenio, deberán ser tramitadas conforme al procedimiento establecido para estos casos, hasta la culminación del proceso con la atención de dicha solicitud.

4. Respecto del Artículo 28, la asistencia en recaudación de impuestos se aplicará a partir del momento que las autoridades competentes de los Estados contratantes lo acuerden, en el marco de un memorando de entendimiento.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Protocolo. Hecho en Montevideo, el veintiséis de mayo de dos mil once, en dos originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República de Ecuador

f.) Ilegible.

Por la República Oriental del Uruguay

f.) Ilegible.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN.-
Certifico que es fiel copia del documento original que se encuentra en los archivos de la Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Quito, a 3 de junio del 2011.

f.) Anacélida Burbano Játiva, Directora de Instrumentos Internacionales.”

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, para el periodo de transición, es competente para ejercer el control automático de constitucionalidad de los instrumentos internacionales y emitir el dictamen vinculante previo a su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N.º 52 del 22 de octubre del 2009 y del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 127 del 10 de febrero del 2010.

El procedimiento de incorporación de los instrumentos internacionales y los principios del Derecho Internacional de los tratados que orientan su implementación.

El Derecho Internacional considera que cuando el Estado asume una obligación jurídica derivada de un instrumento internacional, lo realiza en ejercicio de su soberanía, es decir, ejerciendo su potestad estatal conforme los procedimientos establecidos en la Constitución.

Las relaciones internacionales involucran al Estado con la órbita supranacional en materias de distinta complejidad, razón por la cual se establecen procedimientos constitucionales para su incorporación al ordenamiento jurídico interno que van de una menor intensidad (simple) a uno de mayor solemnidad (complejo).

El procedimiento simple atañe la ratificación de la suscripción (sin aprobación legislativa) y el procedimiento complejo implica la suscripción, aprobación y ratificación (con aprobación parlamentaria).

Constitucionalmente, la materia del instrumento internacional incluida en la necesidad de aprobación legislativa (artículo 419) marca la distinción entre el procedimiento simple y el complejo.

La Constitución de la República del Ecuador establece la necesidad de aprobación por parte de la Asamblea Nacional de aquellos instrumentos internacionales, cuyas materias se encuadren en los 8 numerales del artículo 419¹, mismos que pueden sistematizarse así:

1 Constitución de la República del Ecuador publicada en el RO 449 de 20 de octubre de 2008

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

1. Se refieran a materia territorial o de límites.
2. Establezcan alianzas políticas o militares.
3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.
4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.
5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.
6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.
7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional.

El numeral 1 respecto de la materia territorial y límites, así como el numeral 2 sobre alianzas políticas y militares, atañen la prohibición de atentados a la soberanía estatal y

la prohibición del uso ilegítimo de la fuerza en búsqueda de la paz, la proscripción de las invasiones y ocupaciones y el rechazo a la injerencia política e intervención militar.

El numeral 3 sobre del compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, y el numeral 6 respecto de los acuerdos de integración y de comercio, connotan la convivencia pacífica internacional para la armonización legislativa, cooperación e integración económica.

El numeral 5 respecto del no comprometimiento de la política económica estatal establecida en el Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales, y el numeral 7 sobre la atribución de competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional, implican la prohibición de neocolonialismo que rechaza las imposiciones jurídicas y sometimientos financieros.

El numeral 4 sobre los derechos y garantías, y el numeral 8 sobre el patrimonio natural en especial el agua, biodiversidad y patrimonio genético, involucran la protección de los derechos humanos para proteger al ser humano ante violaciones de sus derechos y crímenes de lesa humanidad y la protección de los derechos fundamentales abarcando como titular de derechos a la naturaleza a la que hay que preservar.

Luego de que el Estado ha incorporado a su ordenamiento jurídico interno el instrumento internacional a través de un procedimiento constitucional simple o complejo según la materia, cuenta con efecto vinculante y se ciñe a los principios fundamentales del Derecho Internacional de los Tratados para su implementación.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados aplicable entre Estados consagra como principios fundamentales del Derecho Internacional de los Tratados, que los instrumentos internacionales que el Estado celebra por escrito (artículo 2 tratados) deben cumplirse de buena fe (artículo 26 *pacta sunt servanda*) no pudiéndose justificar su incumplimiento en disposiciones del derecho interno (artículo 27 no justificación del derecho interno para el incumplimiento del tratado) más aún cuando por su naturaleza se constituyen en norma internacional reconocida y aceptada (artículo 53 *ius cogens*)².

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.

2 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados publicada en el Registro Oficial No. 6 de 28 de abril de 2005

PARTE I. INTRODUCCIÓN

Artículo 2. Términos empleados.

1. Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;

Control automático y previo de constitucionalidad del Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal y su protocolo adjunto.

Para efectuar el control de constitucionalidad del presente instrumento internacional, en un primer punto se abordará la competencia para su suscripción a través de su control formal, luego se proseguirá con un examen de su contenido por medio de su control material, y se culminará con las conclusiones sobre la constitucionalidad del presente convenio y su protocolo adjunto.

Control formal

La Constitución de la República del Ecuador consagra que la Función Ejecutiva se encuentra integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones encargados de la rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas dentro del ámbito de su competencia (artículo 141); que el presidente de la república tiene la atribución de definir la política exterior y suscribir tratados y otros instrumentos internacionales (artículo 147 numeral 10); que a los ministros

de Estado les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (artículo 154 numeral 1); y que el Estado Central tiene la competencia exclusiva sobre la política económica- tributaria (artículo 261 numeral 5).

La Ley Orgánica del Servicio Exterior determina que la dirección de la gestión internacional le corresponde al

PARTE III. OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS SECCIÓN 1.

Observancia de los Tratados

Artículo 26. Pacta sunt servanda Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

PARTE V. NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

SECCIÓN 2. Nulidad de los tratados.

Artículo 53. Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens) Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

presidente de la república como jefe del Estado, con la colaboración directa del ministro de relaciones exteriores en su ejecución (artículo 2); que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene competencia especialmente para las relaciones del Ecuador con otros Estados y sobre los tratados y demás instrumentos internacionales (artículo 4 numerales 4 y 8); y que la Subsecretaría Política, a través del Departamento de Actos y Organismos Internacionales conoce de los asuntos relativos a los tratados, convenios, acuerdos, declaraciones y demás instrumentos internacionales del Ecuador y su participación en reuniones internacionales (artículo 12 numeral 3 y artículo 15).

El Código Orgánico Tributario dispone que la administración tributaria central le corresponde en el ámbito nacional al presidente de la república a través de los organismos que la ley establezca (artículo 64), para el ejercicio de la facultad determinadora, resolutive, sancionadora y recaudadora (artículo 67).

La Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas establece que el presidente de la república nombrará un director general para esta entidad, quien goza para el ejercicio del cargo de las mismas condiciones que un ministro de Estado (artículo 5), contando para el efecto con la atribución general de ejercer su representación legal, judicial y extrajudicial y con la competencia específica de celebrar convenios con entidades públicas para la ejecución de actos de determinación, recaudación y control tributario y otros servicios que se consideren necesarios (artículo 7 numerales 1 y 13).

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que el presidente de la república tendrá como atribución dirigir los aspectos sustanciales de la administración, entre ellos la economía y las relaciones exteriores del Estado ecuatoriano (artículo 11 literal ch); y que los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios, sin necesidad de autorización alguna del presidente de la república, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales (artículo 17 inciso primero).

De ello se colige que según la Constitución, el presidente de la república es la autoridad encargada de la definición de la política exterior y de las relaciones internacionales, que se operativizan a través del Ministro de Relaciones Exteriores en primera línea y demás ministros de Estado dentro del ámbito de su gestión (o funcionarios que ejerzan su cargo en

las mismas condiciones), los mismos que pueden suscribir los instrumentos jurídicos que se consideren necesarios, inclusive de orden internacional, siempre que la normativa legal específica los faculte para el efecto o el presidente de la república los haya autorizado expresamente.

En el presente caso, el instrumento internacional fue suscrito por el director general del Servicio de Rentas Internas en ejercicio de la Carta Plenos Poderes, suscrita el 17 de mayo del 2011 por el presidente constitucional de la república del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, por la cual “...Confiere los presentes Plenos Poderes a favor del señor economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, Director del Servicio de Rentas Internas, a fin de que, a nombre y representación de la República del Ecuador, proceda a suscribir el “Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal”, durante la Segunda Ronda de Negociaciones para evitar la doble tributación, a realizarse en la ciudad de Montevideo, entre los días 24 y 26 de mayo de 2011...”, documento en el cual consta “Refrendado Ricardo Patiño Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración”, evidenciando por lo tanto su concordancia formal con la Constitución y la normativa citada.

Control material

El contenido del “Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal”, estructurado por su temática en 4 partes: 1) General: Preámbulo, Capítulo I Ámbito de aplicación del convenio y Capítulo II Definiciones; 2) Específica.- Capítulo III Imposición de las rentas, Capítulo IV Imposición del patrimonio, Capítulo V Métodos para eliminar la doble imposición y Capítulo VI Disposiciones especiales; y 3) Operativa: Capítulo VII Disposiciones finales y Protocolo adjunto al convenio, se sujeta al siguiente examen de compatibilidad con la Constitución de la República del Ecuador:

1.- TEMÁTICA GENERAL

PREÁMBULO.- Consagra que Estados contratantes han arribado a “concluir un Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal”.

CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO.- Determina que el instrumento se aplica a “personas residentes de uno o ambos Estados contratantes” (Art. 1); en relación a los “Impuestos sobre la renta y sobre el Patrimonio” (Art. 2.1), que “graven la totalidad de las rentas o del patrimonio o cualquier parte de los mismos” (2.2), siendo aplicable para el Ecuador en los “impuestos actuales” esto es en el “impuesto a la renta de personas naturales” y en el “impuesto a la renta de sociedades y cualquier otra entidad similar” (Art. 2.3.a), así como en aquellos impuestos “que se establezcan con posterioridad” debiéndose comunicar dentro de noventa días “las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones” (Art. 2.4).

CAPÍTULO II DEFINICIONES GENERALES.- Determina significados para: “Ecuador” (Art. 3.1.a), “Uruguay” (Art. 3.1.b), “Estado contratante” (Art.3.1.c), “persona” (Art. 3.1.d), “sociedad” (Art. 3.1.e) “empresa” (Art. 3.1.f), “empresa explotada por un residente” (Art. 3.1.g), “tráfico internacional” (Art. 3.1.h), “autoridad competente” que significa “En el caso del Ecuador, el Director General del Servicio de Rentas Internas” (Art. 3.1.i), y “nacional” (Art. 3.1.j), y determina como regla de interpretación que “cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá...el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado...”(Art. 3.2).

Establece los significados para “residente” (Art. 4.1) con sus reglas para “cuando una persona natural o física sea residente de ambos Estados” (Art. 4.2.) y el “procedimiento de acuerdo mutuo por resolver el caso” (Art. 4.3).

Indica el significado de “establecimiento permanente” (Art. 5.1) en especial las: “sedes de dirección” (Art. 5.2.a), “sucursales (Art. 5.2.b), “oficinas” (Art. 5.2.c), “fabricas” (Art. 5.2.d), “talleres” (Art. 5.2.e), “minas” (Art. 5.2.f); que comprende asimismo a: “una obra o proyecto de construcción...si su duración excede de seis meses” (Art. 5.3.a) y “la prestación de servicios ...que en total excedan de seis meses, dentro de un periodo cualquiera de doce

meses” (Art. 3.b); pero que no comprende el uso de instalaciones de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa cuando se destine con el fin de: “almacenar o exponer” (Art. 5.4.a), “depósito” (Art. 5.4.b), “sean procesadas por otra empresa” (Art. 5.4.c), o se mantenga un “lugar fijo de negocios” para: “actividad de carácter auxiliar” (Art. 5.4.d) y “conservar su carácter” (Art. 5.4.e) Señala que no obstante lo anterior, cuando una persona actúe en un Estado contratante en nombre de una empresa del otro Estado contratante “se considerará que esa empresa tiene establecimiento permanente” (Art. 5.5) si esa persona tiene: “poderes para concertar contratos” (Art. 5.5.a), “mantiene en el Estado existencias de bienes o mercaderías que utiliza para entregar” (Art. 5.5.b).

Determina que “no se considera que la empresa tiene establecimiento permanente” en el caso de que realice actividades por medio de “un corredor, comisionista general, agente o cualquier otro mediador que goce de estatuto dependiente” (Art. 5.6).

Estatuye que los “reaseguros” se consideran establecimiento permanente “si recauda primas en el territorio de ese Estado o si asegura contra riesgos situados en el” (Art. 5.7).

Indica que se considerará que esa empresa tiene establecimiento permanente por “el hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante”.

Vistas las disposiciones del Preámbulo, Capítulo I Ámbito de aplicación del convenio y Capítulo II Definiciones del Convenio, estas resultan compatibles con la Constitución de la República del Ecuador, que:

Consagra como un deber estatal, por una parte, garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos constitucionalmente y en instrumentos internacionales y por otra parte resguardar la soberanía nacional (artículo 3 numerales 1 y 2), puesto que el presente convenio estatuye beneficios tributarios que han sido asumidos voluntariamente por el Estado ecuatoriano en ejercicio de su soberanía a través de una Ronda de Negociaciones que ha concluido con la suscripción del presente instrumento.

Determina el principio de legalidad o reserva de ley tributaria, el mismo que partiendo de la condición de que se requiere de ley para crear, modificar o suprimir tributos (artículo 132

numeral 3 primera parte), se concreta específicamente en la iniciativa del Presidente de la República para presentar proyectos en materia impositiva ante la Asamblea Nacional que aprueba una ley para establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos (artículos 135 y 301 primera parte), puesto que el presente convenio es aplicable actualmente sólo al impuesto a la renta de personas naturales y sociedades normado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI (Título I, Capítulos I a XI, Arts. 1 a 51), mas no al impuesto al patrimonio que no se encuentra actualmente previsto en la legislación ecuatoriana.

Tanto más que para la doctrina especializada los problemas de la doble imposición que se pretende evitar a través del presente instrumento internacional únicamente se presentan en los impuestos directos que gravan la producción de riqueza (como el impuesto a la renta en el Ecuador), mas no en los impuestos indirectos que gravan el consumo (como el impuesto al valor agregado en el Ecuador), ya que “...Es evidente que estos problemas de la doble imposición sólo son susceptibles de presentarse en el campo de los impuestos directos, aquellos que pasan a incrementar las arcas fiscales de los diversos países, mediante una relación económica directa e inmediata ente el sujeto económico que paga el impuesto y la soberanía fiscal que lo cobra. Los impuestos indirectos son aquellos que afectan a los consumos, pero no a la producción de la riqueza, y dan lugar a problemas tales como la traslación de los impuestos, pero nunca a la doble imposición...”.

Por esta razón se justifica que el que el presente convenio se circunscriba actualmente al impuesto a la renta en el caso ecuatoriano, pues nuestro ordenamiento interno no prevé el impuesto al patrimonio cuya instauración les corresponde a las Funciones Ejecutiva y Legislativa de la República del Ecuador, siempre que los estimen oportunos y convenientes para el interés nacional. En este sentido se precisa que la referencia al impuesto al patrimonio en el presente convenio bilateral con la República del Uruguay no genera la imperatividad de crearlo, sino que en caso de que sea instaurado entrará al ámbito de aplicación del convenio mediante la notificación respectiva.

2.- TEMÁTICA ESPECÍFICA CAPÍTULO III IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS.-
Determina que: las rentas de “bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en ese otro Estado” (Art. 6.1) siendo aplicable a “los bienes

accesorios” (Art. 6.2) a la “aparcería” (Art. 6.3) y a “inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales” (Art. 6.4).

Dispone que los “beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente podrán someterse a imposición en ese estado.

3 El impuesto al patrimonio (que grava el patrimonio del contribuyente) no debe confundirse con la declaración de patrimonio que las personas naturales deben efectuar de forma anual conforme el Art. 40A de la LORTI y en el Art. 69 de su Reglamento cuando el total de activos de la persona supere los USD 200.000 y en caso de sociedad conyugal o unión de hecho cuando supere los USD 400.000.

4 Marta Castro Farías, “La Doble Imposición Internacional”, en “Memorias de Licenciados Derecho Internacional Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 255.

Estado” (Art. 7.1); que en “cada Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios” (Art. 7.2) para lo cual “se permitirá la deducción de gastos” (Art. 7.3) pero no por “la simple compra de bienes o mercancías para la empresa” (Art. 7.4), beneficios que “se calcularan cada año utilizando el mismo método” (Art. 7.5) y que pueden regularse “separadamente en otros artículos” (Art. 7.6).

Establece la regulación específica para: el transporte marítimo y aéreo (Art. 8); las empresas asociadas (Art. 9); los dividendos (Art. 10); los intereses y las regalías (Art. 12); las ganancias de capital (Art. 13); los servicios personales independientes (Art. 14); la renta del trabajo independiente (Art. 15); las remuneraciones o participaciones de consejeros o directores (Art. 16); los artistas y deportistas (Art. 17); las pensiones (Art. 18); las funciones públicas (Art. 19); los estudiantes (Art. 20); y otras rentas (Art. 21).

CAPÍTULO IV IMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO.- Regula que el patrimonio constituido por “bienes inmuebles” (Art. 22.1), “bienes muebles” (Art. 22.2) bajo ciertas reglas “pueden someterse a imposición en ese otro Estado”, mas no a “buques o aeronaves” que “solo puede someterse a la imposición en este Estado” (Art. 22.3) así como “los demás elementos de patrimonio que posea un residente” (Art. 22.4).

CAPÍTULO V MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN.- Establece que cuando un residente de un Estado contratante obtenga que “puedan someterse a imposición en el otro Estado mencionado” (Art. 23.1) admitirá la “deducción en el impuesto sobre la renta (Art. 23.1.a) y la “deducción en el impuesto sobre el patrimonio” deducciones “que no podrán exceder de la parte sobre el impuesto a la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción” (Art. 23.1.b).

Regula que cuando las rentas o el patrimonio “estén exentos de imposición en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre el resto” (Art. 23.2).

Señala que estos beneficios se orientan por “normas encaminadas a promover el desarrollo económico” (Art. 23.3), en el caso específico de Ecuador según “Artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, respecto de la exoneración del Impuesto a la Renta para las inversiones nuevas y productivas” (Art. 23.3.a.i) y “Artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, respecto a la reducción a la tarifa del Impuesto a la Renta en el caso de reinversión de utilidades” (Art. 23.3.a.ii).

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES ESPECIALES.- Establece como postulados de la “no discriminación” que los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo “que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado” (Art. 24.1), que los establecimientos permanentes “no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable” (Art. 24.2), que no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante “a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración de su estado civil o cargas familiares” (Art. 24.3), que serán deducibles los intereses, regalías y demás gastos “en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del Estado” (Art. 24.4); que las sociedades poseídas o controladas por residentes del otro Estado contratante “no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos” (Art. 24.5), y “no obstante las disposiciones del Artículo 2, las disposiciones del presente Artículo son aplicables a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación” (Art. 24.6).

Regula respecto a la “limitación de beneficios” que todos los beneficios se aplican “únicamente si dicha persona satisface los requisitos... y cumple con las demás condiciones de este Convenio” (Art. 25.1); que una persona cumple con los requisitos: si es una “entidad gubernamental” (Art. 25.2.a); si es una “sociedad constituida en uno de los Estados contratantes” (Art. 25. 2.b) cuando: “cotiza en una bolsa de valores” (Art. 25.2.b.i), “el 50% de los derechos de voto o del valor de las acciones sea propiedad directa o indirecta de una o más personas físicas residentes” (Art. 25.2.a.ii); o si es “una institución de beneficencia u otra entidad sin fines de lucro que se encuentre exenta para efectos fiscales” (Art. 25.2.c); tomándose en consideración que un residente de otro Estado contratante “tendrá derecho a los beneficios del Convenio si la autoridad competente del otro Estado contratante determina que dicho residente lleva a cabo activamente actividades empresariales” (Art. 25.3); para lo cual para la negativa de desgravación fiscal “los Estados contratantes se consultarán mutuamente” (Art. 25.4).

Vistas las disposiciones del Capítulo III Imposición de las rentas, Capítulo IV Imposición del patrimonio, Capítulo V Métodos para eliminar la doble imposición, y Capítulo VI Disposiciones especiales, estas son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador que:

Consagra que en el régimen de desarrollo se debe partir garantizando a la soberanía nacional para impulsar la inserción en el contexto internacional que contribuya a la paz y sistema equitativo mundial (Art. 276 No. 5).

Establece que el Estado promoverá el régimen de inversiones mediante regulaciones específicas que se orientará con criterios productivos, tecnológicos y de equilibrio regional y sectorial, estando la inversión extranjera sujeta al apego al marco jurídico regulatorio nacional y orientada a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (Art. 339).

El presente convenio garantiza la soberanía del Estado ecuatoriano, busca evitar que a las personas naturales y jurídicas, empresas y sociedades del Ecuador y del Uruguay, inclusive los establecimientos permanentes, se les imponga una doble imposición, con lo cual se dinamiza las relaciones comerciales e incentivan las inversiones recíprocas entre los dos países, propugnado el desarrollo equitativo y el equilibrio económico para los Estados contratantes y los beneficiarios de la implementación del convenio.

Tanto más que para la doctrina especializada “...La preocupación para solucionar los problemas de la doble imposición internacional es antigua, ya que este fenómeno encierra una injusticia intrínseca y una falta de racionalidad. En determinado momento se observó que la imposición duplicada trababa la actividad mercantil, obstaculizaba la inversión internacional y las vinculaciones entre los pueblos. Los esfuerzos por solucionar el problema se encaminaron entonces por solucionar el intercambio y la inversión internacional...5”. La relación entre el régimen tributario y el régimen de inversiones productivas se plasma en la Ley Orgánica de Régimen Tributario, LORTI, que en el artículo 9 numeral 1 determina que: “Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión”; en el artículo 31 dispone de forma puntual, tratándose de los ingresos de las compañías de transporte internacional, que: “Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas con o sin domicilio en el Ecuador, estarán exentas del pago de impuestos en estricta relación a lo que se haya establecido por convenios internacionales de reciprocidad tributaria, exoneraciones tributarias equivalentes para empresas nacionales y para evitar la doble tributación internacional”; y en el artículo 37 establece que las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas “que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen...utilicen para su actividad productiva... para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establecerán en el Reglamento a la presente Ley” (lo cual ha sido desarrollado en el artículo 12 del Reglamento a la LORTI y precisado en el artículo 40 numeral 11 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención que establece que se incluirá en los comprobantes de retención como información “Cuando corresponda, el convenio internacional para evitar la doble tributación”).

En tanto que en el referido Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (RO-S- 351 del 29 de diciembre del 2010), la relación entre el régimen tributario y el régimen de inversiones se contempla en el artículo 20, que indica “En materia impositiva, las

inversiones nacionales y extranjeras estarán sujetas al mismo Régimen Tributario, con las excepciones previstas en este Código” y 5 Héctor Belisario Villegas, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Capítulo XV Derecho Internacional Tributario, Parágrafo 291 Doble Imposición Internacional, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p.612.

En el artículo 21 que señala: “Los inversionistas nacionales y extranjeros y sus inversiones están sujetos, de forma general, a la observancia y fiel cumplimiento de las leyes del país, y, en especial, de las relativas a los aspectos laborales, ambientales, tributarios y de seguridad social vigentes”.

De esto se desprende que a una inversión extranjera no se le otorga beneficios tributarios per se, sino cuando conste en una normativa nacional expresa o se encuentre contenida en un convenio internacional para evitar la doble tributación⁶, que una vez incorporado al ordenamiento jurídico interno forma parte del mismo y puede ser invocado para el efecto.

El presente Convenio con la República del Uruguay cuya aplicación es bilateral, en el cual además del caso del transporte internacional, nuevas inversiones y reinversiones productivas son expresamente previstas en el Ecuador, inclusive al caso de las rentas provenientes de: bienes inmuebles, beneficios empresariales, empresas asociadas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, servicios personales independientes, trabajo independiente, remuneraciones o participaciones de consejeros o directores, artistas y deportistas, pensiones, funciones públicas, estudiantes y otras rentas; beneficios tributarios que como se indica se circunscriben a las Repúblicas de Ecuador y Uruguay, pues su ámbito de aplicación es bilateral y no implican una obligación general del Estado ecuatoriano con la comunidad internacional, sino que opera a través del convenio para evitar la doble tributación.

Cabe señalar que el acceso a los beneficios tributarios se contempla en el convenio de una manera equitativa, igualitaria, no discriminatoria, y recíproca, razón por la cual la denominada limitación de beneficios no tiene un contenido restrictivo, sino regulador, puesto que todas las personas que cumplan con las condiciones y requisitos accederán a dichos beneficios mediante la determinación del Estado contratante correspondiente, que para negarlos debe consultar con el otro Estado contratante, lo que guarda concordancia con la Constitución ecuatoriana, que en el artículo 11 numeral 2 primer inciso consagra que: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”, en el

artículo 11 numeral 3 inciso segundo establece: “Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la Ley”, puesto que las condiciones para acceder al beneficio se encuentran establecidas en el propio Convenio y se desarrollan a través de requisitos específicos con apego al marco jurídico del ámbito de aplicación del convenio bilateral entre Ecuador y Uruguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal (tratándose del 6 Véase a manera de ejemplo que en el Convenio entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de inversiones (RO 324 de 31 de julio de 2006) el Art. 3 Tratamiento de Inversiones en el No. 4 establece “El tratamiento concedido en virtud de este artículo, no será interpretado en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversionistas de la otra Parte Contratante, deducciones, exenciones fiscales ni otros beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de un acuerdo internacional para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de tributación”.

Impuesto a la renta en el Ecuador) con lo cual se consolida el régimen tributario y el régimen de inversiones previstos constitucionalmente, que propugnan el desarrollo equilibrado de la economía productiva de los dos países.

Tanto más que para la doctrina especializada “...En la actual fase de internacionalización económica con una progresiva relevancia de las operaciones transnacionales para las economías nacionales, a nadie se le escapa la importancia de los convenios internacionales para eliminar la doble imposición (también denominados convenios fiscales), cuya utilización y aplicación permite en ocasiones una reducción significativa de la carga tributaria global a soportar por dichas operaciones económicas internacionales. En este sentido, el aumento de los convenios de doble imposición vigentes permite en su integración con la proliferación de normas tributarias internas beneficiosas un incremento notable de las posibilidades exitosas de planificación fiscal internacional”.

3) TEMÁTICA OPERATIVA

CAPITULO VII DISPOSICIONES FINALES.- Establece el “procedimiento de acuerdo mutuo” en el caso de que una persona considere que las medidas adoptadas por uno por ambos Estados contratantes “implican o pueden implicar para ella una imposición que no

esté conforme” ante la autoridad competente del Estado en que es residente o nacional (Servicio de Rentas Internas tratándose del Ecuador) que “deberá ser planteado dentro de tres años siguientes a la primera notificación” (Art. 26.1), debiendo la autoridad competente, si la reclamación le parece justificada, “y si no puede por sí misma encontrar una solución satisfactoria resolver el caso por medio de un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante” (Art. 26.2); de igual manera, las autoridades competentes “harán todo lo posible por resolver, por medio de un acuerdo amistoso, cualquier dificultad o duda que plantee la interpretación o aplicación del presente Convenio” (Art. 26.3), para lo cual podrá conformarse una “comisión mixta” (Art. 26.4)

Regula el “intercambio de información” (Art. 27.1), la misma que “será mantenida secreta o reservada...y sólo se revelará a la personas o a las autoridades encargadas de la liquidación o recaudación de impuestos... Dichas personas o autoridades solo utilizarán esta información para estos fines” (Art. 27.2); no obligándose al Estado contratante a: “Adoptar medidas contrarias a su legislación” (Art. 27.3.a), “Suministrar información que no se pueda obtener” (Art. 27.3.b), y “Suministrar información que revele secretos comerciales” (Art. 27.3.b); debiendo el Estado contratante “recabar la información” (Art. 27.4) aun cuando se encuentre “en poder de bancos-otras instituciones financieras, o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria” (Art. 27.5).

7 Francisco Alfredo García Prats, “El uso indebido de los convenios fiscales”, en Foro. No. 3, Revista del Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2004, p. 45.

Señala que los Estados contratantes “se prestarán asistencia mutua en la recaudación de sus créditos tributarios” (Art. 28.1) a ser cobrados cuando sean de “naturaleza exigible” (Art. 28.2), y recaudados “de acuerdo a lo dispuesto en su legislación” (Art. 28.3), pudiéndose “En virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares” (Art. 28.4), pero dicho crédito “no estará sujeto en ese Estado a la prescripción o prelación aplicables a los créditos tributarios conforme a su Derecho interno” (Art. 28.5), ni podrá “incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del otro Estado contratante”(Art. 28.6), regulando el caso de cuando “el crédito tributario dejara de ser” (Art. 28.7) y que este procedimiento no obligará al Estado contratante a: “Adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación” (Art. 28.8.a), “Adoptar medidas contrarias al orden público” (Art. 28.8.b), “Suministrar asistencia cuando el Estado contratante no haya aplicado razonablemente todas la medidas” (Art.

28.8.c), “Suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese Estado esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio “(Art. 28.8.d).

Finaliza con las regulaciones propias para “miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares” a quienes “no se afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten” (Art. 29); con las “disposiciones misceláneas” en las que no se precisa que la suscripción del convenio “no limita de ninguna manera las facultades de determinación y control de que en función de su legislación interna le corresponde a las autoridades competentes” (Art. 30.1) ni faculta a utilizarlo para que “otorguen beneficios no contemplados” (Art. 30.2); y con las “disposiciones finales” en cuanto a la “entrada en vigor” cuando “se han cumplido los requerimientos legales y procedimientos internos exigidos en cada Estado” (Art. 31).

PROTOCOLO.- Regula respecto de “gastos y deudas que son reconocidos como deducibles por la legislación interna” (No.1); así como “la relación entre una empresa de un Estado contratante respecto de una empresa del otro Estado contratante” (No.2).

En el tema de “la información que solicite sea de su interés, razonable y necesaria para la determinación del impuesto o de un ilícito tributario” (No. 3.a), dispone que “un intercambio de información será realizado una vez el Estado requirente haya agotado todos los recursos” (No. 3.b), sin que ello impida “intercambiar información de manera automática espontánea” (No. 3.c), y señala el procedimiento que “para dar trámite a una solicitud de información la autoridad competente del Estado requirente deberá proveer” (No. 3.d): “identidad de la o las personas” (No. 3.d.i), “periodo de tiempo” (No. 3.d.ii), “detalle de la información solicitada” (No. 3.d.iii), “propósitos tributarios” (No. 3.d.iv), “domicilio de cualquier persona que se estime tenga en su poder la información requerida” (No. 3.d.v).

Sobre el asunto de “proporcionar la información en la forma requerida, en la misma forma en que pueda ser obtenida de conformidad con la legislación” (No. 3.e), regula “utilizar todos los medios legales y desplegar sus mejores esfuerzos para ejecutar una solicitud...remitir su respuesta en el plazo de ciento ochenta días...En caso de imposibilidad del cumplimiento del plazo...indicando la fecha presumible” (No. 3.f).

Establece que el intercambio de información “los Estados contratantes establecerán -de mutuo acuerdo- un procedimiento específico para tal efecto” (No. 3.g); que la información

obtenida “tendrá la validez legal que las leyes del Estado requirente les otorgue” (No. 3.h); y que las solicitudes “deberán ser tramitadas conforme al procedimiento... hasta la culminación del proceso” (No. 3.i).

Señala finalmente que en el tema de la asistencia de recaudación de impuestos “se aplicará a partir del momento que las autoridades competentes de los Estados contratantes lo acuerden, en el marco de un memorando de entendimiento” (No. 4).

Las disposiciones del Capítulo VII Disposiciones finales y del Protocolo adjunto son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador que:

Determina el rechazo a que las controversias privadas se conviertan en conflictos entre Estados (Art. 416 No. 12); prohíbe entre el Estado y personas naturales y jurídicas privadas la cesión de jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales y comerciales (Art. 422 inciso primero); autoriza entre países signatarios la solución de controversias por instancias arbitrales regionales u órganos jurisdiccionales (Art. 422 inciso segundo); puesto que el convenio establece un procedimiento para la solución de controversias que no implica cesión de jurisdicción sino que acude a acuerdos amistosos para solucionar la reclamación lo que guarda concordancia con la Constitución ecuatoriana que consagra el derecho de petición (Art. 66 No. 23) y los métodos alternativos de solución de conflictos basados en la conciliación (Art. 190).

Establece como principios del régimen tributario a la eficiencia, transparencia y suficiencia recaudatoria (Art. 300), puesto que el convenio y protocolo prevén la asistencia en la recaudación de créditos tributarios a través de un procedimiento que se ciñe a la legislación interna se procura que el Estado contratante obtenga los ingresos para financiar los gastos de la administración y provisión de servicios públicos que son de responsabilidad del Estado (Art. 314).

Señala como derecho de las personas a la protección de los datos de carácter personal y al secreto que protege cualquier forma de comunicación (Art. 66 No. 19) puesto que el convenio y el protocolo establecen un procedimiento de intercambio de información con respecto a la privacidad de los datos sensibles de las personas, que solo pueden ser proporcionados con fines tributarios.

Tanto más que para la República del Ecuador no se configuraría actualmente el intercambio de información sobre el impuesto al patrimonio, puesto que en la legislación ecuatoriana no se prevé dicho impuesto (sino únicamente una obligación declarativa anual) con lo cual se evita el riesgo de una eventual mala utilización de esta información.

Conclusiones sobre la constitucionalidad del convenio y protocolo examinado

El “Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal” y su “Protocolo” requiere de aprobación legislativa para su ratificación, al contener un instrumento relativo a la convivencia pacífica internacional para la armonización legislativa, cooperación e integración comercial y económica (artículo 419 de la Constitución ecuatoriana numeral 3 sobre el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, y numeral 6 respecto de los acuerdos de integración y de comercio) sin evidenciar en su contenido contrariedad con disposición constitucional alguna.

El presente instrumento guarda conformidad con los postulados constitucionales de las relaciones internacionales que procuran: la igualdad entre los Estados para la cooperación, integración y solidaridad (Art. 416 No. 1), el cumplimiento de las obligaciones asumidas en instrumentos internacionales (Art. 416 No. 7), el reconocimiento del derecho internacional como norma de conducta (Art. 416 No. 9), el fortalecimiento de las relaciones internacionales horizontales en el orden global y regional (Art. 416 No. 10), la integración de la Región Andina, América del Sur y Latinoamérica (Art. 416 No. 11) y el fomento de un sistema de comercio e inversión entre Estados solidario, justo, transparente y equitativo (Art. 416 No. 12); así como con los principios constitucionales de la integración latinoamericana que propugnan: la integración económica, equitativa y solidaria mediante una política económica internacional común y de compensación para superar asimetrías (Art. 423 No. 1), la progresividad y no regresividad en los procesos de armonización de legislaciones nacionales entre los países latinoamericanos (Art. 423 No. 3), y la consolidación de instrumentos internacionales de integración (Art. 423 No. 7).

Tanto más que el presente instrumento internacional consolida la posición jurídica de la República del Ecuador, que ha implementado los siguientes Convenios para evitar la doble tributación: con los Países del Grupo Andino (RO 743 del 17 de febrero de 1975); con

Argentina (RO 235 del 04 de mayo de 1982); con Alemania (RO 493 del 05 de agosto de 1986); con Brasil (RO 865 del 02 de febrero de 1988); con Italia (RO 407 del 30 de marzo de 1990); con Francia (RO 34 del 25 de septiembre de 1992); con España (RO 253 del 13 de agosto de 1993); en materia de Regalías y Derechos de Autor (RO 565 del 10 de noviembre de 1994); con Rumania (RO 785 del 20 de septiembre de 1995); con Suiza (RO 788 del 25 de septiembre de 1995); con México (RO 281 del 09 de marzo del 2001); con Canadá (RO 484 del 31 de diciembre del 2001); con Chile (RO 293 del 16 de marzo del 2004); con Bélgica (RO 312 del 13 de abril del 2004); con los Países del Acuerdo Subregional Andino (RO –S- 457 del 09 de noviembre del 2004).

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el período de transición, emite el siguiente:

DICTAMEN

1. El “Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal” y su “Protocolo” adjunto, al constituirse en un instrumento relativo a la convivencia pacífica internacional para la armonización legislativa, cooperación e integración comercial y económica, conforme a los numerales 3 y 6 del artículo 419 de la Constitución de la República del Ecuador, debe someterse a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional.
2. Las disposiciones contenidas en el “Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Ecuador para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal” y en su “Protocolo” adjunto guardan armonía con la Constitución de la República del Ecuador; en consecuencia, se declara su constitucionalidad.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario General (e).

Razón: Siento por tal, que el dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinargote, Nina Pacari Vega, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia del doctor Edgar Zárate Zárate, en sesión extraordinaria del día jueves quince de diciembre del dos mil once. Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario General (e).

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: f.) Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 9 de enero del 2012.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

CAUSA 0022-11-TI

Razón: Siento por tal, que el dictamen que antecede fue suscrito por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles veintiocho de diciembre del dos mil once. Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario General (e).

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: f.) Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 9 de enero del 2012.- f.) Ilegible.- Secretaría General.